



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Dirección de Planeación y Desarrollo
Centro de Información Económica - Social de Bogotá
CIEB
BIBLIOTECA

Dos siglos de crisis del poder político

Autor:

J. Alberto Navas Sierra
Bogotá, abril de 1990

Entidades patrocinadoras:

Cámara de Comercio de Barranquilla
Cámara de Comercio de Bogotá
Cámara de Comercio de Bucaramanga
Cámara de Comercio de Cali
Confecámaras
Proantioquia

Siglo **XXI**

A MANERA DE PRÓLOGO

En los últimos cuarenta años del siglo XX, desde el 25 de mayo, los latinoamericanos hemos vivido una época de cambios. A partir del año 1959 Bolivia y Ecuador iniciaron las etapas emancipatorias de independencia política. Un año más tarde, en su orden, Venezuela, Argentina y Colombia hicieron lo propio. Con la excepción de Cuba y Puerto Rico, en los años siguientes los restantes países de la América española dejaron de ser colonias de la corona.

CONTENIDO

Página

I. A manera de prólogo	1
II. Algunas hipótesis de trabajo	3
III. Algunas cifras e indicadores	5
IV. La antidiálectica del desarrollo y la modernidad	7
V. Antiguo y nuevo régimen	9
VI. ¿Revolución o guerra de independencia?	11
VII. Un temario para el futuro	53

Anexo

Biblioteca -CIEB-

Nº 7234

No. Inventario

Fecha Ingreso

18	10	96
DIA	MES	AÑO

Precio \$ 2.000 = No. Ejemplares 12

I. A MANERA DE PROLOGO:

En los albores mismos del Siglo XXI, dentro de 19 años, los antiguos países hispanoamericanos tienen una cita importante con la historia. A partir del año 2009 Bolivia y Ecuador iniciarán los actos conmemorativos del bicentenario de su independencia política. Un año más tarde, en su orden, Venezuela, Argentina y Colombia habrán de hacer lo propio. Con la excepción de Cuba y Puerto Rico, en los años siguientes los restantes países de la que fuera la América española deberán acometer dicha efeméride.

En el caso de América Latina, doscientos años de "independencia" política constituyen de por sí algo más que una mera oportunidad en la que, como será de rigor, habrán de recordarse los grandes acontecimientos y ensalzar los próceres que, en conjunto, singularizaron el magno acontecimiento independentista regional, y en particular del entonces virreinato de la Nueva Granada.

Esta fecha especial significará por el contrario una irrepetible ocasión para que cada uno de los países hispanoamericanos, en especial Colombia, proceda para entonces a efectuar una profunda reflexión sobre lo que ha sido, después de 200 años, la ya larga experiencia "independentista" vivida por tales países.

El presente colombiano no es en general ni feliz, ni justo, ni próspero. Tampoco lo ha sido su pasado republicano. Su futuro, por todo ello, parece ser hoy, a las puertas del Siglo XXI igualmente incierto e indescifrable. Las dramáticas circunstancias históricas, de toda índole, dentro de las cuales se habría procesado la formación de la nacionalidad colombiana, en las que los difíciles momentos actuales serían apenas un ejemplo más de dicho proceso, parecen constituir de por sí un alentador precedente para que el país efectúe un profundo esfuerzo autorreflexivo sobre su pasado reciente y su futuro cercano.

La inminente fecha del bicentenario de la independencia hispanoamericana está ya precedida de dos efemérides similares: el bicentenario de la independencia de las antigua trece colonias anglosajonas de Norteamérica —1976— y el bicentenario de la Revolución Francesa —1989— exponentes primogénitos del gran ciclo revolucionario dentro del cual resulta inevitable referir el complejo proceso independentista hispanoamericano. Las experiencias vividas, y desde luego los resultados finales exhibibles por unos y otros acontecimientos, distan explícitamente de ser homologables. Menos mencionado, pero igualmente significativo para el caso hispanoamericano, resultará el próximo y coetáneo bicentenario de la llamada "Guerra de Independencia" española de 1808-14, marco obligado de referencia dentro del cual tuvo lugar el nacimiento de los nuevos estados americanos.

La comunidad internacional muy seguramente espera desde ya que para entonces, año 2009 en adelante, los países hispanoamericanos habrán de aportar al menos una explicación propia —e incluso justificación— de lo que ha sido, e igualmente dejado de ser, su presencia en la historia contemporánea durante los últimos 200 años. De esa historia que nace precisamente para el común de los historiadores occidentales después de 1789, y frente a cuya vertiginosa marcha, para bien o para mal, no pudieron escapar las antiguas colonias españolas en América.

Todo indica pues que Hispanoamérica, y desde luego la actual Colombia, tendrían necesariamente que "repensar" su historia en el corto período (apenas 19 años) que ahora media para tal esfuerzo.

De no aceptarse este llamado, con todo lo que ello parece suponer, dos penosas consecuencias habrían de imponerse para el país y la región: o bien otros, finalmente extraños a nuestra propia identidad y experiencia histórica, asumen —con buena o mala intención— la tarea de descifrar nuestro más reciente pasado, o bien Colombia e Hispanoamérica tendrían que iniciar su tercer siglo de existencia, seguramente no menos tormentoso, sin contar para ello con una mínima claridad respecto de un pasado confuso y errático. Difícilmente países como los hispanoamericanos podrán asumir con responsabilidad, imaginación y audacia suficientes la tarea, igualmente histórica, que aparece estarles reservada en el próximo milenio, sin contar para ello con una mínima reflexión sobre su más reciente, y aún remoto, pasado nacional. Tal es el poder y las luces de la historia por tantos años olvidada en nuestro medio.

El presente documento tiene que ver, antes que nada, con el reto inevitable de "repensar la historia nacional" colombiana, esto es aquella que nace con el proceso emancipador neogranadino a comienzos del siglo pasado. Consecuentemente aspira a constituirse en una de las muchas invitaciones posibles y disponibles para "repensar el

futuro" del país. De igual manera no pretende abarcar ahora la totalidad de los aspectos involucrados en 180 años de vida política autónoma. Escasamente se referirá aquí uno de los múltiples incisos relacionados con uno de los tantos temas que parecen constituir el meollo de lo que aquí habrá de llamarse la "antidialéctica del desarrollo y la modernidad" a que bien pudo estar llamada Colombia a partir de la consolidación de su independencia política a comienzos del siglo pasado.

Ninguna otra razón o justificación superior había estado implícita en el logro de la libertad y emancipación entonces pretendidas, que no fuera la búsqueda de la "felicidad", la justicia y la armonía de la Patria, tal cual se pregonaba en tales momentos. El éxito o fracaso relativo en tales propósitos independentistas, constituyen el éxito o fracaso "relativo" de la sociedad contemporánea colombiana. Ese éxito o fracaso "relativo" lo sería tanto interna como externamente. Lo primero en la medida en que serían muy pocos, siempre pocos, los beneficiarios del progreso y la modernidad eventualmente alcanzados por el país, cosas que tienen que ver muy directamente con los ideales de libertad y justicia desde un comienzo pretendidos. Lo segundo, en cuanto otros países, otras naciones, compañeras de Hispanoamérica y de Colombia misma en su lucha revolucionaria, habrían logrado situarse, dentro de un período prácticamente igual, en el cénit de ese progreso y modernidad contemporáneos. Esto último tendría que ver, igualmente y en buena medida, con los ideales de justicia, igualdad y fraternidad que a nivel internacional formaron parte esencial de la nueva ideología y práctica revolucionarias que guiaron el antepenúltimo gran proyecto político de occidente.

El tema del presente documento tiene que ver pues con los orígenes, concepto y vigencia del "poder político" que supuestamente se impone en nuestro medio a partir del "hecho" de la emancipación nacional, concepto y práctica los cuales finalmente habrían de ser los responsables últimos del éxito o fracaso en el logro del desarrollo y modernidad a que pudo estar llamado el país. No sería otro el análisis que podría igualmente adelantarse respecto de aquellas otras sociedades que nacieron, un poco antes que las hispanoamericanas, al concierto de la nueva sociedad que se configura en occidente a partir del último cuarto del Siglo XVIII.

Conforme a los propósitos del "proyecto prospectivo Colombia, Siglo XXI", esta primera versión del presente documento recoge y sistematiza algunas hipótesis de reflexión y debate, libremente ordenadas a título de "ensayo" sobre el tema en cuestión. Por tales motivos, se ha obviado encuadrar este texto dentro de una estructura o contenido estrictamente histórico, referido a fuentes documentales o bibliográficas específicas que, como tales, podrían desviar, hacia otro tipo de polémica, los propósitos del análisis aquí propuesto.

El autor desea hacer expreso reconocimiento de las invaluable contribuciones recibidas de parte de su esposa Véronique Conesa de Navas durante la elaboración y revisión del primer original. De igual manera el interés, crítica y cordiales discrepancias aportadas por doña Pilar Moreno de Angel. Unos y otros conceptos y precisiones garantizaron al mismo buena parte de sus eventuales méritos. De manera especial, desea el autor manifestar su agradecimiento al Doctor Nicolás del Castillo por su estricta lectura y crítica de la presente versión, cuyas generosas observaciones enriquecieron sobremedida el texto definitivo del presente texto.

Bogotá, febrero 19 de 1990.

II. ALGUNAS HIPOTESIS DE TRABAJO

La discusión del tema propuesto exigiría plantear previamente algunas hipótesis elementales del mismo. Estas podrían ser las siguientes:

1. La historia propiamente hispanoamericana nace en 1809, esto es cuando una a una las ocho antiguas colonias españolas^{1/} comienzan sus respectivos movimientos emancipadores. Antes de estos sucesos, la historia hispano-americana es estrictamente española. A partir de estas fechas independentistas, tanto la nomenclatura político-económica, como la historia misma de occidente se expande y diversifica en virtud de los nuevos estados hispanoamericanos en formación, lo cual concluirá con su pleno reconocimiento internacional luego de 1822, cuando la unión colombiana fuera reconocida por los Estados Unidos de América como el primer estado hispanoamericano^{2/}.

La crítica histórica contemporánea ha dejado de recoger la alta ponderación que tuvo en su momento el hecho mismo del nacimiento político de los nuevos estados americanos. Por los Tratados de París y Versalles —1783— las principales potencias imperiales europeas en conflicto (Gran Bretaña, Francia y España), además de reconocer la independencia de Norte América, firmaron la paz entre sí mismas. A partir de entonces el "mundo" —obviamente visto desde el ojo egocéntrico europeo— volvió a distinguirse nuevamente entre "Viejo" (Europa) y "Nuevo" (Norte América e Hispanoamérica) mundos. El caso concreto hispanoamericano permitió a George Canning —el primer ministro inglés que tanto tuvo que ver con el reconocimiento de los nuevos estados de la región— exclamar ante el parlamento inglés, al momento mismo de protocolizar el aludido reconocimiento: "... Yo llamé el Nuevo Mundo a su existencia para restablecer el balance en el Antiguo Mundo".

2. Como en alguna forma ya se advirtiera, la independencia hispanoamericana y más aún la independencia del antiguo virreinato de la Nueva Granada, no constituyeron hechos aislados y menos todavía, hechos únicos en la historia occidental. Dichos acontecimientos mal que bien se encuadran dentro de la dinámica revolucionaria que caracterizó fundamentalmente el último cuarto del Siglo XVIII y el primer cuarto del Siglo XIX. De una forma u otra, Hispanoamérica y la Nueva Granada, en menos de 20 años terminarían involucradas dentro del último ciclo dialéctico del Siglo de las Luces, o de la razón, que habría de llevar en occidente, tanto a la entronización ideológica del liberalismo como a su inmediata consecuencia, la democracia. Lo primero mediante la apropiación o titulación del poder político, económico y social en la nueva clase, auténtica y exclusiva protagonista del movimiento ilustrado, la burguesía. Lo segundo, mediante el ascenso paulatino de la última de las clases surgidas con la generalización de la revolución liberal e industrial, el pueblo.

3. No le correspondió pues a esta parte del Imperio español de entonces, asumir posición alguna de liderazgo o innovación, ni teórica, ni pragmática, dentro de la aludida dinámica occidental. Fueron las antiguas trece colonias anglosajonas del norte de América, quienes habrían de iniciar en 1776 el gran ciclo revolucionario —si como tal puede caracterizarse dicho acontecimiento— que cambiaría paulatinamente la fase política, social y económica de todo el occidente. Trece años luego Francia habría de encarar la más radical de todas las experiencias revolucionarias contemporáneas. En el otro extremo americano de experiencias y resultados —bien palpables en la actualidad— el llamado Santo Domingo francés, Haití, doce años después, 1801, sería la segunda experien-

1/ Atendiendo el tipo de organización y la forma de relacionamiento colonia-metrópoli a finales del Siglo XVIII, estas eran: Cuatro virreinatos: Nueva España (México), Nueva Granada (hoy Colombia, Panamá y Ecuador), Perú (hoy Perú y parte de Bolivia) y el Río de la Plata (hoy Argentina, Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia) y cuatro capitanías generales, que aunque dependientes de un virreinato dado, gozaban de hecho de plena autonomía político-administrativa: Cuba (Cuba, Puerto Rico y Floridas), Guatemala (actual Centro América con la exclusión de Panamá), Caracas (hoy Venezuela y parte de Guayana) y Chile (hoy Chile y parte de la original Bolivia).

2/ En realidad fuimos el tercer estado en toda la América en ser reconocido como tal. Primero lo fueron los Estados Unidos (1783), luego lo fue Haití (1801) y a continuación la Gran Colombia (1822); más tarde lo serían México, Argentina, Chile y los restantes países, excepto Cuba que sólo lo sería en 1902 y Puerto Rico que jamás lo sería.

cia revolucionaria —independentista en esta lado del Atlántico. Ocho años más tarde el proceso emancipador llegaría a tierra firme. Del extremo sur al extremo norte, el resto del continente americano se vincularía al referido proceso revolucionario, el cual por su peso o "masa crítica" (extensión y población), a partir de ese momento llegaría a ser plenamente "occidental". Esto último habría de llegar a convertirse en un elemento fugazmente importante en el conjunto de la política internacional occidental y mundial, conforme se planteará más adelante.

4. No haber sido los primeros y no haber estado solos en la generación de la dinámica socio política que determinaría la ruptura del último ciclo de la historia mundial, significó muchas cosas para la América Hispánica y finalmente para occidente mismo. Esto último no ha sido aún suficientemente ecuacionado, ni siquiera reconocido como tema válido de debate. El no ser Hispanoamérica, y menos aún la Nueva Granada, los primeros protagonistas de tal dinámica de ruptura histórica, llegaría a significar al menos dos cosas: por una parte, fueron las ideas, la experiencia, el método y los recursos externos los que habrían de primar finalmente en la marcha del proceso independentista hispanoamericano. En segundo lugar, una proporción importante del mundo occidental (no menos del 61% del espacio continental y no menos del 8% de la población, respectivamente, ver anexo), quedaba desde ese momento a la saga de una nueva fase histórica mundial.

5. Sólo un gran esfuerzo de replanteamiento estratégico regional habría podido invertir los condicionantes de una independencia que de por sí nacía dependiente en su ideología y en su praxis, con sus inevitables consecuencias en lo económico y social. Salvo algunos esporádicos intentos^{3/} dicho esfuerzo regional no se dio. Por el contrario, conforme es de explícito reconocimiento, el fraccionamiento decadente del bloque hispanoamericano fue, a partir de los inicios mismos de su independencia, un proceso irreversible de pérdida de posición e influencia continental y mundial, tal cual ha llegado a ser en la actualidad la magnitud del atraso relativo de la región.

6. Este agudo proceso de reversión y pérdida crónica de poder e influencia continental y mundial por parte de Hispanoamérica, no parece aminorarse en un futuro cercano. Más bien por el contrario, Hispanoamérica —y en general América Latina, con la excepción parcial del Brasil— parecía abocada a un estado de atraso crítico-relativo, cada vez de naturaleza y proyección más profundas. La dinámica de la evolución regional, global e individual, resultaría ser menos que proporcional o directa a la vertiginosa marcha de los demás estados occidentales, dos de los cuales, Estados Unidos y Francia, antecederon en pocos años la pretendida transformación revolucionaria e independentista hispanoamericana.

7. La dinámica actual de la historia occidental, finalmente mundial, no parecería estar en condiciones de tolerar por muchos más años esta condición de atraso y desfase del desarrollo y modernización hispano y latinoamericana. Graves augurios podrían suponerse para la región —y sus países— de continuar esta creciente e intolerante asincronía histórica. Por una parte, como ya es palpable en varios campos —tecnológico, comercial y financiero, principalmente— nuevos y sofisticados sistemas de dependencia y subordinación tendrán que ser asumidos en Latinoamérica, los mismos que poco ayudarían a la superación del aludido desfase. Por la otra, serían de esperar inevitables, múltiples y poco convencionales respuestas "compensatorias" por parte de la región, fruto de la dependencia, subordinación y atrasos comentados. La subversión armada y violenta, el narcotráfico y las diversas formas de terrorismo local e internacional, serían ya buenos y claros indicadores al respecto.

3/ La Gran Colombia —1821/1830— las Provincias unidas de Centro América —1823/40— o la fugaz Confederación Peruano-Boliviana —1835/36.

III. ALGUNAS CIFRAS E INDICADORES

En 1776 Hispanoamérica representaba no menos del 57% del espacio territorial occidental y no menos del 8.7% de su población. Al comienzo de la gran unión colombiana de 1821, si bien había empezado a perder territorio frente a los Estados Unidos^{4/} constituída algo más del 52% del espacio occidental, y su población representaba el 4.3% respecto del total hemisférico. Al final de la ilusión Grancolombiana, dichas tasas eran apenas similares. Para comienzos del presente siglo, Hispanoamérica poseía apenas el 27.8% del espacio occidental, y a pesar de sus progresos demográficos, representaba tan solo el 7.6% de la población occidental. En 1987, cuando Mijael Gorbachof inicia las grandes reformas del bloque soviético que parecen llevar a la conformación, una vez más, de una sola Europa, Hispanoamérica tan solo representaba el 17.2% del espacio occidental, aunque su población prácticamente llegó a constituirse en el 18.1% de todo el occidente.

La experiencia de las Trece Colonias anglosajonas ha sido bien diferente. Al momento del inicio de su guerra de independencia, su reducido espacio continental era apenas del 4.5% del territorio occidental. En 1822 era ya el 9.2% y en 1850 el 15.4% proporción que se ha mantenido hasta el presente. Por su parte, su población era en 1776 no más del 1.3% de todo el occidente, pasando a ser del 2.6% en 1800 y de 7.9% cuando se creó la Gran Colombia. Para 1850 es del 7.2% proporción que se incrementará al 14.2% a comienzos del presente siglo, para situarse actualmente en el orden del 17%.

Si los datos anteriores hubiesen de ser referidos exclusivamente al orden continental americano, en 1776 el mundo hispanoamericano ocupaba 12.3 veces más espacio físico en América que los nacientes Estados Unidos, todavía las antiguas Trece Colonias anglosajonas. La población norteamericana era a su vez casi 7 veces inferior al resto de Hispanoamérica. Cuando se inician las guerras de independencia hispanoamericanas, si bien la proporción del espacio físico continuaba siendo 7 veces superior, la población de las colonias españolas "rebeldes" tan solo aventaja a la norteamericana en 3 veces. Al final de la Gran Colombia, Hispanoamérica apenas supera territorialmente a los Estados Unidos en 5,8 veces y por vez primera su población es apenas un 0.66% de la norteamericana^{5/}. Para comienzos del presente siglo Estados Unidos ocupaba 1.8 veces menos de espacio continental respecto de Hispanoamérica, pero su población era 1.7 veces a la de esta última. Para 1987, comienzo de la era Gorbachof, Hispanoamérica apenas aventajaba territorialmente a los Estados Unidos en 1.2 y su población era prácticamente igual.

Los datos anteriores comparativos no sólo podrían ser de orden puramente geopolítico. Las universidades se fundaron en Hispanoamérica un siglo antes que en Norteamérica y la ventaja, cuantitativamente al menos, se mantuvo para aquella hasta el comienzo de la independencia de las colonias españolas^{6/}. Para 1800 la ciudad de México era la primera y más poblada urbe de toda la América y quizás la octava más populosa de todo el occidente. Para 1930, Estados Unidos tenían no menos de 9 ciudades con más de 500 habitantes y no menos de 6 ciudades con más de un millón de personas. Latinoamérica en conjunto no tendría más de 3 y 5 urbes, respectivamente.

4/ Cesión por España de la Luisiana a Francia y por ésta a los Estados Unidos —1803—, como también posterior Tratado trascontinental de 1819 entre España y los Estados Unidos por el cual aquélla cedió a éstos las dos Floridas.

5/ Por fuera de los sesgos de error estadístico de una u otra parte, no dejaría de estar reflejándose en estas cifras dos hechos muy propios de cada coyuntura: el despoblamiento ya significativo producido por las largas y cruentas guerras de independencia en toda Hispanoamérica —no sólo muertes, sino también el éxodo notable de peninsulares— como a su vez la ya notable expansión demográfica norteamericana, tanto interna como fruto de la emigratoria europea postnapoleónica.

6/ Universidad de Santo Tomás en Santo Domingo en 1538 y Harvard en Massachusetts en 1636. A fines del sSglo XVII existían sólo dos universidades en los Estados Unidos contra las 12 que había en Hispanoamérica. Al finalizar el Siglo XVIII probablemente había en la América Hispánica 35 universidades contra 10 u 11 de los Estados Unidos.

Las cifras y consideraciones anteriores ponen de manifiesto la realidad última del marco histórico que antecedió y continuó existiendo después de las guerras de independencia norte e hispanoamericanas. Poseedora la América hispánica de una ventaja relativa de orden continental y por consiguiente llamada a asumir una posición hegemónica americana y con el tiempo de tipo mundial, vino a ser bien pronto, conforme ya se ha mencionado, no sólo una región cada vez menos importante internacionalmente, sino un conjunto de países o estados crónicamente rezagados de toda oportunidad de pleno desarrollo político, económico y social.

Un doble desequilibrio internacional parecería reflejar esta asincronía hispanoamericana, y finalmente latinoamericana: por una parte, la polarización indiscutida e irresistible de un único poder hegemónico en el norte de la América, los Estados Unidos, que con el tiempo habría de decidir la suerte no sólo de occidente sino del planeta entero. Por la otra, la incapacidad igualmente crónica hispanoamericana para lograr, luego de casi doscientos años de vida independiente, unos niveles relativamente aceptables de desarrollo y modernidad autóctona y viable por sí misma.

La ruptura "revolucionaria" cayó en todo el occidente, pero sin efectos iguales. Las contradicciones no son las mismas, ni en calidad ni en cantidad. La experiencia mundial muestra que de manera diferente en cada caso. Sin embargo la "libertad", el "bienestar", la "prosperidad", la "solidaridad" son los objetivos. La "razón", la "liberación", la "modernidad" son los métodos. La "libertad" será el bien supremo, la expresión última de la capacidad y la plenitud individual y colectiva. La "razón", la "liberación", el "bienestar", la "solidaridad" —en sus respectivos— son todo lo necesario o ideal del nuevo "orden" que la humanidad puede alcanzar en este profético estado de su evolución.

El "espíritu europeo" imperial —todo lo que la Europa del antiguo régimen era o significaba— murió en América. Pero Europa volvió en un nuevo espíritu, se volvió libre e independiente. Este nuevo Espíritu está igualmente expuesto a morir, porque nada garantiza que cuando este programa lleva las leyes nuevas de su asentamiento. La diferencia básica no es individualmente superadora. Porque el ser humano, con una esencia misma de cambio y superación. No es posible, o difícil, el mundo americano que surge de la ruina de Europa. Lleva implícita en su imperfección contraria, que surge de su misma naturaleza individual, un sentimiento de desahucio, de protesta, de rebeldía que heredó de su más reciente, Europa. Sólo la experiencia de liberación y desarrollo de cada "espíritu del pueblo" que sobrevive en América, dominando su propia América, América es lo "nuevo" y como tal —Mundo Nuevo— está siempre en formación. Sus contradicciones internas —su conflicto— serán su destino. Las relaciones, según de su espíritu, determinarán que un día sea los Amigos Mundo o Amigos Regimes como del país del cual se viene la América.

El mundo del Imperio en Norte América, luego en Europa y más tarde en Hispanoamérica tratan que reflejar un nuevo tipo de sociedad y de cultura occidental. Bajo el arte europeo la realización del legado tradicional y legado europeo que sirvió de base para dicho Imperio. Sin embargo, la estructura que debía construir sobre el desarrollo occidental sólo se ha perfeccionado en Norte América y en Europa misma. Hispanoamérica, América Latina, se ha quedado al margen de dicho perfeccionamiento. Su destino, su perfeccionamiento de que depende su futuro futuro y más complejo, contra lo que a todo el continente. A pesar del desarrollo espectacular norte americano y europeo ya mencionado, esto no se ha perfeccionado el continente que, en tanto Hispanoamérica se sigue reorganizando en total libertad, en tanto Hispanoamérica se va definiendo e imaginando su destino.

Las nuevas contradicciones surgidas en la lógica del desarrollo post-industrial europeo-americano habrían estado ya por donde un desarrollo, pero con la forma y contenido como cada nueva nación americana tubo diferentes, o simplemente internacionalmente la estructura de su formación —su estructuración de la estructura social— como con la forma y contenido de su propio perfeccionamiento externo, tanto internamente (dentro de Norte América y dentro de Hispanoamérica, internamente (dentro y fuera América) y estructuralmente, en un mundo América Europa luego América resto del mundo.

Las contradicciones y relaciones hispanas son muy diversas en Norte América y en Hispanoamérica y en el mundo. América Latina, como en lo que corresponde a su desarrollo como cultura externa. El mundo de la "libertad" del "bienestar" del "bienestar" internacional se trata de forma estructuralmente divergente en uno y otro contexto. La "libertad" personal del Norte América a los hispanoamericanos producirá una nueva sociedad con el futuro de nueva libertad, cultura y existencialismo. A esto contribuirá desde el presente momento la cultura

IV. LA ANTIDIALECTICA DEL DESARROLLO Y LA MODERNIDAD

Estos simples parámetros cuantitativos podrían enmarcar finalmente todo el planteamiento de la aquí llamada "antidialéctica del desarrollo y la modernización". La aprehensión concreta de la historiografía occidental parece señalar claramente como a mediados del Siglo XVIII los intereses, necesidades y aspiraciones de las colonias de América entran en definitivo conflicto y contradicción con los que a su vez podían caracterizar a las tres grandes metrópolis europeas, Gran Bretaña, Francia y España. Los enfrentamientos de unas y otras llevarán finalmente a la pérdida de sus principales posesiones americanas, ya no en favor de las mismas, sino muy por el contrario permitiendo y estimulando el nacimiento de los nuevos estados americanos. Más aún, a partir de la primera de tales resultantes, los Estados Unidos de Norte América, el concepto y práctica del "poder" político empezará a cambiar sustancialmente en todo el mundo. Un proceso de reversión de efectos a causa determinará un cambio significativo en las dimensiones culturales, sociales y en último término políticas de todo el universo, proceso que apenas ahora podría estar empezando a ser plenamente planetario.

La ruptura "revolucionaria" cunde en todo el occidente, pero asincrónicamente. Las contradicciones no son las mismas, ni en calidad ni en cantidad. La experiencia histórica previa pesa de manera diferente en cada caso. Sin embargo, la "felicidad", el "bienestar", la "prosperidad", la "solidaridad" son los objetivos. La "razón", la "idea", el "espíritu", la "naturaleza" son los medios. La "libertad" será el bien supremo, la expresión máxima de la superación y la plenitud, individual y colectiva. La "Patria", la "Nación", el "Estado", la "ley positiva" serán las concreciones —encarnaciones— de todo lo abstracto o ideal del nuevo "orden" que la humanidad puede pretender en este próximo estadio de su evolución.

El "espíritu europeo" imperial —todo lo que la Europa del antiguo régimen era o significaba— muere en América. Pero Europa renace en un nuevo espíritu, la América libre e independiente. Este nuevo Espíritu está igualmente expuesto a morir, porque toda evolución, todo cambio, todo progreso lleva las leyes mismas de su agotamiento. La dinámica histórica no es individualmente imperecedera. Dejaría de ser historia, ésta como sinónimo de cambio y superación. No es puro, o estático el mundo americano que nace de la muerte de Europa. Lleva implícitas en su imperfección concreta, que surge de su misma naturaleza individual, un sinnúmero de contradicciones, las mismas que heredó de su raíz vivificante, Europa. Sólo la experiencia, la formación y desarrollo de cada "espíritu del pueblo" que finalmente se forme en América, determinará su curso y duración. América es lo "nuevo" y como tal —Mundo Nuevo— está apenas en formación. Sus contradicciones internas —sus conflictos— serán su dinámica. Las soluciones, síntesis de su espíritu, determinarán que un día sea tan Antiguo Mundo o Antiguo Régimen como del paño del cual se formó la América.

El triunfo del liberalismo en Norte América, luego en Europa y más tarde en Hispanoamérica tendrían que reflejar un nuevo tipo de sociedad y de cultura occidental. Sólo así sería perfecta la realización del legado racionalista e lustrado europeo que sirvió de base para dicha transformación. No obstante, la dinámica que desde entonces movió el desarrollo occidental sólo se ha perfeccionado en Norte América y en Europa misma. Hispanoamérica, América Latina, se ha quedado al margen de dicha transformación. Su desfase, su alejamiento de esa dinámica occidental ha creado nuevas y más complejas contradicciones a todo el occidente. A pesar del desarrollo espectacular norte americano y europeo ya alcanzado, éste no se ha perfeccionado ni concluido aún, en tanto Hispanoamérica no logre equipararse en tales logros, en tanto Hispanoamérica no sea definitiva e inequívocamente occidental.

Estas nuevas contradicciones surgidas en la lógica del desarrollo postcolonial europeo-americano habrían tenido que ver desde un comienzo, tanto con la forma y contenido como cada nueva nación americana hubo enfrentado o solucionado internamente la dinámica de su formación —las contradicciones de la herencia colonial— como con la forma y contenido de su mutuo relacionamiento externo, tanto intraregionalmente (interior de Norte América e interior de Hispanoamérica), intracontinentalmente (Norte y Sur América) y extracontinentalmente, en un comienzo América-Europa, luego América resto del mundo.

Las experiencias y resultantes históricas son muy diversas en Norte América y en Hispanoamérica y si se quiere Latino América, tanto en lo que corresponde a su dimensión interna como externa. El manejo de la "herencia colonial", del viejo espíritu metropolitano se trató de forma extremadamente divergente en uno y otro contexto. La "continuidad pragmática" del Norte permitirá a los anglonorteamericanos producir una nueva sociedad con el mínimo de ruptura histórica, interna y externamente. A ello contribuirá desde el primer momento la misma

metrópoli inglesa. No acontecerá igual cosa en el sur donde la "incapacidad pragmática" de los hispanoamericanos, obsesionados con una "ruptura histórica" total de su ascentro colonial, terminarían bien pronto replicando interminablemente las mismas contradicciones —vicios— internos y externos que llevaron a su metrópoli al agotamiento y fin de su poderío mundial. A ello contribuirá igualmente la España de Carlos IV y Fernando VII.

Después de 180 años, la historia no parece haber empezado aún en Hispanoamérica. Todo intento de progreso, acorde con los cimientos de su revolución constitutiva estarían anulándose en sí mismos. Por eso la historia tampoco parece tener fin en Hispanoamérica. El poder, siempre privilegiado en unos pocos, se hace y se deshace. Los gobiernos se integran y desintegran en luchas intestinas. Todo es particular, singular acaso, poco es general o global, que no sea la inconsecuencia y trashumancia de opiniones e intereses sin horizonte fijo. La dominación externa se intenta y no logra nunca ser plena. Todo se repite, todo pasa sin trascendencia ni afinidad por unas mismas coordenadas. Las escalas de valores se amplían, pero igual se retrotraen a su origen. Las generaciones van y vienen, mueren y se reencarnan en un espacio sin tiempo. Hispanoamérica es la historia sin espíritu ... o casi peor el espíritu sin historia. Puesto que la esencia última del espíritu es conocerse a sí mismo, sin el cual no hay, no puede haber progreso. Este autoconocimiento —realización de la razón práctica, esto es el "ahora" y el "aquí" de un pueblo— no es posible sin la libertad plena. El progreso a su vez no es otra cosa que la capacidad final de un pueblo para reproducirse en algo siempre nuevo y superior, material, moral o estéticamente. Esto es ser, esto es hacer historia.

Hispanoamérica no ha sido, ni antes ni después de su independencia política, plenamente libre. Por eso la "razón", la "idea" ha estado ausente de todo, por ello no ha habido nunca autoconocimiento proyectivo en un espacio que para la misma ha sido cada vez más reducido o frente a un tiempo siempre retrotraído al pasado. En Hispanoamérica no se hace, se deshace la historia día a día. Por todo esto no hay, no puede haber progreso y menos aún modernidad. ¿Hasta cuándo será ello posible?

El auto conocimiento de un pueblo empieza y se concreta en torno a un intenso debate en torno a su historiografía. Tal es el objeto de las siguientes páginas.

V. ANTIGUO Y NUEVO REGIMEN

Siendo todo concepto y medida de atraso una categoría relativa, cualquier reflexión que se desee intentar al respecto tendría que efectuarse simultáneamente bajo una doble dimensión, histórica y comparativa. Esto último respecto de uno o varios referentes que permitan explicar las resultantes presentes de la realidad en cuestión. Tal vez esto define por sí mismo el propósito implícito de "repensar a Colombia" repensando su historiografía más reciente.

Para muchos historiadores y críticos —no filósofos o ensayistas— de la realidad hispanoamericana y colombiana en especial, el origen más cercano del atraso relativo nacional estaría asociado con el "contenido" y "forma" que caracterizó el proceso mismo de la llamada guerra de independencia, el cual dio origen a los respectivos estados de la región. La consecuencia última de dicha hipótesis suponía el surgimiento de un nuevo estado de cosas, muy diferente con la realidad que optó por sustituir.

Evitando la más común de las tentaciones anacrónicas en este tipo de análisis, es preciso adelantar el mismo dentro de los conceptos y categorías semánticas de la época. Lo que la ideología y la acción política de finales del Siglo XVIII y comienzos del XIX se proponían era ciertamente la sustitución del llamado "Antiguo Régimen", del absolutismo monárquico y de la sociedad estamental que lo sostenía.

El "Nuevo Régimen" suponía pues la erradicación de las formas y sistema de poder hasta entonces reinantes en occidente, causantes ellas del atraso general de la humanidad. Dicho proceso, revolucionario en su origen y esencia, debía ser encarado al menos por una de las nuevas clases prepotentes, el llamado Tercer Estado o burguesía, antes que por el "pueblo" mismo. Tanto uno como otro —burguesía y pueblo— eran dos entidades plenamente difusas e inestructuradas al inicio de la contienda revolucionaria de finales del Siglo XVIII. Sin embargo, uno y otro grupo nacen y ascienden en la escala de sus pretensiones, casi siempre como uno de los varios e inevitables subproductos que dejaban tras de sí el agotamiento del llamado Antiguo Régimen. "Clase" en contra de "estamento", "pueblo" (con minúscula) o "cuarto estado" como algo ajeno y particular a la hasta entonces noción de "Pueblo" —con mayúscula— o conjunto de siervos y dependientes que engloba un reino y que usufructuaban nobleza y alto clero. Burguesía y Pueblo cristalizarán una alianza finalmente circunstancial y voluble, inestructurada tanto como lo era cada cual internamente, para encarar la doble y no menos incierta tarea de acabar con lo establecido y entronizar un nuevo orden. La polarización estamental en torno al trono (dinastías, nobleza y alto clero) como la unión de las nacientes clases —burguesía y pueblo— produciría la ruptura política, social y finalmente económica que daría paso a la llamada edad contemporánea. Monarquía y Absolutismo, República y Liberalismo, "tiranía" y "felicidad" en la jerga de unos y otros, definirán la marcha de los acontecimientos que llevará en occidente a la sustitución del antiguo por el Nuevo Régimen.

"Revolución" no podía ser otra cosa para los pro-hombres de finales del Siglo XVIII que la sustitución, el tránsito obligado de un antiguo a un nuevo orden de cosas. Todo lo anterior, fue tan solo "rebelión", subversión, motín o asonada. Revolución fue entonces eso: la consolidación de un Estado en vez de un reino, aquel como la personificación de "una sola" Nación, antes que de un solo "Pueblo", libre, igual y fraterno, con derechos y prerrogativas similares frente a la propiedad y sus beneficios, como a su vez la opción para cada cual de encarar por igual el poder (representación), el gobierno (administración), la justicia y la defensa (ejército) de su sociedad.

"Libertad" fue lo primero y lo esencial al "nuevo régimen", "igualdad" su consecuencia y "fraternidad" su necesidad. Había que deshacer todos los vínculos de la trama estamental. Nadie debía pertenecer ni depender de otro ser, fuera éste rey, noble u obispo. Era al fin el rompimiento del nexo con el pasado, de todo lo que ya quedaba en medio de tanto institución, reglamento, gabelas, privilegios, tradición, costumbre o mera inercia. Deshecho cualquier vínculo al respecto, siendo "todos" libres necesariamente tenían que ser los mismos hombre iguales entre sí. Esto último, al menos formalmente. Siendo libres e iguales los miembros de cada sociedad, correspondería por parejo a todos ellos constituir "solidariamente" el nuevo Estado de cosas, definir y decidir el tipo de poder y organización que les regiría. Todo esto estaba dicho y pregonado, amplia y públicamente, a expensas mismas del Antiguo Régimen, por los filósofos y publicistas que desde mediados del Siglo XVII, venían difundiendo tales "máximas" revolucionarias. Revolución no fue necesariamente sinónimo de violanecia. Muchos fueron los estadios y dimensiones de la revolución del XVII. La más importante de todas, la ideológica, la cual fue pacífica en sus orígenes y manifestaciones. Violenta llegó a ser su implementación, su praxis y jacobina en función de la toma del poder total.

La posibilidad de concretar dichos propósitos sólo fue finalmente posible en Francia mediante el derrocamiento de la monarquía y la nobleza^{7/}. Sólo entonces nace el concepto contemporáneo de "Soberanía". Por una parte, por tal se entendió desde entonces, el derecho "común y general" para "constituirse" como Pueblo o Nación y otorgarse el pacto social o político —Constitución— que debía de regir el nuevo estado de cosas, conformado el tipo de poder y gobierno deseados. Por la otra, la manifestación expresa de una voluntad y capacidad colectivas para defender dicho Estado, personificado en éste último el derecho exclusivo de un Pueblo o Nación entera sobre un territorio plenamente demarcado "derecho de defensa" éste ejercido tanto contra sus eventuales enemigos o amenazas externos como contra quienes internamente quisiesen o pretendiesen desconocer el orden común de cosas adoptado.

Las "Guerras Revolucionarias" francesas, continuadas por Napoleón, no sólo serían la respuesta defensiva del Nuevo Régimen contra la agresión coaligada del resto de la Europa monárquica, como la impronta del llamado utópico, implícito en todo esquema revolucionario, para extender los efectos "liberadores" y redentores de la experiencia en cuestión. Cada fusil revolucionario no sólo defendía lo ya conquistado internamente, sino que pregonaba y estimulaba la replicación fuera de Francia de la revolución que los animaba. El Imperio Napoleónico será el intento efímero de crear, a través de las armas revolucionarias, esa "Gran Nación" europea, legado superior del Nuevo Régimen francés que así aspiraba a convertirse en continental, sueño el cual habrá de concretarse en 1992 luego de un complejo proceso consenso y negociación que requirió más de 200 años de espera.

La Restauración borbónica de 1814 fue posible respetando la esencia del Nuevo Régimen creado tras la sedimentación revolucionaria que se perfeccionó con el "episodio" napoleónico. La Europa postnapoleónica será la expresión última de la hegemonía del Tercer sobre el Cuarto Estado, de la Burguesía sobre el pueblo llano.

Solamente un siglo después, este último habría de asumir el protagonismo en la lucha y control excluyente del poder político, ya no sólo occidental sino mundial, tal cual las revoluciones socialistas del presente siglo. Una nueva ideología, no ya la dialéctica idealista del XIX, sino la dialéctica materialista del XX, servirá de fundamento a esta nueva marcha de la humanidad, dinámica surgida de las contradicciones internas del liberalismo y del capitalismo que había encarnado la burguesía decimonónica.

7/ Luis XVI tuvo siempre la opción, y más de uno de los dirigentes revolucionarios —Condorcet el más connotado— estuvieron sugiriéndole al oído encarnar una alianza con la burguesía, asumiendo el liderazgo del nuevo régimen. De todas maneras pasarán casi tres años y medio entre el primer estallido revolucionario y el ajusticiamiento de dicho monarca, lo cual antes que por motivos puramente ideológico-revolucionarios se debió al sinnúmero de torpezas cometidas por dicho monarca a partir de la convocatoria de la Asamblea de Notables —1787— hasta su precipitada huida hacia Alemania (1791).

VI. ¿REVOLUCION O GUERRA DE INDEPENDENCIA?

Sin embargo, la experiencia vivida en el mundo colonial americano, inglés, español, francés, portugués y holandés tiene necesariamente que enmarcarse dentro de otro contexto histórico e ideológico. Es punto común de la historiografía del tema hipersimplificar la entidad del llamado "Antiguo Régimen" absolutista imperante en Europa en lo que respecta a sus posesiones coloniales. Sea que se suponga que el mismo comprendía sólo la realidad metropolitana y excluía sus apéndices coloniales como entidades sui-géneris estructuradas y regidas por unos principios y mecánica propios. Sea que a su turno se considere lo colonial como un elemento más del antiguo régimen metropolitano, englobando lo ultramarino dentro de los atributos adicionales de la corona y reino respectivo, y para el cual se repetían en forma singular la organización y manejo político de la metrópoli en cuestión.

La independencia de las trece colonias anglosajonas de Norteamérica, y posteriormente la independencia de las colonias hispanoamericanas, plantearon desde sus inicios una inevitable controversia y por ende una compleja disputa ideológica y programática que aún perdura sin solución aparente. La no continuidad de los dos grandes procesos revolucionarios americanos por una parte, como a su vez la notable divergencia de los 2 grandes procesos revolucionarios europeos —Revolución Francesa y Guerra de Independencia española^{8/}— que conciernen tan directamente al caso hispanoamericano, hace más compleja e insoluble la aludida polémica.

A. El modelo inglés

En primer término, el mundo colonial anglosajón en América, como apenas sería obvio esperarlo, fue estructurado y manejado de acuerdo a la tradición y experiencia política inglesa. Conforme está ampliamente reconocido, la realidad inglesa —británica si se prefiere— ha constituido siempre una realidad ajena y exclusiva respecto del resto del orden europeo continental. Reclaman sus historiadores y publicistas de antes y de hoy, el mérito de haber efectuado 140 años atrás una revolución del orden y trascendencia que después reclamó excluyentemente para sí la Francia de la Gran Revolución. A mediados del Siglo XVII el "episodio Cromwelliano" habría logrado una radical transformación de la estructura del poder político inglés sin sacrificar finalmente la institución y tradición monárquica inglesa. Se habría operado pues un tránsito, aunque violento y temporal, de un antiguo a un nuevo régimen inglés, de una vieja a una nueva monarquía inglesa.

En efecto, si bien en 1649 se ajustició a un rey —Carlos I— la posterior restauración monárquica once años después, habría satisfecho las necesidades y pretensiones de una de las más fuertes y ambiciosas burguesías europeas (junto a la holandesa) del momento. Dicha "revolución" habría además permitido el acomodo, relativamente equitativo, del ejercicio, más no del poder político inglés, entre los dos estamentos tradicionalmente detentadores del mismo —rey y nobleza— por una parte, y la irresistiblemente poderosa clase de la burguesía comercial y pre-industrial, por la otra.

Esta simbiosis entre antiguo y nuevo régimen, expresión máxima del reconocido pragmatismo inglés, garantizaría, tal cual aconteció a partir del suceso cromwelliano, el predominio económico y político inglés a nivel mundial. El cuarto estado o pueblo llano, debería esperar, sin mucha impaciencia y por 200 años más su oportunidad, sino de conquista sí de compartir el poder político como en su momento lo lograra la nobleza frente a la monarquía (Carta Magna de 1211) y luego la burguesía frente a la nobleza y monarquía (rebelión de Cromwell de 1649-60 ya referida).

8/ No es común, por el contrario es apenas fortuito encontrar incluida la Guerra de Independencia española de 1808 como suceso revolucionario paralelo y casi coetáneo a la Revolución Francesa. No obstante, las peculiares circunstancias en la cual se desarrolló dicha guerra, los condicionantes internos y externos que la acompañaron, los mismos que terminarían anulando su pretendido carácter revolucionario, hace que en general la historiografía del caso la excluya como fenómeno típicamente revolucionario de la época en cuestión. Largo y cruento será el proceso político español para culminar, apenas durante las últimas décadas, la revolución entonces iniciada, la cual por lo demás fue auténtica y exclusivamente liberal.

En estricto sentido para la crónica dieciochesca, los acontecimientos ingleses del Siglo XVII no fueron propiamente una revolución. A pesar del carácter violento y "pequeño terror" producido, el antiguo régimen lejos de desaparecer, simplemente se transformó y dinamizó con la incorporación real y efectiva de la burguesía. Se redistribuyó el usufructo o ejercicio del poder político, repartiendo entre mayor número de detentadores sus beneficios con ganancias relativas para todos, incluso para el estado llano no protagonista activo en dicha contienda -el pueblo-, aliado a proporciones iguales con el monarca, los nobles y la burguesía, según su origen e intereses.

Por tales razones el concepto de "poder" soberano, como atributo y ejercicio no se desarticuló en la Inglaterra del Siglo XVII, como tampoco se había desarticulado antes en el Siglo XIII. El "poder" como capacidad de actuar y decidir sin otra sujeción o límite que la conciencia del soberano y la conveniencia del reino, era uno y continuaba siendo uno. Como tal, residía con exclusividad en el monarca. Otra cosa había empezado a ser, desde el Siglo XIII, su "ejercicio" y pragmatidad cotidiana, lo cual en primera instancia delegaba o compartía primero con la nobleza y luego con ésta y la burguesía, y en la época contemporánea con todos los anteriores más el pueblo cuando la democracia y el pluralismo se hicieron plenos y universales en la Unión Británica. El secreto de siempre, parecía radicar en haber asegurado a unos y a otros formas y sistemas oportunos y adecuados de "representación" política o parlamentos que desde la aceptación de la Carta Magna por Juan I, estatúan el consenso y la negociación para el manejo del Estado, sin tener que modificar la naturaleza de éste, y menos aún romper —o rehacer— el pacto social o constitución primera que dio a los sajones, normandos y sus sucesores, en todas sus guerras de conquista y alianzas dinásticas, el imperio definitivo sobre las islas británicas.

Por todo lo anterior, "poder" y "gobierno" fueron y continúan siendo en Inglaterra, desde muy temprano (Siglo XIII), dos cosas completamente distintas, dos dimensiones o jerarquías muy diferentes respecto del manejo del Estado y la regulación de la dinámica social inglesa o simplemente británica. El "poder" reside indiscutidamente en el monarca. El "gobierno" o la administración del Estado puede recaer en una primera instancia en algunos de sus brazos: la nobleza *(Siglo XIII a XVII), la nobleza y la burguesía (Siglo XVII y parte del XVIII) o entre estas dos y el pueblo mismo a través de los partidos políticos institucionalizados, tal cual acontece desde finales del Siglo XVII hasta la fecha.

Desde el Siglo XVII el monarca inglés no debía ni luchar ni disputar el "gobierno", como tampoco los demás brazos debían disputar el "poder". Este consenso elemental garantizaría varias cosas a la vez: la inviolabilidad y sacrosantidad del rey o monarca, padre y señor de todos, defensor de la integridad del reino y su fé, supremo juez y el más alto jerarca de la sociedad inglesa y británica. Por la otra, el monarca se constituía, en árbitro de todos los intereses en pugna, como a su vez símbolo de la unidad y la integridad del reino. A su turno cada estamento o clase obtenía su propio sistema de "representación" para la afirmación y defensa institucionalizada de sus prerrogativas y derechos conquistados. Tal jerarquía de compromisos e intereses se ha amparado desde siempre a nivel local, regional y nacional. Lo anterior sin contrariar, antes bien "conservando" las prerrogativas históricas de cada cual, respecto de las cuales la corona es su protector permanente. El moderno parlamento inglés, luego británico, con su dos cámaras, resume la unidad y la integralidad del poder británico y sus diferentes formas de "ejercicio", cabiendo para ello, dentro de una sola institución, lo legislativo, lo judicial, y lo propiamente administrativo o ejecutivo.

No deja por ello de llamar la atención el hecho de que el primer gran texto político que pregonaría la llamada "división del poder político" en las tres ramas clásicas^{9/} apareciera precisamente en la Inglaterra a finales del Siglo XVII y que su influjo estuviera reservado a servir de modelo de los nuevos estados americanos y europeos a partir de 1776. Más extraño y paradójico resultaría luego que otro de los grandes textos pregonadores de la referida división, aparecido más de medio siglo después en Francia^{10/} en el apogeo del Siglo de las Luces, tuviera como uno de sus temas centrales la apología de la Constitución y sistema de gobierno ingleses y con ello la promoción abierta de una "monarquía moderada" —que tanta carrera haría luego en la Nueva Granada y en el resto de la América hispánica— como paso y prerequisite indispensable para la plena entronización del liberalismo político, económico y social ya en boga en la vecina Inglaterra.

9/ John Locke: "Ensayo sobre el Gobierno Civil", 1690. En realidad fue escrita en la republicana Holanda donde se había refugiado el pensador y moralista inglés.

10/ Charles de Montesquieu. "Del Espíritu de las Leyes", 1748, Libro XI especialmente.

Con su celo racionalista y formalizante amaña Montesquieu la confusión entre "poder" y "gobierno" para poder elaborar, supuestamente sobre el modelo inglés, su teoría de los tres poderes que tanta acogida tendría fuera del mundo anglosajón, particularmente en Hispanoamérica. En efecto, dentro de su modelo del gobierno mixto, y en su afán de hacer compatibles "monarquía" y "libertad política", Montesquieu asigna al "monarca moderado" el llamado "poder ejecutivo" otorgándole prerrogativas más de "poder" que de "gobierno" mismo. Reduce su estatura y función política al considerarlo como un "poder" al lado de la nobleza y el pueblo, para ascender a quienes cree consecuentemente llamados a la coadministración de un reino, aristocracia y pueblo, según cada caso.

Bajo el sistema monárquico, particularmente bajo el modelo inglés, el rey o monarca, la soberanía es algo concreto, palpable, permanente e inmanente. Es la persona del monarca, en cuya cabeza reposa la corona del reino, como en la intangibilidad de su dinastía lo que encarna la soberanía, esto es la perpetuidad de la comunidad o reino debidamente constituido en torno a él. Los atributos reales son los atributos del poder mismo, una de cuyas prerrogativas era originalmente el gobernar, últimamente delegadas o cedidas en algunos de sus "brazos".

Según el sistema contemporáneo de la monarquía "constitucional" o "moderada", la jefatura del Estado pertenece exclusivamente al rey. Son sus facultades exclusivas: la defensa exterior, el arbitrio en última instancia de la justicia, del gobierno y legislación interior y la representación exterior. Tal cual el origen de las monarquías medievales, el rey es el jefe y comandante supremo de las fuerzas armadas y responsable último de la defensa del reino o comunidad. Es él y sólo él quien declara la guerra y firma la paz. Como primera persona de su sociedad, es a él y sólo a él, a quien corresponde ser representado ante los demás gobiernos y organismos internacionales. El rey es igualmente el responsable final de las tareas de "manejo" o gobierno general del reino a través de las "funciones" o "tareas" que ha delegado, no propiamente compartido: legislativa, judicial y ejecutiva o administrativa. Por esta y no otra razón los jefes militares, jueces, embajadores, comunes y pares, lo son de la corona y actúan exclusivamente en nombre del monarca. Este y sólo éste responde permanentemente ante sus súbditos por la buena y oportuna legislación, sancionando o vetando todo proyecto normativo, convocando a elecciones generales o especiales cada vez que lo estime oportuno y conveniente, designando el jefe de gobierno adecuado, y finalmente constituyéndose en la última instancia judicial del país que debe resolver los posibles conflictos entre los súbditos-ciudadanos y entre éstos y la ley misma.

Dentro de la modalidad contemporánea de la monarquía constitucional, las funciones propias al manejo del Estado, la administrativa o ejecutiva son las únicas objeto parcial —Cámara de Diputados o de los Comunes en Inglaterra— de representación nacional y por lo mismo de disputa política a través de los partidos políticos, esto de organizaciones intermedias otorgadas en un momento dado por el monarca mismo con fines de representación electoral, común, general o nacional. La lucha político-partidista (desde 1689 en Inglaterra) se centra exclusivamente en torno a los intereses del "común" de la vida diaria. Por lo mismo los ciudadanos —todos sin excepción dentro de las sociedades democráticas y pluralistas actuales— deben concurrir a través de la representación nacional al gobierno y manejo del reino. Es a la mayoría o mayorías partidistas a quienes compete la responsabilidad y tarea diaria del "gobierno" del reino. Es a las minorías a quienes está reservado la vigilancia y controversia de tales labores de gobierno. Esta "contradicción activa" define y seculariza la marcha política del reino.

No obstante, existe una característica típica a esta última versión de las monarquías constitucionales y contemporáneas, particularmente de la inglesa, no siempre realizada. Las labores de legislación y gobierno prácticamente son una misma cosa. Siendo la una y la otra simples ejercicios de un poder delegado pero "unificado" —no dividido— lo consecuente es que estén unidas en un mismo titular. El jefe del partido mayoritario, a la vez que es el "jefe de gobierno" es el líder natural del mismo en la Cámara Popular. Su función primera —y última— no es simplemente la de "aplicar y/o "desarrollar" las leyes que otros hacen, sino muy por el contrario la de proponer, hacer aprobar y aplicar las normas generales que, como mayoría actuante, necesita para poder "administrar" el reino^{11/}. Lo que sucede a nivel general o "nacional", sucede y opera a los niveles distritales (Boroughs) y Municipios (Counties).

11/ En el sistema inglés, la presencia de la nobleza en la Cámara de los Lores, actuando, tanto en nombre y representación del monarca como de los fueros históricos que encarna, goza de atribuciones legislativas equivalentes a las del "común" para un buen número de materias, todo lo cual garantiza el equilibrio político total del reino. Es finalmente el monarca quien debe resolver, con su sanción o veto, la vigencia o no de una norma general. Es el momento donde aparece la rigidez conceptual y práctica del poder como algo distinto de su ejercicio.

Los partidos, el común, lucha pues sólo por el "gobierno" que es tanto legislar como administrar el reino. Entre tanto el "poder" y la "soberanía" permanecen incuestionados, impretendibles e inmutables en torno al monarca. Tal la conquista del pueblo que se presume poseer la mejor experiencia política de occidente, tal el modelo y precedente histórico dentro del cual se gobernaron las colonias inglesas en Norteamérica, tal el modelo que tanto apasionaría a los prohombres de la independencia hispanoamericana, en particular a Bolívar y sus seguidores, paradigma que en forma singular quiso aquel plasmar en la no siempre bien ponderada Constitución Boliviana^{12/}.

B. El modelo norteamericano

La ruptura política que da origen al nacimiento de los Estados Unidos tuvo sin embargo un origen y tradición política muy diferente. Las colonias americanas nunca fueron parte integrante de la monarquía inglesa. Su origen y conformación inicial obedeció a diferentes y nunca homologables procesos. Los primeros asentamientos fueron anteriores a la guerra civil o episodio cromwelliano. Hubo colonias de "señorío" (Baltimore, Carolinas, Pensilvania, New York y Nueva Jersey) que se concedían a una o varias personas bajo una forma de transmisión feudal. Hubo también colonias "administrativas" regidas por una sociedad mercantil o anónima (Virginia, Plymouth y Massachusetts). Sin embargo, otras pocas (Rhode Island y Connecticut) se fundaron sin documento básico, aunque luego evolucionaron hacia esta última modalidad. Sin embargo en uno u otro caso debía mediar una gracia o "concesión real". En el caso de las colonias de sociedades, tal concesión incluía la aprobación de la Carta (Charter), que no era otra cosa que los estatutos de la sociedad mercantil en cuestión, conteniendo el sistema de gobierno, estrictamente comercialista de la colonia.

La titularidad territorial de las posesiones exploradas y luego colonizadas pertenecía única y exclusivamente al monarca inglés. Ningún poder terrenal —o divino, conforme había sido el caso hispánico— le había conferido tales títulos. Su dominio nacía simplemente del "hecho imperial" mismo, el derecho de conquista o de mera anexión territorial, el derecho nacido de la fuerza irresistible de quien podía y quería colonizar. Bien fuera directamente o en su nombre y mediante concesiones a particulares —cartas de privilegio— sus súbditos efectuaban la ocupación, explotación y gobierno de territorios o bienes mostrencos internacionalmente, o bien "posesiones" cuyos ocupantes o dueños no podían o no querían resistir su despojo. Una vez más, como en el Caribe y en tierra firme, el derecho europeo que nacía en América era el derecho surgido de la fuerza, el derecho a colonizar sin otro límite que los intereses de la potencia metropolitana del caso, y más concretamente de la corona o dinastía que la asumía. Este será el contexto político-militar de las luchas interimperables del Siglo XVII y XVIII. Será también la base última, siempre implícita, de los movimientos independientistas de una y otra América: el derecho a descolonizar, a independizarse. El derecho a la libertad política, será el derecho que surja de una nueva fuerza, la fuerza anticolonial capaz de derrotar la sujeción y dominio metropolitano^{13/}.

Las "cartas" de administración coexistieron desde los comienzos con los "reglamentos" o estatutos de gobierno que se otorgaron para aquellas otras colonias que fueron asumidas como propiedad y gobierno directo de la corona. Sin embargo existe un continuado y largo proceso de implantación paralela, bajo uno u otro sistema de gobierno local, de formas tanto de "representación política" como de gobierno "democrático" propiamente tal.

En 1619, diez años después de la primera y definitiva fundación anglosajona en América, se convocó y reunió en Jamestown, Virginia, la primera "Asamblea Representativa" de Norteamérica. Se dispuso por parte de la misma Compañía —London Co.— en aras de aquietar la inconformidad de los colonos por la forma de manejo de la colonia, el derecho de los "planteadores" (de tabaco) de elegir dos "diputados" para concurrir a una "Cámara de Burgueses". Un año después la llegada y establecimiento de los peregrinos a Plymouth, engañados por sus patro-

12/ En buena forma la última constitución de la restauración borbónica de la España post-franquista reproduce con gran fidelidad los patrones contemporáneos de la Constitución inglesa, excepto en lo tocante al papel de la nobleza y su Cámara de los Lores.

13/ Resulta bien particular que en ninguno de los grandes textos de la independencia americana, del Norte y del Sur, se haya explícitamente este fundamento fáctico del "derecho a la emancipación" o de la independencia política.

trocinadores, suscriben al momento de su instalación el denominado "Pacto de Mayflower" estableciendo un auténtico gobierno democrático "directo" (Rousseau no había nacido aún) al declararse "constituidos" en desarrollo de la doctrina del Pacto Social vigente en las sectas religiosas disidentes inglesas. El nuevo gobierno sería por Asamblea quien elegiría un Gobernador el cual estaría asistido por un Consejo de Gobierno. Esta será la primera experiencia democrática pura en América.

La guerra civil inglesa de comienzos del Siglo XVII sería la gran oportunidad para el fortalecimiento de la autonomía y en buena forma la emancipación —jurídica, más no política— de las diferentes colonias anglosajonas en América. En 1634 la colonia de Massachussets consiguió su autogobierno al permitírsele el establecimiento de una Asamblea General constituida por representantes de las diferentes ciudades, como la elección de un gobernador propio asistido por un ayudante. En 1641 dicha Asamblea proclamó su primer código compuesto por 100 leyes ("Body of liberties"); en 1652, tras la ejecución de Carlos I, dicha colonia se declaró como una "comunidad plena, cuasi independiente, autogobernada y religiosa". Un ejemplo similar habían seguido la mayoría de las demás colonias. Incluso para tales fechas se había iniciado ya un primer proceso de unión y confederación. Rhode Island y Connecticut, formadas también por disidentes protestantes, en unión a otras colonias del norte y centro suscribieron en 1643 la llamada "Confederación de Nueva Inglaterra" con fines defensivos.

La restauración de los Estuardos en 1660 supuso una primera pretensión metropolitana para restablecer el control directo de las colonias. El sistema de concesiones fue entonces real y no de sociedades. Los comisionados reales, gobernadores y demás oficiales son ahora provistos directamente por el rey, lo cual cubre incluso a las originales colonias "mercantiles". No obstante, y en contrapartida el rey continuó promoviendo directamente los sistemas representativos coloniales y de autogestión local.

En 1662 se le otorgó a Connecticut su primera Carta Constitucional. Un año después Rhode Island recibe una carta similar. En 1681 Pennsylvania obtiene la propia. En 1669 las Carolinas adoptan las llamadas "Constituciones Fundamentales" que habían sido redactadas por el mismo John Locke para aquéllas, las cuales preveían un régimen plenamente feudal e inaplicable en América. En 1683 el Duque de York, hermano del rey y concesionario real de dicha colonia y Nueva Jersey, aceptan la "Carta de Franquicias y Libertades" que 17 representantes de la colonia habían redactado^{14/}. En 1691 se otorgó una nueva Carta Constitucional para Massachusetts (la original y autootorgada en 1641 había sido anulada en 1684). Para finales del Siglo XVII todas las colonias habían adoptado el sistema de gobernador y asamblea. La última de las colonias a establecerse —Georgia— en 1732 se transformó de fideicomiso en posesión real con gobierno representativo.

La revolución de 1688-89 que en Inglaterra implantará definitivamente un régimen monárquico-parlamentario y liberal-burgués, constituirá la base última para la consolidación de la emancipación colonial previa a su independencia plena bajo la dinastía de los Hanover. Sin embargo, conforme se aducirá más adelante, las diputas inter-imperiales del Siglo XVIII llevarán a la corona y parlamento ingleses a demandar de sus colonias americanas no sólo una contribución, fiscal y comercial, mucho más amplia y estricta, como una sujeción político ya incompatible con los logros institucionales coloniales. El enfrentamiento inicial con los franceses en el Norte motivó la necesidad de defensa propia colonial. En 1754 los representantes de New York, Pennsylvania, Maryland y todos los de Nueva Inglaterra suscriben la "Convención de Albany". A los mismos Benjamín Franklin redactó un "Plan de Unión" que si bien fue rechazado por las colonias, suponía la unión de tales colonias, la designación de un presidente nombrado por la Corona con un gran Consejo de Delegados elegidos por las Asambleas de cada colonia, cuerpo en cual aumiría plenas facultades legislativas para todas ellas, cuyas decisiones deberían recibir la aprobación del presidente y de la corona misma. Los demás acontecimientos preindependentistas son ampliamente conocidos: Ley de la Azúcar y Ley de Timbres, como la subsiguiente reunión del Congreso Antitimbres de New York (1765), nuevos impuestos, matanzas de Boston, el "Motín del Té" en Boston, las resoluciones de Suffolk anti-impuestos y antimetropolitanas, el Primer Congreso Continental de 1774, guerra de independencia y declaratoria de la misma en 1776, intervalo confederacionista y Constitución Federal de 1787.

14/ Esta carta la rechazará el Duque cuando asume el trono como Jacobo I.

Este largo recuento histórico sólo tiene por objeto relieves, muy resumidamente, algunos aspectos de la evolución político-institucional que caracterizó la vida colonial anglosajona en Norteamérica. Los mismos que sólo muy tardíamente serían comprendidos en Hispanoamérica tras el fracaso reiterado de los intentos federalistas que candorosamente se quisieron implantar en la América Española Republicana —muy especialmente en la Nueva Granada— a imagen y semejanza del modelo norteamericano. Características político-institucionales que aún hoy en día continúan mirándose en nuestro medio con nostalgia deificadora ante el actual atraso político, social y económico de la región.

Como es propio afirmar, la revolución e independencia Norteamericana no se conquistó ciertamente en el Siglo XVIII. La misma había sido ganada a lo largo del XVII. Unas formas selectivas de "democracia directa" se fueron implantando y arraigando rápidamente en cada colonia, y su práctica supuso un proceso de culturización cívico-político acorde con los altos niveles de alfabetización y culturización que desde siempre fue propio al menos a todos los elementos "blancos" o europeos de las respectivas colonias. La mayoría de estas conquistas democráticas serán alcanzadas en Norteamérica paso a paso con las que a su vez se conquistaban en la metrópoli inglesa (p.e., el "Habeas Corpus" de 1679 y la "Declaración de Derechos" de 1689, un siglo antes que en Francia). La práctica de la "federación" fue igualmente bien temprana en Norteamérica. La independiencía simplemente formalizará, con nombre exclusivo y propio, un poder popular auto-constituido de tiempo atrás, tal cual lo estatuido en las constituciones de las respectivas colonias, formalizando la plena y autónoma jurisdicción de normas, procedimientos y prácticas legislativas, gubernamentales y judiciales de tiempo atrás plenamente tipificadas.

Otra nota particularmente importante en la estructura del poder colonial anglosajón norteamericano está en el hecho de que las diferentes instituciones creadas allí, tendían a reproducir muy fielmente el concepto de "unidad" e "integridad" del poder monárquico de la metrópoli. No había propiamente una "división" del poder colonial norteamericano. Había igualmente una "delegación" regia para el ejercicio de las atribuciones de legislar, administrar y aplicar justicia, conforme a las circunstancias y "espíritu" colonial^{15/}. Las diferentes asambleas generales de cada colonia, a la vez que generaban una normatividad localista, decidían el gobierno y fallaban en última instancia americana, los asuntos y causas de la colonia y su pueblo. La ausencia física del monarca y el sentido de "representación" de la corona fueron evolucionando hacia un sentimiento de "representación popular" o democrática, meramente colonial. Comenzaba así a estructurarse un tipo de poder por "ficción", tal cual será luego imperioso al momento de adoptar la forma republicana y su arquitectura triada en legislativo, ejecutivo y judicial como poderes autónomos e independientes.

Sin embargo, y frente a lo que constituye el objeto último de este documento es preciso indagar sobre el carácter "revolucionario" de la independencia de las antiguas trece colonias anglosajonas. Conforme se ha dado por sentado, revolución en estricto sentido sólo existe si un nuevo régimen o estado de cosas reemplaza a un antiguo régimen o sistema político. La monarquía absolutista e ilustrada de finales del Siglo XVIII era en general la personificación de la tiranía y el despotismo. Esto parece haber sido menos claro e incidente en el caso de las colonias inglesas de Norteamérica, mucho más claro en la Francia pre-evolucionaria y desde luego extremadamente claro y simple en el caso hispanoamericano. Sin embargo, los conceptos de tiranía, despotismo y esclavitud eran también extremadamente disímiles en cabeza de los libres pensadores ilustrados, en los políticos y agitadores y finalmente en la masa del pueblo llano.

En Norteamérica la "tiranía" significó para sus primeros líderes y pensadores simplemente una coalición en la competencia y validez de la representación política a través de la cual se pretendía imponer a las colonias, desde el parlamento inglés, una serie de tributos y contribuciones respecto de los cuales los colonos mismos no habían dado su consentimiento. La lucha demagógica durante la guerra misma, confundirá tiranía y reconquista armada. En Hispanoamérica tendrá un cambio de connotación similar. Sin embargo, no parece ser que lo tiránico y despótico haya tenido que ver en un principio en la América española con la representación popular, la competencia legislativa o la misma imposición fiscal muy seguramente parece estar más directamente ligado a proble-

15/ Atribuciones de las cuales gozaron también Jamaica y Barbados.

mas meramente lugareños, tales como la forma arbitraria, represiva e inconsultada con que los peninsulares ejercían sus poderes coloniales, la ausencia de los "criollos" en cargos públicos relevantes, el no goce de los beneficios y prebendas públicas, y en último término con las posibilidades concretas e inmediatas de ascenso económico y social a través de la liberación del comercio, la agricultura, las artes y los oficios, tal cual el credo liberal-burgués cuyos beneficios habían empezado a experimentar empíricamente buen número de criollos.

Al romper sus nexos, las colonias anglonorteamericanas evidentemente produjeron una mutación y cambio sustancial en la estructura y forma del poder. Un nuevo régimen y un nuevo orden de cosas surgieron en América. De todas ellas, colonias y territorios, nació una nueva unidad. Una nueva y supranormatividad constitutiva personificó en un nuevo estado —La Unión— lo que antes era una constelación de dominios de la corona inglesa. Una soberanía, la del pueblo "norteamericano" sustituyó la soberanía real. La república reemplazó la monarquía. El poder unificado del monarca se fragmentó en tres estancos autónomos, celosos y competitivos en sus propias órbitas. La opinión pública y los partidos, asumieron la responsabilidad de garantizar la vigencia de las funciones y atributos propios de cada poder, así los demagogos y el juego de intereses locales, hicieran de cada poder un juego particular que la misma opinión y partidos debían controlar. Sin embargo se mantenía vivo lo local, lo provincial o excolonial.

Lo central o federal no era más que una gran ficción que sustituía, más precisamente compendiaaba los atributos más generales y permanentes del "poder unificado" del monarca: la legislación, el gobierno y la justicia común y general, la defensa y la representación internacional o diplomática. Lo demás era y continuaba siendo la tarea y poder —con minúscula— de lo local o colonial, ahora estadual.

No cabe duda pues que la guerra de independencia norteamericana fue el antecedente de fuerza, la concreción de una voluntad colectiva de constituir un nuevo estado, un nuevo sistema de poder y gobierno, una plena revolución.

La juridicidad —el derecho— norteamericana, como toda juridicidad o derecho que nace de la subversión o de la fuerza de resistencia a un orden establecido y legítimo —o legitimado— fue y continúa siendo de naturaleza "revolucionaria". Esto lo tendrá muy presente la Europa prerevolucionaria del momento, como la Europa de la Restauración. Los nexos que los "insurgentes" y revolucionarios hispanoamericanos mantendrían desde un comienzo con sus predecesores del Norte, será la causa para que ambas Europas recojan claras preocupaciones y temores sobre un temible amalgamiento continental de corte republicano-liberal y democrático, "cisma" o "herejía" política que bien podía poner en jaque, en un futuro cercano, la aun indiscutida hegemonía mundial del viejo mundo. Esta será una poderosa arma geoestratégica que los Estados Unidos sabrán jugar en su debido momento, particularmente a partir de 1822. Carta que jugarán excluyentemente tanto respecto de la Europa de la Santa Alianza como finalmente respecto del resto de la América, tal cual llegó a ser en el futuro inmediato la famosa "Doctrina Monroe", conforme se aludirá más adelante.

C. El modelo español

El caso de la monarquía española comparte las particularidades de todo régimen monárquico postmedieval. No obstante, la presencia imperial española en América nace con los Reyes Católicos Isabel y Fernando y como es sabido su presencia y huella americana duró un poco más de doscientos años. España fue entonces en lo político la pionera de las monarquías europeas modernas. La que mostró al resto de Europa la formación del estado postmedieval, esto es la que unificó en torno a la corona la plenitud de los poderes territoriales frente a la nobleza, la que consolidó un ejército único y poco a poco centralizó la administración de justicia en torno a sí, la que creó un sistema homogéneo de tributos, exenciones y privilegios, la que añadió a su corona la primacía regia de la iglesia cristiana-occidental, entonces una sola e individida en toda Europa, la que en fin fundó el más vasto de los imperios coloniales modernos, expandiendo la navegación y el comercio mundiales, base del poderío europeo por más de 300 años, comparada con los apenas 170 años de dominación inglesa en Norteamérica.

El descubrimiento americano es concomitante al advenimiento de la unificación dinástica en España. Dentro de la forma "federada" de reinos peninsulares, fue a la corona de Castilla a la que finalmente le correspondió no sólo la opción de dicho descubrimiento, sino su conquista y colonizaje. Cristóbal Colón, al poner pie, en nombre de Castilla en La Española, inaugura la edad moderna de occidente. El mundo se hizo esférico y el espacio tierra no pudo ser circunvalado en una u otra dirección. América, que hasta entonces había sido étnica y culturalmente

oriental, fue desde entonces occidental, efímera y exclusivamente castellana. Pocos años después —muchos en su época— fue luego portuguesa, más tarde anglosajona y francesa, más adelante holandesa y finalmente danesa y rusa^{16/}.

La desarticulación de la sociedad indígena-nativa, así como la modelación de la nueva sociedad de la que finalmente llegó a ser la América hispánica, correspondió a la corona castellana. El finalmente constituido estado español en América fue, prácticamente hasta la víspera de su independencia, totalmente castellano. Las llamadas “reformas borbónicas” primordialmente relacionadas con la forma de gobierno doméstico de cada colonia (sistema de intendencias y en alguna manera, las reformas fiscales o comerciales de fin de siglo), llegaron relativamente tarde a América y sus efectos, como se discutirá adelante fueron apenas tangenciales. Más activa y definitiva fue la lenta pero definitiva influencia socio-cultural de la ilustración borbónica que tanto papel jugarían en la génesis del proceso emancipador.

Sin embargo, muy distinta habría de ser la evolución política en la Península y en ultramar. Las condiciones particulares de cada una de las partes, como particularmente los intereses e interrelaciones que surgieron entre la metrópoli y los otros extremos de su imperio ultramarino de América y Asia^{17/} impusieron una dinámica, organización y manejo diferentes en uno y otro lado.

Sin embargo, por fuera de dichas peculiaridades, existen varias características únicas o típicas de lo que fue la monarquía española y cuya presencia e influencia fue la misma en América que en la Península. En lo que a este estudio concierne, la estructura y mecánica del poder castellano, y finalmente hispánico-borbón, es preciso reconocer varias características, cuya presencia habría luego de ser extremadamente incidente al momento de la emancipación americana, y en particular de la Nueva Granada.

Como en el caso de las monarquías homólogas de Francia e Inglaterra^{18/}, el poder del monarca español era uno e indiviso. A diferencia de sus contemporáneos más allá de los Pirineos, la vigencia y modelación del poderío real español estuvieron siempre enmarcadas dentro de una rígida vigilancia dogmática —teológica y jurídica— tanto en lo que respecta a la Península misma como en lo concerniente a su imperio ultramarino.

La suma del pensamiento escolástico recordará permanente el origen “contractualista” de una corona resurgida de una epopeya de más de cinco siglos de lucha, reconquista y repoblamiento ibérico, frente al moro invasor. Se arguirá siempre, la existencia y preminencia de un “pacto contractual”, entre la comunidad y el príncipe, pacto éste

16/ No deja de admirar hoy en día el hecho de que, si bien no queda un solo milímetro cuadrado español en América, subsisten si varias posesiones francesas, inglesas, holandesas y lo que es más significativo, norteamericanas, esto es posesiones americanas en manos de americanos (Guantánamo en Cuba, zona del Canal en Panamá, Puerto Rico e Islas Vírgenes).

17/ Es preciso recordar aquí que para finales del Siglo XV Aragón, la corona “católica” gemela, poseía un poderoso imperio mediterráneo: Sicilia y Nápoles con entrepuertos consulares que llegaban hasta Constantinopla en el mediterráneo y Flandes y puertos del mar del Norte, en el norte.

18/ Quizás debería mencionarse la corona austríaca, dado que es en torno al nieto de los Reyes Católicos —Carlos I de España y V de Alemania— en quien se unifican las coronas de Castilla y de Aragón y a partir de quien la dinastía hispánica tomaría el nombre de Austrias. A pesar del buen número inicial de cortesanos flamencos que asistieron al joven príncipe cuando vino a asumir la corona española, la influencia germana lejos estuvo de cambiar la arquitectura castellana de la corte hispánica.

de origen natural, tal cual la materialidad de la asociación comunitaria a la que está llamado todo hombre, cuando decide vivir civilizadamente^{19/}. No se asumía pues el origen divino del poder político —como si se pregonará en Inglaterra y el resto de la Europa Renacentista— sino en su esencia natural, esto es radicado en la comunidad misma. Conforme lo habían estatuido San Agustín y Santo Tomás de Aquino, se repetía entonces que mediante un pacto táctico la comunidad transfería al príncipe dicho poder “constituyéndolo” en “soberano” con todas las atribuciones que ello significaba. Mediante dicho acto de “renuncia” de soberanía por parte de la comunidad, ésta se encarnaba en el monarca y su dinastía, por lo que el “poder” y sus atributos eran algo concreto, definitivo, inminente en su presencia y ejercicio. La “soberanía” y lo que de ella se deriva, el poder, dejaba de ser consecuentemente algo ficticio, como lo era el concepto de “comunidad”. Sin embargo dicha renuncia no era ni podía ser nunca definitiva ni absoluta. Al no ser definitiva, la “comunidad” histórica conservaba el derecho y la facultad permanente de “resistir” la tiranía o el despotismo del príncipe cuando este abusase del poder que se le delegada. Al no ser absoluta, esto es plena, la comunidad podía compartir con el monarca el ejercicio de dicho poder mediante el manejo y dirección del reino, definiendo con éste las normas fundamentales de la dirección del Estado. Las cortes, reunión del príncipe con la comunidad o pueblo —uno u otro presente a través de sus procuradores o diputados, permanentes o especiales— eran la expresión máxima del Estado y la conformación última de la Nación española. Tal era la “constitución histórica” de España.

Sin embargo, una cosa era lo que se discutía y proclamaba en cátedras, tratados, concilios, púlpitos y pastorales, y otra cosa la aplicación y desarrollo fáctico de tal dogmática. En la práctica la consolidación del poder real desvirtuaría paulatinamente los presupuestos originales de participación comunitaria o cívica en el ejercicio de aquel, terminando por demostrar en España —y desde luego en América— que la soberanía no puede ser ni permanecer “dividida” y que por lo mismo el ejercicio del poder no puede ser compartido. Menos aun que la titularidad proindivisa sólo confiere preeminencia a quien final y permanentemente ejercía el poder, esto es el monarca y su corte.

No obstante, durante tres siglos permanecerá inmutable el dogma del “pacto-contractualista” hispánico. El entroque de la dinastía austríaca con la de España convertirá a este reino en la primera potencia europeo- continental, tal cual lo había astutamente planeado el rey Fernando, maniobras las cuales supuestamente hubieron servido como modelo a Maquiavelo para plasmar su tesis del “Príncipe” ideal del Renacimiento. La Reforma, mejor aún la contrareforma católica, deslindará a su vez el papel y jerarquía de los monarcas cristianos. A España, a su rey Carlos I, el más poderoso de los reyes del renacimiento europeo, y su místico hijo, Felipe II, les corresponderá a partir de entonces el apelativo de su majestad católica. Este atributo exclusivo importará para España la defensa indiscriminada del papado y del vaticano, tanto como potestad confesional como monarquía territorial en Italia. El rey francés —aún no borbón— su majestad muy cristiana, luchará por no tener una misma potencia —España— al oeste de los Pirineos ni más allá del Rin, como tampoco al sur de los Alpes. Esta lucha durará por tres siglos, hasta el momento mismo de la desintegración dinástica española con la invasión napoleónica.

En tanto España construía su imperio americano y asiático, consumía los producidos, especialmente metálico-monetarios derivados de aquel especialmente a partir de mediados del Siglo XVI, en conservar y acrecentar su poderío continental europeo. Dos realidades, dos necesidades, dos hemisferios y dos historias hispánicas se formaron durante tres siglos en torno a la corte de Madrid. El origen y contenido “pactista” convirtió al monarca español en un ser tricépite: americano, peninsular y finalmente extrapeninsular. Los Borbones españoles heredarán esta condición y su política “mundial” será la misma que la de sus predecesores los Austrias.

Las cortes, elemento esencial de la configuración monárquica española se reunirán cada vez más en torno al tema de los “subsídios” y empréstitos” voluntarios y forzosos, que el reino —finalmente las ciudades peninsulares— concederán a la corona para mantener su vocación y preeminencia imperial-católica en Europa. Esta inmensa carga imperial sin embargo será compartida de diferente manera por parte de los peninsulares y por las colonias, estas últimas de manera indiscriminada, vía el sistema de gobierno y “exacción” colonial. No gozarán las Indias de la contrapartida de que disponía la nobleza, el alto clero y la burguesía urbana peninsular de obtener gracias, mercedes y prebendas luego de cada “subsidio o empréstito” otorgado a la corona.

19/ Tal cual lo predicado originalmente (Siglo XVI) en España por Suárez, Vitoria y Soto y en América por Fray Bartolomé de las Casas.

Sin esta visión ampliada de lo que por 300 años fue el imperio español no es posible concebir el papel de las Indias y en particular de la América española, dentro del juego de la hegemonía mundial a la cual quedó vinculada desde un comienzo la América entera. Hasta hoy en día las relaciones coloniales América-España siguen mirándose como un espacio estrictamente bilateral. Lo cierto es que, incluso hasta el momento mismo de su independencia, América fue uno de los dos grandes brazos —el brazo occidental—^{20/} que se desprendían de la corte de Madrid y gracias a los cuales España fue, durante 300 años, una indiscutida potencia mundial.

La vertiginosa desintegración dinástica española a partir de comienzos del Siglo XIX, tendrá que ver tanto con la pérdida definitiva de su preminencia continental europea, frente a la atracción y fuerza irresistible de la Francia Imperial, como con el largo y tortuoso proceso de emancipación de sus colonias americanas. Se conformará luego España con mantener, por algo menos de 100 años, dos reducidas posesiones caribeñas (Cuba y Puerto Rico), sus territorios de Filipinas y a la vez construir un pequeño segundo imperio norteafricano, convirtiéndose así una potencia de tercer o cuarto grado, prácticamente inexpresiva hasta los días actuales.

D. El modelo hispanoamericano

Es preciso ahora efectuar el análisis de la formación del Estado español en las Indias Occidentales. Sin el mismo no es posible entender cabalmente muchas de las coordenadas que, a partir de la emancipación republicana, gravitan tan sensiblemente sobre la estructura y contenido del poder político contemporáneo en Hispanoamérica y en especial en la actual Colombia. Una vez, más se trata de descifrar las claves del poder monárquico-europeo en esta parte de América. Sentado que la América española era apenas el brazo occidental del imperio español, es preciso reconstruir la forma como se conformó la arquitectura y dinámica de poder español en este lado del Atlántico, base ineludible para la comprensión de la desintegración del mismo y su eventual mutación por un nuevo modelo de poder, el poder posthispánico.

En primer término el origen del poder español en América es eminentemente “contractual”, origen el cual poco —finalmente nada— tuvo que ver con el inicial pacto-contractualista que definió la reinstauración monárquica española a partir de la reconquista ibérica. Las capitulaciones de Santa Fe de la Vega suscritas entre Colón y la Reina Isabel en abril de 1492 determinaron el primer sistema de poder americano. En virtud de las mismas, Colón y sus descendientes serían en su orden Almirante, Virrey, —segundo rey dentro de la práctica del gobierno federado hispánico— y Gobernador sobre todos aquellos nuevos territorios y poblaciones que aquel descubriese y dominase en nombre de la corona de Castilla. En compensación a lo aportado por Colón, la corona le concedía un diezmo sobre todas las riquezas y mercancías halladas, así como un octavo del producido de los navíos que fueran a negociar en las tierras descubiertas. Dicho tipo de contrato sirvió de modelo durante buena parte del Siglo XVI para los restantes emprendimientos conquistadores de españoles en América. Algunas modificaciones fueron introducidas cuando las perspectivas de riquezas y provechos coloniales se hicieron más palpables. En particular la parte del producido para la Corona se redujo a un quinto, manteniéndose las prebendas de mando y jurisdicción para los nuevos adelantados y pacificadores en América.

Suele vituperarse anacrónicamente este tipo emprendimientos utilizados por España en América. Era, sin embargo, la práctica y costumbre más usada en la Europa de entonces. Lo serán un siglo después en Inglaterra para propósitos similares, conforme ya se ha mencionado. España, o cualquier potencia con vocación imperial, se comprometía contractualmente en empresas absolutamente riesgosas, cuyo producido era incierto e indefinido hasta pasados un buen número de años después de iniciadas aquellas. Una parte del mundo, incluso después de consumada la independencia de las dos Américas, era un bien internacional mostrenco y por lo mismo objeto de apropiación. Las monarquías eran pobres, pero sus grandes señores —nobles, clero y burguesía comercial— eran ricos y poderosos. Sin embargo, era en los monarcas en quienes cabía la titularidad de las exploraciones y ocupaciones pretendidas. Eran ellas las únicas que otorgaban título y señorío sobre algo inexistente e irreal —lo que se quería descubrir— lo cual sólo después de algunos años se materializaba y engrandecía vertiginosamente. Tal era el fundamento del derecho de conquista y expansión territorial que consolida con el descubrimiento de América.

20/ Al cual por cierto estuvo casi hasta el final unida Filipinas al depender esta posesión asiática del virreinato de la Nueva España y regularse a través del mismo todas las relaciones de comercio.

1. Pacto y conquista

Los castellanos —antes que los españoles propiamente tales— que llegaban a América como conquistadores y luego como colonizadores no dejaban de ser y sentirse españoles. Era la esencia del sistema de conquista, antes que de colonización, impuesto por España en sus comienzos. Aquéllos no venían propiamente a permanecer en los territorios conquistados, lo cual sí sucedió en el caso inglés. Por lo tanto, tan castellanos eran ellos como los familiares y vecinos que habían permanecido en la Península. El gobierno y las instituciones que se establecieron en un principio en América eran tan castellanas como las que a su vez regían en Castilla y nadie osó desconocer el pleno e inminente poder de la corona castellana sobre los primeros dominios americanos. Las rebeliones y sediciones propias a estas primeras empresas se castigaron con el rigor con que se habrían castigado en Castilla. Uno era y continuaba siendo el reino castellano a cada lado del Atlántico. Los no españoles eran los "otros", aquellos "naturales" que como tales, además de propietarios únicos de dichos territorios, poseían una cultura y tradición de organización y gobierno que a toda vista no dejaba de contrastar con los que a su turno pretendía Castilla imponer como dominador inminente^{21/}.

Una situación y problemática diferente surge después cuando asentados los españoles originales, forman familia en América y surgen en consecuencia las primeras y subsiguientes "generaciones" americanas. Nace entonces con ello la necesidad de un gobierno e instituciones propiamente americanas. Derivado de ello surge un primer sentimiento de "nacionalidad" hispanoamericana diferente de la peninsular misma, base cultural de una emancipación formal que así empezaba a gestarse en la América hispánica.

Sin embargo, la ya aludida presencia de "naturales" o nativos americanos, cuya amplía mayoría ni luchó ni defendió en "guerra" sus indiscutidos dominios americanos, y quien aceptó pacíficamente la prepotencia política-tecnológica del conquistador europeo, implicó un complejo desafío dialéctico a la naturaleza misma de la monarquía castellana. Dudas y polémicas que será la misma corte quien promueva muchos años antes que el padre de Las Casas se embarcara para La Española^{22/}. La posibilidad —más aún la inevitabilidad— de convertir a dichos naturales en súbditos de la corona castellana habría supuesto la ampliación a América del "pacto—contractual" sobre el cual se sustentaba la soberanía dinástica de los reyes de Castilla. Sin embargo, no habiendo mediado conquista en guerra justa —más bien injusta— y reconocida la diferente naturaleza cultural, étnica y fundamentalmente religiosa de tales comunidades, no era posible la celebración —o más bien ampliación— de dicho pacto a las Indias. La presencia insoslayable de "nativos", de indios americanos, dueños y señores de sus "reinos", impuso desde un comienzo a la corona de Castilla la imposibilidad de unificar políticamente la América española.

Como es sabido fue preciso recurrir a la figura del "incapaz" relativo, del "menor de edad", a la "curaduría" y el "tutelage" paterno natural, instituciones de antaño enraizadas en el derecho medieval castellano, para legitimar un derecho de conquista y dominación cuyos orígenes eran domásticamente ilegítimos. Un Papa Borgia, cuya elección había sido amañada por el mismo católico Rey Fernando de Aragón España, expide, cinco meses después del Des-

21/ Particularmente muchas de las expresiones de la cultura material indígena americana necesariamente tuvieron que impactar asombrosamente a los conquistadores del caso. Los magníficos templos aztecas, mayas e incas sin paralelo ni comparación en lado alguno de la Península, e incluso resto de Europa, jugaron papel determinante en las actitudes y formas, no sólo de la conquista militar misma, como de la estructuración jurídico-teológica que de inmediato se entabló por la España misma, tal cual se evidencia en todo el edificio de la argumentación del Padre de las Casas y sus siguientes émulo.

22/ Es conocida la preocupación manifestada por el mismo Rey Fernando luego del primer viaje de Colón a la Española, reconociendo aquél desde entonces, tanto el poco o nulo derecho que le asistía a España para dominar aquellas tierras y por consiguiente la necesidad de establecer para las mismas, ante la irreversibilidad del hecho de la conquista, leyes e instituciones propias. Son también conocidas las perentorias instrucciones de la reina Isabel a Colón antes de emprender este su segundo viaje en 1493. Entre una y otra fecha se producen las diferentes bulas papales que se mencionan a continuación.

cubrimiento de América, tres bulas consecutivas^{23/} por las cuales se confería la guarda y tutela a la corona de Castilla de todos los derechos de posesión sobre los continentes e islas al occidente y mediodía europeos conforme a una línea imaginaria de demarcación trazada sobre las azores e Islas de Cabo Verde, deslindado lo que desde entonces sería privativo de las coronas de Castilla y Portugal, respectivamente. El tratado de Tordesillas de 1494, suscrito 4 años antes del tercer viaje de Colón formalizó dicha demarcación entre ambas potencias marítimas. El Brasil Oriental caerá bajo la órbita portuguesa.

La Corona de Castilla, finalmente el rey de España, adquirió pues por voluntad suprema pontificia, la potestad de potestades cristianas de Occidente, la única que así podía hacerlo, el título jurídico-político de "padre" y "señor" sobre el continente americano. En 1501 el mismo Alejandro VI traspasará a los reyes españoles el derecho a los diezmos eclesiásticos con el permiso de fundar iglesias y proveer el culto y la evangelización cristiana en América. En 1508 Julio II otorgará el último título a los reyes españoles, declarándolos "patrones" de todas las iglesias de América, con el carácter de "delegados y comisarios" de la Silla Apostólica en el Nuevo Mundo, pudiendo en consecuencia hacer fundaciones eclesiásticas y presentar —elegir en último término— Obispos y demás dignidades eclesiásticas en América. Esta prerrogativa será ejercida por el rey de España hasta el 19 de junio de 1804.

Este segundo elemento contractual y confesional —entre el Papa y el Rey de España— constituyó el origen y fundamento del poder regio de España en América. El mismo no siempre ha sido debidamente ponderado por la historiografía del tema, particularmente durante el debate —aún inacabado— ideológico independentista. Como tal significó dos cosas: por una parte, dicho arreglo Castilla-Vaticano vino a suplir la imposibilidad de ampliar el "pacto-contratual" castellano respecto de los moradores "primitivos" de los nuevos dominios indios. Por la otra, reafirmó desde el inicio de la empresa conquistadora que el original pacto peninsular subsistía en América exclusivamente respecto del conquistador y colonizador hispánico. Estos principios tendrán plena vigencia hasta el final del dominio español en América, en especial hasta que el mismo vaticano declara extinto los derechos aludidos y conferido 300 años atrás a la corona de Castilla, conforme se aducirá más adelante.

Dos estructuras "pactistas" configuraron pues el poder español americano en sus orígenes. Uno preexistente y "permanente", irreductible que navegaba y se asentaba en América con cada súbdito castellano que se radicaba en Ultramar y otro eminentemente teológico-jurídico y "transitorio" emanado de la silla apostólica, quien en nombre de la divinidad suprema cristiana, otorgaba a los reyes de España el título de señores y "padres" de poblaciones y culturas sujetas a ser civilizadas —a imagen europea— mediante la evangelización cristiana. Esta tarea y obligación cristianizadora lo cubría todo. Atender el fin superior que así se perseguía en América —evangelizar para Dios a tales naturales americanos— suponía la prerrogativa de proveer la legislación civil y el buen gobierno en América. Evangelizar suponía a la vez civilizar, según las voces concurrentes en Castilla y la Santa Sede. El "trono" y el "altar", la espada y la cruz se unían en América, antes que en Europa misma —las luchas religiosas no habían aún empezado allí— para realizar la tarea más noble e ideal hasta entonces intentada.

Dos súbditos muy diferentes quedaron configurados para la corona de Castilla a partir de las Bulas Alejandrinas. Por una parte, el "natural" y buen salvaje americano, sobre quien recaía la curaduría de los monarcas peninsulares. Por el otro, el bizarro conquistador castellano, súbdito de siempre de la misma corona. Sobre cada uno de ellos la monarquía cumpliría el deber primero de protección y amparo, gobierno y justicia. En el primer caso, los títulos de dominio y poder provenían del Santo Padre como apoderado de todo bien espiritual objeto de su misión pastoral de evangelización y salvación universal, hasta entonces no disputada en Occidente (La reforma no había estallado aún). En el segundo caso, el pacto-contratual constitutivo de la monarquía castellana permanecía intacto en América cubriendo a sus súbditos de ultramar.

23/ La primera —Inter Coetera— del 3 de mayo fue un breve pontificio secreto, la segunda —también llamada Inter Coetera— es igualmente del 3 de mayo; la tercera —Eximiae Devotionis— es del 4 de mayo de 1493 y la última —Dadum Siquidem— es del 26 de septiembre de 1493. Com se podrá constatar, la primera de ellas se produjo tres días después del regreso de Colón a Palos de Moguer. La segunda estando Colón en España y la última al día siguiente a la partida de Colón, en su segundo viaje, de regreso a La Española.

Esta configuración bicéfala del poder español indiano gravitará sensiblemente durante los 300 años que duró la dominación hispánica en América. Incidirá, en forma hasta ahora no dilucidada plenamente, al momento mismo, tanto de la estructuración política republicana, como durante el tortuoso proceso del reconocimiento de la independencia política, en particular de la Nueva Granada, por parte de las demás potencias europeas, y en último término por la España misma.

En efecto, serán los descendientes de descendientes de peninsulares "criollos" los que en un momento determinado —tardíamente en la Nueva Granada— declararán extinto el pacto-contractual constitutivo de la Monarquía. Nadie, hasta el presente ha declarado concluido el pacto confesional Vaticano-corona de Castilla que sometió temporalmente a los nativos americanos, incluidos igualmente los descendientes de descendientes de los primeros de ellos sometidos al yugo colonial hispánico. Ambas cosas no dejaron de ser extrañas en su momento, como tampoco dejan de serlo hoy en día.

En efecto: los únicos que en principio habrían podido declarar extinto el pacto-contractualista hispánico habrían sido los peninsulares mismos que aún moraban en América y no propiamente los que descendiendo de otros españoles, eran ya más "americanos" antes que hispánicos, unos y otros minoría demográfica^{24/}. A su vez, los llamados a declarar extinguido el segundo pacto, debieron haber sido los indígenas mismos, por lo demás la mayoría demográfica en cada posesión. Los negros esclavos y las múltiples mezclas del mestizaje americano parecían no tener ninguna prerrogativa al respecto. Finalmente lo único que se hizo al momento de iniciar el proceso independentista, y continúa hecho hasta el presente, fue la declaración de los segundos, en sustitución de los primeros —peninsulares— la extinción del original pacto-contractual castellano, como a su vez obtener aquellos, en nombre también de los primeros, la subrogación indefinida de los derechos de dominio vaticanos sobre los terceros o indígenas. Los esclavos negros y mestizos quedaron cobijados con el mismo estatus colonial, y cuya suerte sería tema de debate y división política postindependentista como en buena forma continúa siéndolo actualmente.

En lo que concierne a la subrogación de los derechos del patronato regio en la Nueva Granada, a tal logro coadyuvieron por igual Bolívar y Santander, entre otros. Es bien sabido que sólo a partir de 1827, cuando León XII decide enviar su bendición apostólica al Vicepresidente de Colombia, el General Santander, y hacer luego provisión de los primeros obispos republicanos para Bogotá, Caracas, Santa Marta y Antioquia, el "patronato regio" español en América había concluido. Es entonces cuando la Corte de Madrid, Fernando VII en especial, admitirán el final de todo derecho o expectativa de soberanía en América. A su turno, y al menos desde el lado no madrileño, la derrota de Ayacucho, cuatro años atrás, había extinguido el original pacto-contractual castellano respecto de los que aún podrían continuar considerándose hispánicos o descendiente de éstos. El segundo pacto no se extinguió por voluntad de los prohombres republicanos quienes, por razones muy similares a los Reyes Católicos, creyeron necesitar de la voluntad papal para afirmar su derecho de dominio republicano. Solamente a partir de entonces, el mismo Bolívar y demás padres de la nueva patria, considerarán plenamente consolidado globalmente —esto es sobre todos los estamentos sociales— el nuevo tipo poder constituido por las armas en la nueva República de Colombia^{25/}.

24/ El único caso debidamente documentado bajo esta óptica ha sido la postura clara e inequívoca que asumió la Audiencia de Charcas entre 1807 y 1809 para terminar constituyéndose en la única titular legítima del derecho de reversión de la soberanía española en América. Las demás audiencias americanas, único reducto peninsular efectivo en todas las posesiones españolas asumirán una posición eclética y contradictoria con los intereses y prerrogativas jurídico-constitucionales que les asistía en tales circunstancias, al menos durante los prolegómenos del proceso emancipador.

25/ En alguna forma no dejan de ser aún hoy extremadamente sorprendentes las consecuencias de esta ingerencia vaticana en el momento de la consolidación del proceso independentista hispanoamericano. El pacto de la Santa Sede con la corona española involucró exclusivamente un tema de dominio sobre unos territorios y una población definidos, los incivilizados indígenas americanos. La decisión papal explícitamente cobijó la totalidad de la población y territorio de cada nueva nación y por lo tanto la "legitimación" alcanzada fue plena, universal y por lo menos "eterna" o indefinida. ¿Lo previeron tal cual Bolívar y Santander o fue un mero acaso de la diplomacia y la política derivada de la fuerza de los hechos cumplidos, como al fin y al cabo llega a serlo toda revolución irreversible?

Era pues la silla apostólica, mediante el ejercicio de un atributo teológico—confesional, tan igual y definitivo como el manifestado 300 años atrás, la que de nuevo no sólo "legitimaba" una forma de poder político ilegítimamente conquistada —revolución— sino que una vez confería soberanía plena a los españoles—americanos de entonces sobre territorios y comunidades que, en el fondo, muy poco dejaban de parecerse a las que se configuraron tras la conquista y colonización puramente hispánica. Para bien o para mal se iniciaba pues en América y en la Nueva Granada un segundo tipo de patronato, el "patronato republicano" cuyos efectos están hoy en día explícitamente presentes en el caso colombiano, y cuya vigencia tanto ha tenido que ver con la fragmentación y enfrentamiento cultural y espiritual de los colombianos.

2. *Etnia y poder*

Volviendo sobre el tema, aún no discutido plenamente del origen y fundamentos del poder colonial en América, es consecuente retrotraerse al aludido carácter bicéfalo del poder originario español: Esa doble estructura pactista y contractual de éste, respecto al súbdito castellano que conquistaba y colonizaba en nombre de su rey, como del natural o indígena a quien una voluntad terrena, no reconocida por él como lo era el Papa, le imponía una sumisión civil y religiosa en virtud de su carácter o condición de inferioridad cultural y tecnológica^{26/}. Respecto del primero, la potestad soberana del rey español era y debía de ser "permanente" e "inmanente" en tanto existiera ese rey y ese súbdito. Excepcionalmente podría dejar de serlo, bien en virtud del derecho implícito de "resistencia" de la comunidad, del reino mismo —antes que del súbdito— frente al monarca que se hubiere convertido en tirano, como igualmente ante la ausencia o desintegración de la monarquía misma. Ambas cosas serán alegadas al momento de sostenerse en América el derecho "criollo" a su emancipación a partir de 1808, conforme se discutirá más adelante.

Respecto del segundo, dicha potestad —religiosa y civil— era exclusivamente aplicable al elemento indígena o natural. El español no era sujeto de ninguno de las dos prerrogativas regias otorgadas por el Papa, esto es la cristianización y la civilización. No obstante, la sumisión y pleitesía de aquél debería ser sólo "transitoria" en tanto no concluyese el objeto de la misma, en tanto no fuesen aquellos evangelizados —fin del gobierno religioso— y consecuentemente civilizados —fin del gobierno civil— momento o circunstancia a partir de la cual debería automáticamente extinguirse el derecho de conquista y coloniaje español en América.

En consecuencia, una y otra prerrogativa no podían permanecer indefinidamente en cabeza del monarca español. El logro de cada uno de estos objetivos, implicaría la "sustracción de materia" del patronato regío. Tal era la tesis y la práctica romanística-castellana y canónica del menor incapaz que llegaba a su mayoría de edad. A su turno, concluida la misión evangelizadora y civilizadora peninsular se extinguiría automáticamente su derecho de dominio y usufructo de las posesiones americanas. Tal era y debía haber sido el derecho de conquista y coloniaje por parte de España en América, tales los fundamentos para la plena, normal, natural y futura emancipación de estas provincias o dominios.

De ninguna manera aconteció así. Una cosa era lo que se desprendía de la dogmática escolástica, responsable de todo este andamiaje jurídico-político, y otra cosa, muy distinta, lo que la práctica, necesidad y voluntad de los hombres terminó por imponer. Esta extraña simbiosis del origen del poder español en América, dogmático-confesional en cuanto a su sociedad civil —la teoría del pacto contractualista hispánico— y teocrática respecto del mundo indígena —el pacto papal-castellano— vino a complicarse muy pronto en virtud de al menos tres circunstancias, la primera previsible, las otras dos meramente accidentales.

26/ La aquí varias veces asumida inferioridad cultural y tecnológica alude a la incapacidad material del indígena para resistir y evitar la conquista y dominación española. Bien por cuanto, como suelen arguir los primogénitos cronistas de Indias, la mayoría de las grandes comunidades indígenas americanas esperaban y confiaban en la llegada redentora de un salvador extranjero, bien por que la carabela, la espada, la pólvora y el caballo terminaron bien pronto demostrando a aquellos la inevitabilidad de la conquista y sumisión. Desde un punto de vista religioso, la multiplicidad de creencias, ritos y prácticas de los aborígenes americanos no constituyó un factor de poder y resistencia apto frente a la unidad e integridad confesional que se impondría sobre éstos.

La primera alude al elemento "mestizo", resultado étnico y cultural de la fusión, permitida o no, del español y el indígena. Lo segundo está referido a la presencia del negro-esclavo traído y comercializado por el español, en sustitución y supuesta mejoría del indígena natural. Las múltiples mezclas raciales y culturales que se seguirían con igual prontitud de América complicaron y desarticulaban mucho más aún la primigenia estructura del poder colonial. Lo tercero tuvo que ver con las prontas acechanzas externas provenientes de los intereses de emulación y superación de la expansión imperial española por parte de otras potencias europeas, especialmente Francia, Inglaterra y Portugal.

La profusa y compleja legislación de Indias que perfecciona el poderío y dominio español en América tendió a solucionar todos los casos involucrados. Dos vertientes tuvo la misma. La política y la civil. La primera atendía a la conformación del Estado indiano, la segunda a la regulación de la "enmarasmada" sociedad civil colonial. Sin embargo, y muy tempranamente (a comienzos del siglo XVI, proliferó una legislación unitaria en la cual se entremezclaba uno y otro asunto. El indio fue y continuó siendo el sujeto de la misma, así sus derechos y prerrogativas cívicas y políticas quedaban sujetas a lo que por necesidad se radicaba en cabeza del hispánico, fuera éste laico o eclesiástico^{27/}. Era la forma a través de la cual la corona de Castilla, a la vez que atendía lo pactado con la Santa Sede, garantizaba a su súbdito castellano la preeminencia en responsabilidades y contraprestaciones en cuanto conquistador —respecto del indígena— y en cuanto colonizador —frente a la corona misma—.

Esa especie de supremacía anglicana del monarca español respecto de América, que finalmente le otorgaba el pleno ejercicio de la soberanía política en América, le facultaba a su turno a delegar en sus súbditos hispánicos el manejo de tales territorios. Le garantizaba, como apenas era consecuente dentro de la relación de tutelaje establecida, derivar a éste, para sí y para el Estado peninsular, el máximo de excedente económico que de tales posesiones pudiera obtener. Tal era el título castellano: poseedor, antes que propietario, tutor y padre antes que monarca.

El hallazgo de metales preciosos y demás riquezas nativas hizo más patente esta consecuencia contractualista. Con el tiempo, Siglos XVII y XVIII, tal retribución contractual, la apropiación del excedente económico colonial, como diría luego la escuela Marxista, habría de primar sobre el objeto mismo de la dominación y posesión colonial americana por parte de España. La presencia del negro se explica y justifica —en la ideología de la época— en función de esta circunstancia propia a la dinámica colonia en referencia.

3. Hispanoamérica y la monarquía española

A su vez, la consustancial diferencia de temas e intereses a reglamentar en América respecto de los que debían regularse en la península, como ya se ha dicho en un comienzo no sólo respecto de la España misma como de su otro brazo sobre el oriente europeo, impuso tempranamente la especialización y diferencia legislativa y política respecto de América. Institucionalmente, ésta fue, desde sus inicios, diferente y en buena forma "independiente" de la península, así las normas e instituciones americanas tuvieron una semejanza esencial con las metropolitanas, o aquellas fueran una semblanza y adaptación de estas últimas. Siendo la América "de hecho" diferente de la Península, no fue o no pudo ser aquella "igual" a ésta, como muchos han pretendido verlo, así formalmente se declarase la igualdad de derecho y Estado en uno y otro terreno. De "hecho" cada vez menos iguales, así jurídicamente se tratase desde Madrid que fuesen cada vez más semejantes.

Esto último quedó plenamente evidenciado durante los primeros días de la independencia americana. Es conocido el primer fracaso de la seducción reconciliadora intentado por la España que se había rebelado contra Napoleón en 1808, cuando se quiso convencer a sus "provincias" —no ya colonias— americanas que ellas eran tan iguales y libres como lo era la España de la Junta Central para resistir, unidades y solidarias, a la "tiranía" francesa.

27/ Las primerísimas normas para el manejo de Indias, surgidas luego del primer viaje de Colón estuvieron encaminadas a la defensa de los derechos del indio americano. La libertad de éste se declaró a mediados de 1500 con ocasión de los 19 primeros "naturales" enviados en calidad de esclavos a España por encargo del Almirante Colón. Toda la legislación promulgada durante 300 años se orientó a constituir una sociedad regulada por un Estado dirigido a la protección y defensa del natural americano. Recaía en cabeza del español la tarea y responsabilidad de aplicar la primera y administrar lo segundo. La práctica daría como consecuencia otra cosa muy diferente.

La América vino a convertirse así pues desde sus orígenes en otro factor y elemento más de la estructura "federativa" del Estado español que nace con los Reyes Católicos. Como apéndice que era de la corona de Castilla, la misma gozó desde un comienzo de un estatus propio y exclusivo, tanto como lo eran los "fueros" de que gozaban —prácticamente hasta la fecha— los "reinos" de Vizcaya, Asturias, Navarra, Galicia, Aragón y Cataluña, tanto como lo tuvieron en su escala, los reinos de Sicilia, Nápoles y Flandes y más tarde el Milanesado o el Rosellón españoles. Reinos se llamaron y fueron las principales provincias españolas de América, virreyes fueron los gobernantes más cercanos a la Corona, Consejo propio —el de Indias— tuvo la América, como también su propia Junta de Guerra.

"Descentralizado" y en alta dosis "autonomista" fue el espíritu de los Austrias —siglos XVI y XVII aunque "centralizada" y "regalista" fue la política borbónica^{28/}. Lo primero bajo el predominio de la institución del Cabildo, lo segundo en torno a las Intendencias. Una y otra cosa enfatizada sobre la preeminencia de lo urbano sobre lo rural, aquello el centro político-administrativo, fiscal, comercial y cultural de la vida colonial, ésto lo marginal, lo periférico, lo extractivo y sustentador de la relativa autarquía del resto colonial. Lo primero, lo burgués, lo pre-capitalista, lo terciario económicamente, el sumo de los intereses peninsulares y criollos. Lo segundo, lo indígena, lo negro, lo servil o esclavo, lo que se descapitalizaba en función, tanto de la colonia como de la metrópoli. Por eso, el proceso emancipador, desde los comuneros mismos, estallará y se consolidará en torno a la ciudad, a la villa, al pueblo o al caserío. Serán los intereses de la clase criolla, de la pluri-burguesía citadina —comerciantes, intelectuales, hacendados, milicianos y burocratas de segundo piso, incluso "nobles" lugareños—, los que primarán en la iniciación y consolidación del proceso emancipador.

El indio, el negro, todavía esclavo —lo que continuará siendo por 30 años más— y "castas" respectivas, estarán al margen de dicha lucha. Su participación nunca será activa ni entusiasta. A lo máximo será forzada o resignada como elementos pasivos en la descomposición total de una sociedad y cultura que no les permitió estar ausentes de dicha confrontación. Incluso en buen número de casos el indio, no sólo será efusivo pro-realista sino que seguirá añorando, hasta bien entrada la República, la presencia y tutela real española. Su marginación, su ausencia efectiva del "nuevo régimen" americano les habría negado desde entonces el privilegio protagónico en un sistema republicano que de todas maneras tuvieron que contribuir a edificar.

Lo anterior especialmente en lo económico, social, político y finalmente cultural. Al no tener estos estamentos un puesto protagónico en la lucha emancipadora, y al diluirse éstos dentro de la misma dinámica liberal-republicana posindependentista, cada una de las antiguas colonias americanas tendría que arrastrar desde sus orígenes un polifacético lastre económico-social y cultural que por más de un siglo y medio —al menos en el caso de la antigua Nueva Granada— sería inicialmente el soporte indiscriminado de la anarquía civil y política postindependentista. Los diferentes amalgamamientos producidos tanto por las interminables guerras civiles del siglo pasado, como por las tres o más décadas de violencia soportadas durante el presente siglo —hasta ayer mismo— parecen haber producido el más largo rodeo de asimilación y homogenización socio-cultural de unas mayorías de siempre en turno de reinvidicar un poder y dominio disperso, negado o desvirtuado durante 500 años^{29/}. En el caso colombiano actual el predominio de todas las formas de participación no institucional, violentas o no, las peores de ellas el cohecho, el peculado, la guerrilla irreductible, el sicariato y el narcotráfico serían buenos indicadores al respecto.

28/ Lo de "centralizado" y "descentralizado" debería entenderse aquí desde el exclusivo punto de vista del espíritu o concepción que primó en cada una de las dinastías respecto al gobierno de América, y no propiamente en cuanto al procedimiento político-administrativo del gobierno indiano. En este último sentido tan extremadamente centralista fueron los Austrias como los Borbones.

29/ Hacia 1825 cuando podría considerarse plenamente consolidada la independencia de la Nueva Granada, la composición de sus 1.327 mil habitantes era así: Indios 35,4%, negros y castas mestizas: 43%, blancos 22%. El último recuento indígena, propiamente tal repartido en 450 comunidades arroja un dato de casi 450 mil, equivalente al 1,5% de la población del país. La población negra no sería superior actualmente al 5,5%, los blancos el 21% y consiguientemente los estratos mestizos equivaldrían al 72%.

4. El Pacto colonial:

La concreción del doble "pacto" al cual se vio abocada la corona castellana en su posesión y dominio americano, supuso un tercer pacto, el denominado "pacto colonial". Este a su vez derivado del original "pacto-contractual" propio a la monarquía castellana. Por el mismo los conquistadores y sus descendientes eran los beneficiarios primeros y excluyentes de los privilegios y recompensas que la corona quisiera otorgarles por concurrir con su dinero, navíos y oficiales a la conquista y pacificación de las Indias, conforme se había procedido desde Colón. Aquellos eran pues acreedores a diferentes premios tales como encomiendas, tierras, cargos, prebendas, honores y gabelas afines. Desde mediados del Siglo XVI, 46 años después del primer descubrimiento antillano, se dispone la graduación de los méritos y servicios de los pretendientes a puestos en América, debiéndose preferir en su orden los descendientes de los primeros descubridores, a continuación los hijos o parientes de los "pacificadores" y luego los descendientes de los "pobladores" nacidos en estas provincias. El "criollo" propiamente tal^{30/} quedaba pues desde bien temprano en un escala inferior de las opciones y beneficios derivados de la conquista y poblamiento americano.

Como era palpable, durante la fase de la conquista misma, el descendiente de quien había conquistado o pacificado en pacto o capitulación con la corona, era el heredero forzado de los beneficios recibidos por aquél y el titular de nuevas prebendas. A mediados del Siglo XVI, garantizaba la dominación casi general de estos reinos, los funcionarios y oficiales —letrados o militares— que vinieron luego a América en funciones estrictamente de gobierno o justicia (virreyes, presidentes y audiencias) no podían disponer de cargo alguno, comisión particular e incluso encomiendas para sus hijos, hermanos, cuñados u otros parientes cercanos (hasta el 4º grado de consanguinidad) enfatizándose con ello un nuevo y siempre reivindicable privilegio indiano. Estas normas se ampliarán y diversificarán durante el Siglo XVII cuando está ya muy distante y difusa la consanguinidad con los pioneros castellanos, sus antepasados. Los beneficios hasta entonces acumulados y transmitidos en torno a las leyes del mayorazgo indiano, consolidarán una cada vez más reducida e influyente clase urbana, núcleo irreductible de la temprana "nacionalidad americana" (criollismo).

El poder y fortuna crecientes de los criollos, inicialmente de tipo "territorial-patrimonial" y en alguna forma cívico-burocrática, contrastará ostensiblemente con los apremios fiscales y financieros de la corona española, tanto en la Península como en las colonias mismas. Consecuencia inmediata de este desajuste será que la corona pretende obtener de los "nuevos ricos" americanos fáciles y abundantes recursos fiscales. En compensación cederá a éstos paulatinamente nuevos y más importantes privilegios, una vez más de naturaleza social (títulos de nobleza, p. e.) o económica (nuevas prerrogativas sobre minas o tierras realengas, p.e.) y finalmente políticas mediante el ascenso "selectivo" y no generalizado de algunos criollos, a partir de mediados del Siglo XVI, a ciertos cargos político-administrativos, judiciales, eclesiásticos y militares. Todo ello acrecentará la consolidación de un "poder" y engrandecimiento hispanoamericano con desmedro creciente de las prerrogativas políticas del mismo estado español en América^{31/}.

30/ El tema del nacimiento como de la consolidación del estamento étnico-cultural "criollo" está aún por dilucidarse dentro de la bibliografía hispanoamericanista. Para algunos es un "sentir" o "sentimiento" ya explícito a mediados del Siglo XVI. Para otros resulta demasiado temprano este hito. La convivencia de un hijo —americano— un padre y quizás un abuelo peninsulares no permitiría la afirmación de un auténtico afloramiento de un tal estamento, antes que clase "criolla". Es probable que a mediados del Siglo XVII este deslinde genético-social estuviese ya perfeccionado, aunque la nueva ola inmigracionista, propiamente colonizadora de este siglo, haya desvirtuado el primer proceso de formación americanista. Lo que sí parece claro es como a partir de mediados del Siglo XVIII existe ya un claro e inequívoco sentimiento "americanista" que evolucionará hacia la formación de una primera mentalidad y cultura "nacionalista" a finales del Siglo XVIII y comienzos del Siglo XIX, base necesaria y suficiente para el inicio de la guerra secesionista.

31/ Este proceso será gradual y aparentemente percibido por los criollos y por la corona. Para mediados del Siglo XVIII, esta tácita y sutil "subrogación" del poder político en América convivirá con las nuevas fuentes de poder y riqueza a las que había ido accediendo, con la tolerancia indolente del gobierno metropolitano, el floreciente y prepotente "criollismo", entre ellas el contrabando abierto.

El tránsito "natural" hacia la emancipación política habría comenzado pues en Hispanoamérica muy tempranamente, un poco antes de mediados del Siglo XVII. Sin embargo y a diferencia de lo acontecido en las colonias anglosajonas del Norte, las primeras raíces de la independencia política hispanoamericana, no habrían surgido de la formación de una cultura política popular, típicamente democrática. En la América hispánica dichas raíces habrían sido el fruto de una deformación socioeconómica en torno a la cúspide de las relaciones metrópoli-colonia, cuyo beneficiario final habría sido un cada vez más compacto bloque "criollo" con exclusión de la amplia y muy difusa base poblacional americana. Esta naciente burguesía habría requerido en último término del poder político y económico plenos para consumir un largo proceso de ascenso y capitalización del estado y la sociedad coloniales.

Sin embargo, la rápida acumulación de riqueza y poder urbano por parte de los "americanos" generará una condición política suficiente para que el monarca español pretendiera evitar tal tipo de reversión histórica de su original poder en América, conforme a la extensión y uso que habían ido tomando en ultramar los privilegios consagrados en el Pacto Indiano: esto explicaría la abolición gradual de las encomiendas, la restricción y prohibición de los servicios personales impuestos a los indígenas encomendados o en resguardo, aumento gradual de la tributación^{32/}, vigilancia y penalización creciente de los abusos y atropellos sin límite cometidos respecto de los indígenas mismos, como respecto de la corona^{33/}. Sin embargo, las necesidades crecientes financieras imperiales de la monarquía, tanto en Europa como en América, anularán la anterior pretensión regia, permitiendo a los americanos resistir o reconvertir política los nuevos y más "apretados" aportes económicos que la metrópoli les exigía.

Vanamente trataría la corona de coartar la laxitud, tolerancia e incluso alianzas o dependencias personales, a toda vista ilícitas, que sus gobernantes y oficiales mantenían con los titulares del nuevo poder indiano. El sinnúmero de pleitos y procesos adelantados ante las autoridades peninsulares, especialmente ante el Consejo de Indias, por parte de celosos funcionarios, contrapartes agraviadas o terceros en discordia, son buenos indicadores al respecto.

Esta modificación sustancial y creciente del original pacto indiano en virtud de la dinámica misma colonial, modificó sensiblemente la estructura del poder español en la América hispánica. Dos mundos se habían ido creando hasta mediados del Siglo XVII: una débil, reducida, banal y pobre administración colonial peninsular, y un cada vez más sólido "patriciado" urbano. La corona exigirá siempre más a estos últimos. Los valores, actitudes y comportamientos que empiezan a definir a esta clase "americana" no serán tanto de lealtad y fidelidad hacia aquella, como de reconocimiento de su posibilidad y factibilidad de dominio y supremacía global, pero fundamentalmente política. Su respuesta no será la de resistir u oponerse a las nuevas y crecientes cargas que la metrópoli desea recabar de ellos. La corona entrará en el juego americano y ante la opción de aumentar aún más el torniquete fiscal, pondrá en marcha recursos extraordinarios tendientes a congraciarse con las ya manifestadas aspiraciones coloniales y conseguir así el apoyo de los acaudalados ultramarinos, casi siempre para financiar a menudo sus descalabradas empresas europeo-continentales: prórroga de los originales privilegios de la conquista cuando los mismos habían entrado en proceso de eliminación^{34/}, venta de juros reales (rentas o intereses), venta y

32/ En especial a partir de mediados del Siglo XVI: impuestos de mesada, media anata, alcabala, sisa, almorzarifazgo y papel sellado entre otros.

33/ Lo anterior no excluye de manera alguna los propósitos y objetivos "humanitarios" y "muy cristianos" alegados desde siempre por parte del monarca español —especialmente de la dinastía de los Hasburgos— y leyes de indias de protección y defensa, al menos de los naturales o indígenas (no aconteció lo mismo respecto al negro-esclavo dada su condición o naturaleza de inferioridad étnico-social otorgada por el cristianismo castellano-indiano). No obstante, el problema de fondo fue y continuó siendo de tipo político. La sustentación teológica de la defensa del "incapaz" indígena será una vez más razón suficiente para justificar una normatividad humanitarista y civilizadora, la cual finalmente y por razones "pragmático-económicas" (financiamiento del imperio) terminarán siendo letra muerta.

34/ Entre otros prórroga, primero por dos, luego por una vida más de las encomiendas, cuya abolición ya había sido decretada, composición de tierras y títulos respectivos, fortalecimiento del régimen de mayorazgo y obtención de títulos de hidalguías, concesiones a particulares sobre bienes realengos e incluso "comunales" e ingerencias en el gobierno de las comunidades religiosas.

arriendo de casi toda clase de oficios^{35/}, indulto de delitos^{36/}, legitimación de hijos naturales, concesión de títulos regios a villas y ciudades, venta de títulos de hidalguía y nobleza en América, entre otros.

Este proceso de creciente "mercantilización" de la administración y gobierno indianos a partir de la segunda mitad del Siglo XVIII —el cual por lo demás estaba respaldado y sustentado por una explicativa doctrina^{37/}— estuvo acompañado de una laxitud, igualmente creciente, de las rígidas normas sobre provisión y vigilancia de los cargos y oficios en la América colonial. El hasta entonces eficaz sistema de las "visitas" y "residencias" va decayendo en prácticas localistas, tales como la delegación del nombramiento de corregidores y alcaldes en América, cuyo monopolio habría de recaer en manos de los encomenderos y sus descendientes, allegados e incluso criados de virreyes y presidentes de audiencia. Implicará igualmente una mayor libertad de actuación —especialmente de tipo policivo y judicial— de corregidores y alcaldes mayores, permitiéndose a éstos mezclar los asuntos públicos a su cargo con determinados negocios privados. Se admitirá que el "corto" salario devengado por éstos podía permitirles la práctica, desde entonces mañosa, de acelerar los procedimientos y trámites de los negocios de su competencia, mediante pagos extralegales, permiso cuya libre aplicación podía llegar hasta el otorgamiento de otras ventajas administrativas y procesales tales como el "adormecimiento" del proceso e incluso la exculpación de los acusados, tal cual se reseña en un sinnúmero de causas y denuncias al respecto.

Lo que importa finalmente señalar a los objetos de este análisis es el hecho de que, tanto las insuperadas crisis fiscales y financieras de la corona española, particularmente durante los 200 años del reinado de los Austrias, como las apremiantes y complejas necesidades de defensa del imperio americano durante los reinados de los Borbones, llevaron al rey de España a mercantilizar paulatinamente, en favor de un ya sólido patriciado americano, un cúmulo creciente de facultades y prerrogativas primero de tipo económico y social y muy a continuación de alcance político. Esta transferencia institucional será una manifestación expresa de la dialéctica misma de la historia colonial. Sería igualmente una respuesta imponderada, incluso "prágmatica" y forzada ante las necesidades específicas del imperio, cuyo desenlace sería inevitablemente la independencia política colonial. En último término, se habría producido pues una reversión tácita, por parte de la corona española, en favor de algunos pocos de los descendientes de sus originales súbditos hispánicos, de varios y cada vez más importantes atributos de la soberanía contenida en el doble pacto contractual —civil y confesional— sobre los cuales se sustentó su primera soberanía en América.

Esta tesis contrastaría con la denuncia oficial —y oficiosa— de la historia convencional que alude con exclusividad a una supuesta condición de exclusión sistemática de los estratos "criollos" de las posiciones político-gubernamentales de cada reino, tal cual largamente se sustentó en el famoso "Memorial de Agravios" de don Camilo Torres en 1809. Una inevitable combinación de pretensiones económicas (control y dominio de las

35/ Este expediente fue progresivamente ampliándose hasta llegar a la venta cargos y dignidades tales como las de escribanos de censos, oficiales reales, contadores y aún ministros de cuentas reales y particiones, defensores de bienes de difuntos y menores. Más tarde mediante compra podrán adquirirse los cargos de corregidor y alcalde mayor además de altos cargos de la hacienda colonial y en algunas ocasiones los puestos de oidor, regidor e incluso el de virrey. Este proceso no será exclusivo en ultramar. En la corte misma se venderá, en buena postura, hasta el cargo de consejero y fiscal del Consejo de Indias. Los cargos y dignidades eclesiásticas, seculares y regulares, tampoco quedarán excluidos.

36/ Entre otros tantos, el perdón por adelantar cultivos prohibidos, tales como la vid y el olivo.

37/ Nuevamente la dogmática tomística tendrá la justificación político-teológica para explicar y justificar esta práctica, antes que indiana ciertamente hispánica. Contra un sentir moralista de algunos que ven en tales ventas o arriendo una práctica inmoral, se pontificará que es lícito y legítimo por parte del monarca proveer determinados cargos mediante el pago a éste de un "servicio" por parte de sus beneficiarios directos o indirectos (compra para sí o para un consanguíneo). Era pues una "regalía" inherente a la majestad del monarca, no sólo el crear un oficio como el proveerlos a cambio de una cantidad monetaria destinada al mantenimiento del culto católico o servicio de su majestad —componenda— máxime estando la monarquía en situación de apuro o penuria económica. Con ello se evitarán males, peores y consecuencias imprevisibles.

prósperas fuentes de riqueza, comercio fundamentalmente) como político-burocráticas ("gobierno" antes que "poder" mismo) parecerían ejercer el sustento suficiente para pretender los "americanos", en un primer estadio, la "emancipación" local, antes que la "independencia" propiamente tal. Lo primero comprendería, conforme al derecho civil indiano, un reconocimiento simple y puro de la "mayoría de edad" de un hijo apto y prepotente frente a un padre agotado y distante, física y políticamente. Lo segundo, una necesidad y consecuencia inevitable frente a la obstinada negativa del "padre y señor" de conceder a dicho "hijo" el logro de sus iniciales pretensiones (gobierno o "cargos" y en consecuencia nuevas alternativas de riqueza) con exclusión de sus únicos competidores, los "peninsulares" simple coadministradores de la heredad pretendida.

El advenimiento borbónico francés al trono de España a comienzos del Siglo XVIII comportará una nueva coyuntura para este ascenso irreversible del poder indiano. La larga guerra de sucesión que precedió el reconocimiento de Felipe V como Rey de España e Indias generó un "vacío institucional" en el cual el sentimiento de "americanidad" empezó a concretarse dentro de sus vertientes preindependentistas. La interinidad del gobierno y negocios con la Península por más de 13 años obligaron a las autoridades coloniales a tolerar pasivamente muchas de las "marchas" ya acometidas por los americanos bajo las regalías anteriormente concedidas. En algunos casos, implicó incluso el apoyo económico y financiero por parte de los criollos para suplir arduas necesidades del servicio de su majestad en estos dominios.

Como en el caso de las colonias anglosajonas, una cruenta disputa interna en la metrópoli creaba condiciones externas paulatinamente estimulantes para la generación de un sentimiento de clase con aspiraciones de poder, esto es de "americanidad". A su turno, las reformas tendientes a la reestructuración de la nueva monarquía llegarían tarde a Hispanoamérica. Muchas de las llamadas reformas de "nueva planta" incluso no alcanzaron a ser implementadas en Hispanoamérica, en particular en la Nueva Granada^{38/}.

Como es sabido, la primera mitad del Siglo XVIII es de relativa calma americana. Como ya se advirtiera, es a partir de la segunda mitad del siglo cuando la guerra interimperial involucra definitivamente a toda la América. Serán precisamente las nuevas e imprevistas necesidades de defensa y protección del imperio americano, particularmente las que surgen con posterioridad a la guerra de independencia norteamericana, las que obligan a la corte de Carlos III a reanudar el doble juego de las exigencias fiscales y regalías en torno a las altas clases criollas. El torniquete fiscalista golpea ahora ya no sólo a las clases más pudientes (comerciantes, hacendados, mineros, alto clero y comunidades religiosas) sino que recae indiscriminadamente sobre los estratos medios e incluso bajos, rurales y urbanos, estos últimos responsables de las primeras rebeliones "populares" (comuneros) en Perú, la Nueva Granada, Venezuela y el Paraguay. Los "donativos" y "empréstitos forzosos" del favorito Godoy (redención de los vales reales) recaen con fuerza inusitada sobre los intereses más altos. La venta abierta de títulos de nobleza y de altos cargos, incluidos los de virrey, no alcanza para los propósitos de la política de último cuño.

La autofinanciación y pago de la defensa y protección del imperio por la América misma es la tesis definitiva durante los últimos años del reinado de Carlos III. La inevitada alianza de España con la Francia postrevolucionaria, especialmente con Napoleón, en su lucha a muerte contra Inglaterra, creará un vacío total en la capacidad española de defensa y manejo de su imperio americano. El caos hacendístico, la corrupción y la tiranía peninsular de la corte en torno al favorito Godoy aumentará mucho más las necesidades fiscales y financieras de la corona. Las mismas recaerán de nuevo y con mayor énfasis en América. Los impuestos y donativos se pagarán a regañadientes, a costa del incremento del resentimiento criollo. A cambio se tolerará —o no podrá evitarse— el contrabando abierto, el cohecho y el peculado indiscriminado, el primero incluso en cabeza de los mismos funcio-

38/ Tal fue el caso del sistema de "Intendencias" el cual nunca fue aplicado en el virreinato. La Nueva Granada no mereció una preocupación ni prioridad de primer término para los primeros Borbones, habiendo sido menos que relevante la otorgada por los tres últimos (Carlos III, Carlos IV y Fernando VII).

narios coloniales desde finales del Siglo XVIII, conforme acontecía en la costa caribeña de la Nueva Granada^{39/}. La apropiación forzada y hasta fraudulenta de tierras realengas en amañío con un gobierno y justicia locales cada vez menos "estatales" y más "privados", son varias de las muchas variantes representativas de la descomposición política del estado español en América a finales del Siglo XVIII y comienzos del Siglo XIX.

A partir de 1780 el poder español en América entra definitivamente en crisis. La irresistible dinámica de la misma sociedad colonial, como la pérdida de protagonismo imperial español frente a las restantes potencias europeas —Inglaterra, Francia y Holanda, principalmente— crearán las condiciones externas propicias para que los principales estratos sociales de la colonia —criollos— asuman en su debido momento la decisión de declarar y ganar la emancipación política. Para entonces no quedará mayor rastro de la original teoría del "pacto-contratual" de la monarquía española, que no sea en las aulas de las principales universidades americanas. Allí empezará y se fraguará el primer hervor subversivo y emancipador.

5. El rezago político

Este somero análisis de la evolución de una dimensión "material" del poder colonial en la América española, debe ser contrastado con el escrutinio de lo que a su vez podría calificarse como su dimensión con el escrutinio de lo que a su vez podría calificarse como su dimensión "formal" o institucional. La evolución en este aspecto es igualmente gradual y cada vez más compleja.

En contra de lo que suele afirmarse comúnmente la estructura organizativa del gobierno americano no implicó una restauración de formas y sistemas monárquicos feudales en América por parte de la corona de Castilla. Por el contrario, dicho proceso se enmarcó desde un comienzo dentro de la concepción y práctica "moderna" —en su sentido histórico— de la monarquía que nació en la Península. Como ya se ha advertido, el monarca castellano se reservó desde el primer momento —capitulaciones de Santa Fe— un control y manejo directo y personal, tanto político-administrativo, como militar y judicial de los territorios y posesiones que paulatinamente fueron conquistados y colonizados en su nombre. No hizo donación ni entregó a nadie, en calidad de "señorío" jurisdicción o dominio particular de lo que a su único y exclusivo nombre se descubriese o poblase. No hubo pues "señorío" americano^{40/}.

39/ Así habría sucedido, conforme a las múltiples denuncias y procesos de la época, en Portobello, Riohacha, Santa Marta, Cartagena y sus apéndices interiores de Mompos, Valledupar, Santa Fé, Popayán y Quito. Las auténticas "mafias" del final colonial, dueñas absolutas de la impunidad local, llevan sus pleitos ante el mismo Consejo de Indias, cuyos fallos nada resolvían finalmente en contral de tal flagelo. El Caribe, anglosajón y holandés, el primero estimulado por las ordenanzas inglesas de puertos libres, se convierten en una gigantesca bodega o entrepuestos aduanero destinado a abastecer y satisfacer la nueva y dinámica capacidad de compra de los principales puertos del caribe español, así como a servir de trampolín entre éstos y los puertos norteamericanos. Estados Unidos responderá activando la expansión de su industria naval, cuya flota empezará a frecuentar abiertamente los puertos, oficiales o no, de Hispanoamérica en compañía de navíos ingleses y holandeses que van desalojando paulatinamente las flotas de Cádiz, Vizcaya y Cataluña. La última y más notable denuncia (enero de 1800) al respecto y previa a la independencia de la Nueva Granada la formulará en una detallada memoria don José Ignacio de Pombo a nombre del "Real Tribunal del Consulado" de Cartagena de Indias al Virrey Mendiúeta y Musquiz.

40/ Bien tempranamente —1518— los primeros pobladores de la Española solicitan mediante procuradores destacados ante el Rey Carlos I, no otorgar ni entregar territorio alguno americano en régimen de señorío. Bolívar, en su Carta de Jamaica, 300 años después habría de referirse a este antecedente precisamente para alegar la existencia de un "contrato social" entre el rey Carlos I y los conquistadores americanos, diferente del señorío medieval. El tan citado caso Colón y sus descendientes es ilustrativo al respecto. De los tres títulos iniciales otorgados por el éxito de su empresa, gobernador, almirante y virrey pronto quedaron reducidos al de gobernador y almirante y luego tan solo almirante. Cuarenta años después la corona readquirió a sus herederos tales títulos, compensándoles con un ducado —Veraguas— y un marquesado —Jamaica— los cuales apenas conllevaban el atributo del título respectivo como el goce de algunas rentas vitalicias, que aún hoy disfrutan sus herederos. Solo en el caso de Jamaica se conservó a los Colón una jurisdicción territorial, para muchos una explicación suficiente del poco interés posterior de la corona española en conservar dicha posesión antillana, objetivo temprano del "Designio Occidental" de Cronwell. Carlos II de España cederá la misma a su homónimo Carlos II de Inglaterra en 1670 (Tratado de Madrid). Para otros la expulsión de los jesuitas de América habría tenido la justificación adicional de abolir de raíz un irresistible "señorío transcontinental" que la Compañía parecía ir montando desde el Paraguay hasta Nueva España.

La exclusión de varias propuestas o planes habidos en tal sentido chocaron de plano con los valores políticos dominantes que anteceden o son concomitantes con el establecimiento hispánico en América. En primer término tales pretensiones se oponían a la configuración "cesarista" de la monarquía española que se consolida con Carlos I, fruto del renacimiento europeo tan vivamente encarnado en este monarca y sus sucesores inmediatos. Chocaba también con el pronto rechazo que hicieron los súbditos castellanos a las pretensiones habidas en tal sentido, cuyas costumbres y leyes, desde Juan II, constituían para éstos una garantía real de que, no sólo las tierras por ellos descubiertas serían exclusivamente del "realengo" (del rey y no de señores), sino que éstas podrían ser entregadas individualmente como premio consecuente con los servicios prestados a la corona en la pacificación y poblamiento de tales dominios. En términos similares, se afirmó a partir de entonces la opción inmediata de llegar a ser cada cual en América "propietario libre" e incluso alcanzar la hidalguía.

América era, y es desde entonces, antes que la reforma protestante lo proclamase y el Calvinismo lo implementara, el escenario vivo e inmediato para el progreso individual a través del esfuerzo o el "mérito" individual, en un comienzo al servicio de la corona, luego a la República y ahora a la Nación. Dicho éxito sería medible por la adquisición y acrecentamiento de la propiedad y el bienestar material, las distinciones, los honores y prebendas^{41/}. No obstante, se cuidaron muy bien los borbones de no otorgar jamás títulos nobiliarios de Castilla en América que implicaran jurisdicción alguna, reduciendo los mismos a meras concesiones simbólicas, obteniendo las contraprestaciones fiscales o financieras que se pretendían desde Madrid. Dichos títulos por lo demás contrastaban fuertemente con las costumbres y valores de la rudimentaria vida social de las colonias, no habiendo habido mucho interés en ejercer los mismos. Tal habría sido el caso —y pleito posterior— del marquesado de San Luis otorgado a la familia Bolívar en Venezuela o el mismo marquesado de San Jorge concedido a la familia Lozano en Santa Fe.

Las ya citadas bulas alejandrinas que otorgaron sin restricción alguna a la corona de Castilla y sus herederos, la posesión territorial plena sobre lo ya descubierto y lo que fuese descubierto en un futuro, constituyó el único y verdadero "señorío" (pontificio) en América. Sin embargo, tal privilegio suponía la obligación muy temprana para los reyes de España de no enajenar ni ceder parte alguna de tales posesiones y menos aún la enajenación o cesión de los atributos regios que así se recibían. Conforme a la tradición medieval, aún imperante, lo que se recibía en donación por el Papa, sólo podía ser enajenado y restituido al mismo Sumo Pontífice^{42/}. Mal podría entonces caber, dentro del origen contractual-pontificio del poder español en América, forma diferente de señorío.

No obstante, con el curso de los años, las diferentes guerras y confrontaciones imperiales en América supondrán, por fuerza de la reciprocidad pactista existente entre las grandes potencias, tanto la cesión o renuncia territorial sobre aquellas posesiones perdidas en guerra, como la adquisición de nuevas posesiones apropiadas por otras potencias, cuyo origen no quedaba cobijada por el original beneficio papal^{43/}. En el caso español, será casi exclusivamente lo primero.

41/ Esta opción precalvinista típica a la mentalidad americana habría de diferenciarse del futuro dogma protestante en cuanto tales éxitos materiales no serían de por sí prueba, ni suficiente ni necesaria de ser su beneficiario un "elegido" y predestinado a la salvación eterna. La rígida ética católica del momento más bien señalará tales beneficios y logros como contrarios a la buena marcha terrenal y como mal precedente al momento del juicio individual y final.

42/ El aludido precedente "medieval" tuvo en el caso americano una modalidad particular. Según el consabido modelo medieval el Papa y el Emperador representaban las dos potestades superiores terrenas, la una espiritual y la otra política. Era aquel quien transmitía a éste uno de los dos atributos de poder recibidos de Dios, la espada, símbolo exclusivo del poder político-terrenal. Sin embargo en el caso americano, los Papas habían transmitido al monarca castellano no sólo la espada como la cruz para su pleno dominio en América.

43/ Los casos de Jamaica, Cuba, Florida, Trinidad, Luisiana e Islas Malvinas entre otras, serían claro ejemplo al respecto. Más aún, al final del imperio algunas de las posesiones americanas, la Luisiana y Trinidad, p.e., sirvieron a la corona española para acrecentar o recuperar posesiones continentales-europeas.

Este inciso permite plantear un tema extremadamente complejo concomitante a todo lo largo del enfrentamiento entre España y sus colonias al momento de la Independencia, el cual aún no ha sido suficientemente analizado. Conforme al presupuesto anterior, Fernando VII se afianzará irreductiblemente en sus derechos dinásticos y plena soberanía en América, no sólo en virtud de su ideología absolutista-colonial como por la responsabilidad histórica-dogmática que sentía presente en el peso de su siempre frágil corona. Alegará no poder ni consentir ni sancionar en nombre suyo, de sus antepasados y sucesores, la cesión o pérdida, parcial o total, en guerra revolucionaria de un realengo por tantos siglos sostenido.

Mal que bien era España prácticamente la única potencia imperial europea —junto a Portugal— que después de todos los enfrentamientos del Siglo XVII y especialmente del Siglo XVIII, había logrado conservar la casi total integridad de su imperio ultramarino. Como ya se mencionó, será la decisión vaticana de proveer directamente las vacantes de las sillas episcopales en América y entrar en negociaciones con los “insurgentes” americanos, la última razón que hará convencer a la corona española sobre el fin de su soberanía, potestad e imperio en América. Premeditado o no esta será la gran carta jugada por la curia vaticana respecto de sus intereses en América, ya entonces rebaño mayoritario de la grey católica, apostólica y romana. El temor a un nuevo cisma, de proporciones incalculables dentro de la maltrecha iglesia católica postnapoleónica, habría primado sobre los compromisos históricos del patronato regio americano otorgado a los reyes de España 300 años atrás.

No hubo ni cupo pues el señorío medieval en la América española. No obstante varias de las instituciones coloniales asumirían, muy en contra de los intereses y deseos de la corona española, formas vedadas pseudo-señoriales, tal cual lo singularizó la institución de la encomienda y en forma similar el resguardo. Bien puede entenderse que haya sido igualmente temprana la decisión de la monarquía española de acabar con un sistema, no sólo injusto sino atentatorio a su concepto y sentido de un poder real plenamente “soberano”^{44/}.

6. Imperio y colonia

Pero es preciso volver al análisis de la arquitectura misma del Estado y el poder español en América. Si toda ésta fue, hasta la consumación de la independencia política, un realengo único, el poder español no pudo ser diferente en ella de lo que a su turno fue la estructura de ese poder en la Península misma. Lo anterior no querría decir que necesariamente las instituciones políticas fueron las mismas en uno y otro lado del Atlántico. Se ha advertido muy al comienzo de lo que distinguía a la primera de las modernas monarquías europeas era esa simbiosis de medieval e innovación que con el tiempo vino a llamarse “moderno” para diferenciarse de lo “feudal”. En España el monarca cristiano de la reconquista había suscrito un pacto con su pueblo^{45/}, por el cual recibía en subrogación la plenitud de la soberanía. No la compartía con éste, aunque si le oía y atendía en cortes. Uno, el más permanente y reiterado propósito de la convocatoria de cortes era la jura, tanto del heredero a la corona como del nuevo rey. “Reino” era en España la unión de rey y cortes. Faltando uno de los dos no habría reino.

44/ En la Nueva Granada, si bien fue relativamente efímera la vigencia de la institución de la encomienda, no menos enraizados fueron sus efectos y consecuencias, hasta el punto de que buena parte de los defectos históricos del régimen de propiedad y explotación agraria del país, arrastra aún hoy la herencia de tan vituperada institución.

45/ “Pueblo” en la acepción medieval y aun moderna tenía un contenido semántico muy diferente al que luego le otorgaría el pensamiento ilustrado del Siglo XVIII, liberal y democrático del Siglo XIX. Pueblo era todo y sólo aquello que tenía capacidad y posibilidad de ser “representado” mediante apoderado o “procurador” ante el monarca, reunido éste con aquel en cortes. Podían ser representados los moradores de villas y ciudades que recibían del mismo rey dicho privilegio. Podían ser a su vez elegidos como apoderados, procuradores o diputados los grandes señores de villas y ciudades con derecho a concurrir a cortes. Este derecho eminente ciudadano se ejercía a través de los cabildos o ayuntamientos, compuestos de tales grandes señores, propietarios y usufructuarios de tierras y ocupaciones lucrativas. El pueblo llano no propietario no concurría a tales cabildos. Por esto mismo el concepto y sentido de “representación” como institución medieval que era, además de anteceder al concepto y práctica moderna y contemporánea de “democracia”, no tiene nada que ver con ella. Pero no sólo concurrían a las cortes españolas los procuradores de cabildos. La Nobleza y alto clero tenían su asiento en tales reuniones. De una u otra manera el monarca contrarrestaba la disputa de intereses de unos y otros, de lo cual normalmente salía reforzado su poder.

Sin embargo, las Indias no eran parte integrante del reino. Con el tiempo pasarían a ser "reinos" —con minúscula— directamente dependientes de la corona española. Por algo se denominaban estas posesiones "Nuevo Reino de ...".

Conforme ya se ha advertido, por tal razón las normas e instituciones habrían de ser pues especiales en América. Sin embargo, los únicos moradores americanos que habrían podido alegar su derecho a concurrir a cortes, los originales súbditos castellanos, ni formarían ni concurrían nunca a las mismas, así hubieran sido éstas locales o peninsulares, en este último caso, entre otras cosas, para jurar al heredero o al nuevo rey del cual dependían. A pesar de iniciales aspiraciones como luego tardíos proyectos en este sentido^{46/}, el concepto y realidad de "reino" fue siempre imperfecto y parcial en América. Este será uno de los primeros argumentos proindependentistas de los prohombres de la emancipación americana, en especial de la Nueva Granada.

Tal era la naturaleza política de los dominios castellanos en América. No había un solo reino americano. Había tantos como se descubriesen y poblasen en nombre del rey de Castilla, más tarde de España. En el fondo se trataba de la replicación de la práctica constitutiva de los diversos estados que iban surgiendo de la reconquista española. El rey de España, título que sólo nace con los herederos de los reyes católicos, era pues de Rey de Castilla, de Aragón, de Navarra, Vizcaya, de las dos Sicilias, de Nueva España (México), Nueva Castilla (Perú), Nueva Granada, Chile, etc. Como tales, estos dominios pertenecían individualmente a aquel como monarca y su nexo con aquellos era únicamente dinástico. Por consiguiente, el manejo y gobierno de tales reinos debía regirlo el rey mismo directamente desde España y no a través de las instituciones, organismos o funcionarios peninsulares. Cada una de las posesiones americanas pertenecían pues al rey, a la corona, pero no a la monarquía española. No eran aquellos parte del reino español, pero sí reinos del monarca, atributos de su corona. Desaparecido éste, desaparecería todo nexo político con la Península.

En la anterior suposición pactista, residía un permanente germen de autonomía e independencia de los dominios americanos respecto de su metrópoli. Enajenados tales dominios, o disputada su posesión, los "naturales" americanos recobraban el pleno derecho a resistir y rebelarse contra tal mutación de dependencia. Este era la esencia inicial y última del "pacto social" americano.

Declarado ausente o "cautivo" Fernando VII, considerada inexistente su dinastía con la entronización de José Bonaparte y estimada totalmente sometida la Península bajo las armas de Napoleón, conforme ya se ha aducido, la primera —y definitiva— audacia de los criollos americanos fue haberse autodeclarado como los únicos "naturales" de tales dominios, dotados así de plena capacidad, por encima de los peninsulares, indios y esclavos, para asumir la personería plena del nuevo poder a ser establecido en Hispanoamérica. Igualmente, el primer gran error político de los primeros hombres de la resistencia antinapoleónica en España fue declarar a las "provincias americanas" parte integrante de la monarquía española y convocarlas al unísono a concurrir en la gobernación y defensa del reino^{47/}. El primer y sólido argumento americano, si no independentista, al menos emancipador, sería el rechazar

46/ Ya en 1518 los pobladores de Santo Domingo se reúnen y celebran juntas de procuradores para ser enviados a España. En 1530 y 1540 Carlos V concede a México y al Perú la merced de reunirse en cortes. En 1635 se intentó por la corona misma la convocatoria de los americanos a las cortes de Castilla, mediante procuradores que concurrirían en pie de igualdad con los de la Península. Nunca se llevó a cabo tal iniciativa. Tras la ocupación napoleónica de España y el resucitar inusitado de la institución de las cortes, esta vez de cuño prerrevolucionario, los americanos serán convocados a la Península. Su concurrencia dividirá sensiblemente la opinión política americana y biseccionará desde entonces los partidos y bandos locales. Los varios "memoriales de agravios" que por aquella época se redactan casi simultáneamente en toda la América Hispánica, reclamarán insistentemente el no haber sido nunca estos "reinos" o dominios convocados a cortes. Lo cierto es que los americanos mismos jamás tuvieron o mostraron real interés en pedir o concurrir a tales cortes. Haberlo hecho habría significado una pérdida sensible del estatus americano, esto es haber tenido que asumir obligaciones y contribuciones fiscales (impuestos, donativos y subsidios) de los que originalmente estaba exentos los naturales de estos dominios. Los Borbones terminarán por imponer estas obligaciones directamente. Su rechazo será una de las razones de la prerrevolución y revolución misma.

47/ Declaratoria de la junta central suprema y gubernativa de España e Indias de enero de 1809, dirigida a todos las provincias de América, invitándolas a elegir sus representantes para integrarse al gobierno colegiado del caso.

tan seductora invitación, reivindicando su natural y jurídica capacidad autoconstitutiva frente a las alegadas circunstancias de la madre patria. En el caso de la Nueva Granada todo ésto quedará explícitamente manifiesto en el "Memorial de Agravios" de Camilo Torres de 1809.

Pero lo que desde un punto de vista histórico-político era la esencia de la soberanía española en América, en apariencia un privilegio y prerrogativa insustituible para cada provincia o reino americano, era a la vez su peor y más aguda desventaja. América fue —y continúa siendo— un simple agregado de reinos o provincias directamente ligados a un monarca. No formaban, como tampoco hoy forman, parte de una gran unidad geopolítica como lo era España y su imperio ultramarino^{48/}, y menos aún llegaron a constituir una unidad en el continente. El imperio español americano era simplemente una sumatoria de territorialidades estando sujetas al directo dominio del rey español, mayor o menor en número conforme el monarca mismo lo deseara. No estaban relacionadas entre ellas de manera alguna —y no podían estarlo por expresas y reiteradas provisiones del monarca español— que no fuera parcialmente a nivel infraestructural. Poca o restringida implementación alcanzaron en Hispanoamérica las tardías autorizaciones borbónicas de permitir el intercambio comercial entre algunos puertos americanos, prerrogativas las cuales jamás cubrieron la libre y normal circulación de súbditos entre uno y otro dominio americano. Ninguna de estas restricciones fueron tan expresas e incidentes en el caso de las colonias anglosajonas. Muy por el contrario fue notorio desde un comienzo el dinámico proceso de formación de un solo espacio comercial anglonorteamericano traducido en una fácil, especializada y competitiva circulación de bienes y personas de una a otra colonia inglesa. El dinámico tráfico de cabotaje del "norte" al "sur" fue el responsable de ese temprano desarrollo naviero norteamericano, como la apertura de caminos "postas" y "paradas" fue la expresión, igualmente prematura, de una vocación a la vez que unificadora, expansionista territorialmente que bien pronto pretendería el salto de los Apalaches, el dominio del Misisipi y más tarde el acceso del pacífico mismo.

Al momento de luchar por la independencia esta circunstancia de "atomismo" histórico-político será invocada al unísono, no ya por las mismas y originales provincias del Imperio, como por cuanta ciudad, pueblo o aldea estimó oportuno declarar para sí la reversión de la facultad reconstitutiva o propiamente "constitucional", ya no respecto de la Península sino respecto de las demás provincias americanas, vecinas o lejanas, que presumieron en centralizar tal derecho de subrogación de la aludida soberanía española en América, particularmente de las que fueron la capital y asiento del gobierno peninsular respectivo. Así aconteció en la Nueva Granada respecto de las primeras intenciones de Santa Fe de Bogotá. Sucedió en Venezuela respecto de Caracas, en el Río de la Plata respecto de Buenos Aires, en Perú respecto de Lima, en Centroamérica respecto de Guatemala y en Nueva España respecto de México. Perdida la identidad del nexo de la soberanía regia, se perdió, hasta la fecha toda posibilidad de identidad regional y en la mayoría de los casos de identidad "nacional" tal cual era el reto más arduo nacido con la Independencia misma: unir algo que por 300 años nunca había estado unido.

Efímero e inconcluso sería el esfuerzo de líderes como Bolívar y San Martín para rehacer el "gran terruño" de lo que por tres siglos había sido una misma "patria". Difícilmente podría decirse que hoy la llamada Colombia constituye una auténtica unidad política, económica y social. Lejano parece estar aún el día en que la antigua América española, podría volver sus pasos sobre la esencia del señorío real preindependentista y lograr reconstruir el hilo conductor de la ficción que implicaba el nexo real en torno a un concepto de imperio y "Gran Nación" hispanoamericana.

E. La división de poderes en Hispanoamérica

Los reyes de España, al recuperar de la nobleza y de la Iglesia señorío y jurisdicción, centralizaron paulatinamente en torno a la corona, las funciones legislativas, judiciales y de gobierno mismo, cuya separación aún no había sido teóricamente planteada. El estado tenía una sola cabeza, una última instancia de toda decisión o fallo, el rey. El ejercicio de tales atribuciones fue en España, hasta comienzos del Siglo XVIII borbónico, de tipo "conciliar": hasta entonces no hubo ministros responsables ante el monarca de un área específica de atribuciones. Durante los Austrias —200 años— existían en vez de éstos diferentes supremos y reales consejos: el primero y siempre pre-

48/ Paradójicamente Cuba y Puerto Rico son dos excepciones notables al respecto. Serán estas dos posesiones las únicas que permanecerán unidas a la metrópoli por casi un siglo más, pero serán las mismas que de nuevo terminarían formando parte de uno de los dos mayores centros geopolíticos contemporáneos.

sente consejo del rey o real, luego el de Estado y los consejos especiales de Castilla, de Aragón, de Flandes, de Hacienda y otros, como y particularmente el de Indias^{49/}. Correspondía a éste último, bajo la exclusiva dependencia del monarca asumir todas las funciones que eran inherentes a éste: legislativa, hacienda, iglesia y guerra.

No por ello, el monarca dividió o delegó sus atribuciones "absolutas". En tal virtud, tales eran sus decisiones, absolutas, no sujetas a límite o instancia superior que no fuera el pacto contractual que lo ligaba permanentemente a su pueblo, esto era la defensa, felicidad y prosperidad del reino conforme a los dictados de la justicia y finalmente de su conciencia.

La traslación a América de estos atributos reales absolutos implicó una hipersimplificación institucional una vez quedó resuelta la soberanía del monarca español en los territorios conquistados. Súbditos llegaron a ser finalmente "todos" los habitantes, nativos o españoles en un comienzo, y después éstos mismos y sus descendientes legítimos o no —criollos y mestizos—, así como los negros y sus castas. Los destinatarios de las normas, los sujetos de la jurisdicción única real, eran unos y otros, cada uno dentro del estatus pseudoestamental que les caracterizaba.

Conforme ya se mencionó, para el manejo de tales "reinos", para el arbitrio de los intereses en juego, los del monarca y los de sus súbditos peninsulares y americanos, la corona española creó un sistema único y uniforme institucional y normativo. Unos mismos, según las circunstancias peculiares, fueron los organismos y funcionarios, como las normas y procedimientos hispánicos adoptados para América^{50/}.

A diferencia del caso anglonorteamericano, Hispanoamérica fue pues desde un comienzo gobernada por una sola normatividad y un solo sistema administrativo-judicial. Hubiera sido consecuente que con base a una experiencia reiterada de 300 años, los hispanoamericanos no hubieran ni sentido la necesidad ni experimentando grandes dificultades para buscar y llegar a un consenso unificador de tipo normativo, gubernativo o judicial. Una experiencia de tres siglos así parecería indicarlo. Sin embargo, llegada y consolidada la independencia política de las colonias, esta unidad se perdió y diferenció para siempre, incluso dentro de las mismas provincias y subdivisiones de las que por 300 años fueron parte integrante de los reinos o dominios españoles. Un doble afán se apoderó de toda Hispanoamérica. Por una parte el prurito de derruirlo todo por el simple hecho de considerarlo sinónimo de monarquía absoluta y tiránica. Por el otro, el candor —y reiterada comodidad— de improvisar y adoptar, sin beneficio a inventario, experiencias y modelos ajenos supuestamente redentores. Rota irreconciliablemente la posibilidad de diálogo y cooperación reconstructiva entre los diferentes bandos y opiniones ideológicas propias de los eventuales herederos del régimen colonial^{51/}. El afán, la improvisación y la falta de experien-

49/ El Consejo de Indias, creado 30 años después del descubrimiento americano perduró hasta 1834. No obstante, los borbones al introducir el sistema de ministerios redujeron cada vez más sus funciones convirtiéndolo en mero cuerpo asesor del monarca. En 1714 se crearía el Ministerio de Indias, asumiendo éste las funciones de comercio, hacienda y guerra, aunque no las de Gracia y Justicia que entonces quedaron reservadas a la cartera respectiva.

50/ Es muy temprana y reiterada esta vocación unificadora. Las nuevas capitulaciones que se suscriben con los conquistadores y adelantados que siguieron a Colón prácticamente repetían el contenido y espíritu de las originales de Santa Fe. Una frondosa y circunstancial normatividad se crea a partir del segundo viaje del almirante. Ya en 1570, Felipe II ordenó efectuar la primera sistematización y ordenamiento de tanta norma y jurisprudencia indianas. La primera "recopilación de las leyes de indias" se publicó en 1680. Una segunda gran recopilación se efectuó en 1790.

51/ Está ampliamente documentado el número significativo de criollos que, y especialmente durante el Siglo XVIII, habían empezado a ocupar cargos de alta responsabilidad en la administración y manejo de los asuntos coloniales (áreas tales como los de hacienda, guerra y comercio, hasta llegar a los de oidor e incluso virrey) no sólo en las colonias mismas como en la metrópoli también, los cuales en su momento habrían podido contribuir invaluablemente contribución a tal esfuerzo. Varios casos frustrados en la casi totalidad de la América hispánica registrados entre 1807-1811, confirmarían lo aquí supuesto.

cia criolla, se interpusieron fatalmente anulando la más racional y la más pragmática alternativa existente para "reificar"^{52/} paulatinamente el preparadigma del nuevo Estado y sociedad en el sur de la América. Tal había sido el patrón norteamericano cuyos imitadores, en la Nueva Granada por ejemplo, no miraron ni evaluaron suficientemente cuando quisieron apegarse a la fórmula federalista como ideal para esta excolonia.

Desde entonces, y hasta el presente, un esfuerzo vano de más de 200 años no logra reconstituir esa mínima unidad geopolítica preindependiente, así sea de orden "subregional (Grupo Andino, Mercado Común Centroamericano, Cuenca del Plata, etc.) capaz de volver a poseer el peso crítico que Hispanoamérica jugó en el concierto universal, así fuese como apéndice imperial de una de las tres primeras potencias del mundo. Los Estados Unidos de América mostrarán una experiencia muy diferente: no habiendo estado sometidos a una uniformidad normativa ni orgánica-institucional colonial, lograrán a partir de su independencia política, y con pasmosa rapidez, además de mantener su diversidad constitutiva, crear una entidad geopolítica monolítica a través de la cual aquellas trece colonias, llegarán a ser, antes de 180 años y por más de 30 años, la primera e indiscutida potencia mundial.

1. La unicidad del poder indiano

El reflejo del poderío real español en América tuvo dos vertientes. Una la que correspondía a la presencia inminente de la corona misma en Hispanoamérica, otra la que correspondía a los súbditos en cuanto tales. En lo tocante a lo primero, desde un comienzo, y prácticamente hasta el final del Imperio, las provisiones reales para las Antillas y Tierra Firme fueron tanto de orden administrativo-militar como judicial. El modelo castellano sirvió oportunamente como referente y guía al respecto. Fueron primero los gobernadores, luego los capitanes generales y finalmente los virreyes los depositarios de la autoridad administrativa y militar del rey español en América^{53/}.

En lo concerniente al área judicial, fueron las audiencias el máximo organismo americano, encargado del manejo, en nombre y representación directa del rey, de todos los asuntos jurisdiccionales, hasta el punto de que era el único organismo hispanoamericano que podía usar el sello real. El precedente peninsular sirvió también de referente, aunque las audiencias americanas bien pronto se diferenciaron de las metropolitanas en cuanto a su composición y atribuciones. La sui-géneris realidad local así lo exigió. Obviando las distinciones circunstanciales de una u otra, las americanas fueron antes que nada los máximos y últimos tribunales reales de apelación en lo civil y criminal. La única instancia superior la constituía el Real Consejo de Indias, órgano éste que era la encarnación misma del monarca, tanto en lo político como en lo judicial y finalmente en lo administrativo. Muy pocas veces podía recurrirse ante el monarca mismo.

En un comienzo, con la simplicidad de la conquista y naciente sociedad indiana, a la cabeza de tales audiencias —Presidente— estuvieron letrados, juristas versados en lo civil y criminal. A comienzos del Siglo XVII, cuando las necesidades del imperio fueron las de la pacificación de indios y la regulación de los privilegios e intereses de los primeros poblamientos, se decidió que en vez de letrados hubiese al frente de las audiencias hombres de capa y espada. La de Nueva Granada fue establecida en 1547, aunque sólo se instaló en Santa Fe en 1550.

Muy a continuación, y no necesariamente en virtud de las siempre reiteradas razones de lejanía e incomunicación, sino del recelo permanente que el monarca español mantenía sobre la eventual preeminencia y hegemonía de los privilegios e intereses indianos, se decidió con carácter casi universal que el presidente de dichas audiencias fuera a su vez quien ejerciera el mando político-militar del distrito en que se encontraba la sede de la audiencia respectiva (esto es el gobernador, el capitán general o el virrey). En virtud de esta mudanza, se produce una de las notas pecu-

52/ Se utiliza aquí este germanismo de la sociología weberiana en su sentido original, esto es como el proceso de rehacer, sobre sus componentes originales, una entidad histórico-factual.

53/ Cada nuevo rango acumuló los anteriores. Los virreyes eran a la vez que capitanes generales, gobernadores de sus distritos. Los capitanes generales a su vez gobernadores. Durante el período borbónico se acentuó la paulatina autonomía que habían ido adquiriendo las capitanías generales respecto de los virreinos a los cuales estaban adscritos, y en alguna forma empezaba a suceder lo mismo respecto de los gobernadores y presidentes de audiencia de los virreinos o capitanías del caso. Esto explica el hecho singular de que iniciado el proceso autonomista en Hispanoamérica fueran unos y otros los que se declararían independientes de sus antiguas capitales.

liares de esta institución española en América: la simbiosis de las atribuciones político-militares por una parte y las jurisdiccionales por la otra. En tal sentido la audiencia americana fue superior en jerarquía y funcionalidad a la audiencia peninsular misma.

La ausencia física del monarca, la necesidad y conveniencia de estar éste unívocamente representado en América, así como la lejanía e incomunicación citadas, impusieron la aludida amalgama institucional. Lo anterior conllevó una larga y nunca finiquitada disputa entre la jerarquía y las dependencias de una y otra institución, de una y otra modalidad del poder real en las Indias. Las decisiones del virrey, del gobernador o del capitán general en cuanto causasen "agravio" a los súbditos, eran objeto de la competencia de la audiencia. No obstante los actos y decisiones puramente administrativos o de gobierno del virrey o gobernador sólo podían recurrirse ante el Consejo Real de Indias, tal cual acontecía igualmente con los fallos de la audiencia. En los asuntos de gobierno, hacienda y guerra, la audiencia estaba subordinada al gobernador o al virrey, fuese éste o no su presidente. A su turno, la actuación de la audiencia concluía con la del virrey o gobernador, en razón exclusiva de ser su presidente.

Sin embargo, y desde siempre, y no exclusivamente con el objeto de contrapesar el poder y autoridad de los gobernadores de un distrito, se otorgaron a las audiencias americanas funciones permanentes y complementarias de asistencia, consejo o asesoramiento al gobernador o virrey en los asuntos tocantes al buen y oportuno gobierno de la provincia o virreinato, respectivos. Bajo esta modalidad, denominada de "Real Acuerdo" una vez más se entrelazaban las funciones políticas y judiciales. En esta última circunstancia gobernadores y virreyes se excusaban de intervenir para obviar la figura del autoasesoramiento. Los Reales Acuerdos no eran obligatorios al virrey, capitán o gobernador, sin embargo fueron el motivo permanente de conflictos y querellas de mutuas responsabilidades que apenas concluían años después ante el Consejo de Indias.

Durante el inicio de la independencia, estos conflictos serán extremadamente agudos en la medida en que las audiencias serán el único resguardo de la causa e intereses, tanto del monarca como de los peninsulares mismos, a cuya causa debieron alinearse aquellas cuando el "asalto" criollo al poder colonial, dejaba paulatinamente sin mando político y militar a virreyes, capitanes o gobernadores^{54/}.

Conforme a lo que aquí se pretende indagar, no parece haber sido suficientemente explorado, al menos desde el lado político, el carácter "indiviso" y unificador del poder real español replicado en América. El poder del monarca español, como el de los restantes monarcas europeos, era uno e indiviso, luego absoluto y al final "ilustrado". Tal se quiso que fuera, sino su titularidad sí al menos su ejercicio en América. La ideología independentista quiso acabar con lo "absoluto" y conservar lo "ilustrado". Sin embargo, la "ilustración" que sirvió de referencia fue la no española (francesa e inglesa) antes que la —nunca bien analizada— "ilustración hispánica", no exclusivamente peninsular ni necesariamente "católica", como normalmente suele decirse.

Antes que nada convendría volver sobre la naturaleza y alcance del ejercicio de la potestad jurisdiccional de las audiencias americanas. La misma no era una mera jurisdicción contenciosa, esto es llamada a resolver en última instancia en nombre del monarca español todas las querellas civiles y eventuales "agravios" emanados del gobernador o virrey o causas criminales, sino que compendia una doble actuación. Por una parte, "normativa" o relativa a la aplicación o interpretación de la ley respectiva, como también "preventiva" en lo que concernía al acatamiento y cumplimiento de las leyes del caso, por la otra. Sus autos, fallos o "Reales Acuerdos" (los de asesoramiento al gobernante) no sólo perseguían mantener la integridad normativa indiana, sino informar, corregir, reformar o reorganizar el servicio real en América.

No ejercía pues la audiencia americana una simple función judicial tal cual hoy se suele asignar al aparato u órgano judicial contemporáneo que surge tras la llamada "división de poderes". Por otra parte, el gobernador o virrey, primera encarnación del monarca en América, gobernante y protector de los súbditos de este lado del Atlántico, debía refrendar, al menos con su presencia y firma, los fallos y actuaciones de la audiencia. Esta a su vez, sólo po-

54/ Han sido debidamente estudiados los casos de conflicto entre audiencias y virreyes en Buenos Aires y México, audiencias y presidente-gobernador en Charcas y Quito. En el otro extremo la plena afinidad ideológica y decisional en Lima, La Habana y Centroamérica y en alguna forma Santa Fe y Caracas.

liares de esta institución española en América: la simbiosis de las atribuciones político-militares por una parte y las jurisdiccionales por la otra. En tal sentido la audiencia americana fue superior en jerarquía y funcionalidad a la audiencia peninsular misma.

La ausencia física del monarca, la necesidad y conveniencia de estar éste unívocamente representado en América, así como la lejanía e incomunicación citadas, impusieron la aludida amalgama institucional. Lo anterior conllevó una larga y nunca finiquitada disputa entre la jerarquía y las dependencias de una y otra institución, de una y otra modalidad del poder real en las Indias. Las decisiones del virrey, del gobernador o del capitán general en cuanto causasen "agravio" a los súbditos, eran objeto de la competencia de la audiencia. No obstante los actos y decisiones puramente administrativos o de gobierno del virrey o gobernador sólo podían recurrirse ante el Consejo Real de Indias, tal cual acontecía igualmente con los fallos de la audiencia. En los asuntos de gobierno, hacienda y guerra, la audiencia estaba subordinada al gobernador o al virrey, fuese éste o no su presidente. A su turno, la actuación de la audiencia concluía con la del virrey o gobernador, en razón exclusiva de ser su presidente.

Sin embargo, y desde siempre, y no exclusivamente con el objeto de contrapesar el poder y autoridad de los gobernadores de un distrito, se otorgaron a las audiencias americanas funciones permanentes y complementarias de asistencia, consejo o asesoramiento al gobernador o virrey en los asuntos tocantes al buen y oportuno gobierno de la provincia o virreinato, respectivos. Bajo esta modalidad, denominada de "Real Acuerdo" una vez más se entrelazaban las funciones políticas y judiciales. En esta última circunstancia gobernadores y virreyes se excusaban de intervenir para obviar la figura del autoasesoramiento. Los Reales Acuerdos no eran obligatorios al virrey, capitán o gobernador, sin embargo fueron el motivo permanente de conflictos y querellas de mutuas responsabilidades que apenas concluían años después ante el Consejo de Indias.

Durante el inicio de la independencia, estos conflictos serán extremadamente agudos en la medida en que las audiencias serán el único resguardo de la causa e intereses, tanto del monarca como de los peninsulares mismos, a cuya causa debieron alinearse aquellas cuando el "asalto" criollo al poder colonial, dejaba paulatinamente sin mando político y militar a virreyes, capitanes o gobernadores^{54/}.

Conforme a lo que aquí se pretende indagar, no parece haber sido suficientemente explorado, al menos desde el lado político, el carácter "indiviso" y unificador del poder real español replicado en América. El poder del monarca español, como el de los restantes monarcas europeos, era uno e indiviso, luego absoluto y al final "ilustrado". Tal se quiso que fuera, sino su titularidad sí al menos su ejercicio en América. La ideología independentista quiso acabar con lo "absoluto" y conservar lo "ilustrado". Sin embargo, la "ilustración" que sirvió de referencia fue la no española (francesa e inglesa) antes que la —nunca bien analizada— "ilustración hispánica", no exclusivamente peninsular ni necesariamente "católica", como normalmente suele decirse.

Antes que nada convendría volver sobre la naturaleza y alcance del ejercicio de la potestad jurisdiccional de las audiencias americanas. La misma no era una mera jurisdicción contenciosa, esto es llamada a resolver en última instancia en nombre del monarca español todas las querellas civiles y eventuales "agravios" emanados del gobernador o virrey o causas criminales, sino que compendia una doble actuación. Por una parte, "normativa" o relativa a la aplicación o interpretación de la ley respectiva, como también "preventiva" en lo que concernía al acatamiento y cumplimiento de las leyes del caso, por la otra. Sus autos, fallos o "Reales Acuerdos" (los de asesoramiento al gobernante) no sólo perseguían mantener la integridad normativa indiana, sino informar, corregir, reformar o reorganizar el servicio real en América.

No ejercía pues la audiencia americana una simple función judicial tal cual hoy se suele asignar al aparto u órgano judicial contemporáneo que surge tras la llamada "división de poderes". Por otra parte, el gobernador o virrey, primera encarnación del monarca en América, gobernante y protector de los súbditos de este lado del Atlántico, debía refrendar, al menos con su presencia y firma, los fallos y actuaciones de la audiencia. Esta a su vez, sólo po-

54/ Han sido debidamente estudiados los casos de conflicto entre audiencias y virreyes en Buenos Aires y México, audiencias y presidente-gobernador en Charcas y Quito. En el otro extremo la plena afinidad ideológica y decisional en Lima, La Habana y Centroamérica y en alguna forma Santa Fe y Caracas.

día pronunciarse como cuerpo colegiado —nunca individualizado— y diferente al gobernador o virrey mismo, constituyéndose así en imagen y semejanza del Consejo Real de la Península. Asumía por ello la más directa y cercana conciencia y voz del monarca, en particular al estarle reservada a la audiencia como al Consejo de Indias las decisiones más complejas y difíciles relativas a la vida y supervivencia del reino como tal.

Sin embargo, el concepto de “reino” americano no era completo. El “pueblo”, desde entonces el súbdito castellano o peninsular en América así como sus descendientes, tuvo desde sus inicios un órgano de representación y gobierno similar a los existentes en la Península. Mas aun, varias de dichas instituciones renacieron con nuevo vigor cuando en la Península languidecían o se extinguían, como fue el caso de los medievales consejos de vecinos, u órganos de gobierno directo de los municipios o distritos castellanos.

Fue el cabildo, el ayuntamiento o el regimiento el eje del asentamiento y regulación de la vida peninsular en América. Eran todos en su orden órganos representativos de los habitantes de una ciudad y su respectivo distrito o término. Sus integrantes, designados en un comienzo por los mismos adelantados o descubridores, fueron luego de designación real —casi siempre vendible— más tarde por los gobernadores o virreyes, y al final por los cabildos mismos. Su actuación era cerrada, con la excepción de casos esporádicos en los que se permitía o se lograba la celebración de los denominados “cabildos abiertos” o reunión de todos los vecinos para resolver, casi siempre en forma directa y tumultuaria, asuntos igualmente extraordinarios: donativos al rey, defensa local en caso de guerra o gobierno interino del municipio. Uno de éstos decidió en Santa Fe de Bogotá el primer acto de la emancipación neogranadina el 20 de julio de 1810. De sus funciones promiscuas, de gobierno y justicia, los regidores municipales perdieron prácticamente las segundas que fueron cada vez en mayor detalle asumidas o bien por los corregidores —jefes de la administración local— o bien por las audiencias. Les quedó reservadas prácticamente las meramente administrativas: obras públicas, hospitales, régimen de aguas, abastos, pesas y medidas, sanidad y regulación de oficios. Las ordenanzas municipales compendian la gestión normativa-municipal. Coexistieron tales municipios de españoles con los municipios —resguardos o reducciones— y cabildos de indígenas.

Notable fue el cambio habido una vez implantados los primeros sistemas políticos republicanos. La representación “corporativa” será de inmediato sustituida, bien por la representación “popular”, bien por la representación “nacional”. Lo municipal, lo local cederá su puesto a lo nacional, estadual o simplemente “central” en función de nuevos “poderes” hegemónicos o caudillistas. Sólo muy recientemente —Reforma Constitucional del 87— el municipio colombiano parece estar recuperando alguna parte de la primacía que tuvo en la colonia. No obstante se perdieron para siempre funciones tan importantes y definitivas a nivel de la justicia “pequeña” —civil y aun criminal (delitos menores y contravenciones)—, o de menor cuantía, como también las facultades de arbitraje y conciliación en lo civil y comercial que de una u otra manera podían ejercer, bajo procedimiento verbal y sumario, los corregidores y alcaldes mayores coloniales. La experiencia norteamericana en este aspecto sería bien diferente e ilustrativa, conforme a la primacía y vitalidad conservada —y siempre reivindicada— de todo lo municipal frente a lo estadual e incluso federal.

Si bien todos los elementos políticos descritos anteriormente reproducían con singular similitud la esencia de la arquitectura del poder peninsular en América, quedaba faltando un elemento consustancial al original pacto-contractual propio a la monarquía española. Si bien hubo —conforme ya se anticipara— tempranos y esporádicos intentos de efectuar e institucionalizar la participación americana en cortes, tal cual su naturaleza de “reinos” federados a la corona de Castilla, dichos propósitos nunca pudieron concretarse. La ausencia de esta institución y práctica será una de las causas de la descomposición vertiginosa del poder español en Hispanoamérica y por ende la base primera, aunque no definitiva para alegar los primeros derechos a la emancipación política de América.

Conforme se ha advertido la primera pretensión surgió de los primeros pobladores castellanos quienes presumieron su derecho para enviar “procuradores” a las cortes de Castilla, corona de la cual dependían. Posteriores intentos surgidos en la Península misma, facultaron al Perú y a México para convocar sus propias cortes. Un último intento, al final de la dinastía de los Austrias, pretendió vincular a los americanos, ya no peninsulares, a las cortes únicas españolas. Debe advertirse que de acuerdo a la práctica peninsular, los aludidos “procuradores” eran elegidos por los cabildos exclusivamente. En un principio estos estuvieron compuestos por castellanos y más tarde su composición sería netamente “criolla”, motivo de más para no quererse, ni en las colonias ni en la metrópoli su eventual convocatoria, fuera esta en América o en la Península.

Fue la España de la resistencia antinapoleónica de 1811, la que llevada de la mano liberal convocó las primeras cortes extraordinarias y generales del reino reunidas en Cádiz en 1810, sin distinguir formalmente —aunque si materialmente— entre uno u otro tipo de dominio del imperio español. Los americanos, bajo una representación parcial, reducida y elegida de forma totalmente arbitraria, tomaron asiento en dicha asamblea. El proceso de emancipación se había iniciado en toda la América, aunque era aún incierto su derrotero en todas las colonias. La voz hispanoamericana resultó entonces lejana y extremadamente minoritaria. Las medidas adoptadas con su voto u oposición, muchas de interés y perspectiva política de importancia para Hispanoamérica, naufragaron tanto por la apatía y desinterés de las colonias, como y fundamentalmente en virtud de la indiscriminada represión desatada por Fernando VII tras su restauración de 1814. Durante las nuevas cortes liberales del trienio constitucional —1820/23— nuevamente varios diputados hispanoamericanos tomaron asiento y apoyaron la reimplantación de la Constitución liberal de 1812 en América. México, reconquistado y “pacificado” a la causa peninsular, será el más cercano a este ensayo reversionista del último intento peninsular de una forzada y efímera restauración monárquica-constitucional española en América.

Lo que debe reseñarse en este aparte es que no existió en Hispanoamérica de forma debidamente institucionalizada la práctica permanente de juntarse en cortes, como tampoco ninguna alternativa supletoria de representación propiamente americana ante las cortes peninsulares. Si bien la institución fue decayendo y perdiendo importancia en España misma, particularmente tras la instauración borbónica del Siglo XVIII, la inexistencia de alguna de estas dos opciones dejó trunca o inconclusa la configuración del poder “total” monárquico en estos reinos.

En virtud de ello, y como era de la esencia del “pacto-contratual” no llegaron a ser finalmente auténticos reinos por carecer precisamente de este elemento. Este vacío o falla fue triple: no asistieron procuradores hispanoamericanos en pie de igualdad y regularidad a las cortes ordinarias o extraordinarias de la Península; tampoco hubo cortes individuales en las distintas provincias o reinos hispanoamericanos; menos aun, hubo cortes hispanoamericanas que congregaran la totalidad de las provincias o reinos de la América española.

La primera de las opciones habría sido posible, conforme lo pretendieron inicialmente los primeros pobladores castellanos, en la medida en que el conquistador o poblador hispano continuaban aún siendo tan súbdito de la corona castellana como lo era el resto de los súbditos peninsulares. La segunda de las alternativas, conforme lo quiso, al menos por dos veces^{55/}, el mismo monarca no prosperó por falta de interés colonial. Existiendo como existía en América la plenitud de los elementos tipificadores del poder real, virreyes y audiencias por parte del rey, ayuntamientos o cabildos por parte de sus súbditos no parecía extraño que ello hubiera sido posible. Varios factores apuntarían a una explicación plausible. La primera que el carácter de “súbdito” fue bien pronto en toda Hispanoamérica algo muy complejo y finalmente inmanejable. Si habían de ser los ayuntamientos o cabildos los llamados a representar los súbditos de la corona, aquellos cayeron muy pronto en manos exclusivas de la oligarquía criolla de los municipios que habrían sido llamados a ser presentados, todo ello con exclusión de los “peninsulares” que de siempre se consideraban, hasta bien consolidada la independencia, más hispánicos y súbditos que los americanos o criollos. En segundo lugar, los reales y auténticos “naturales”, los nativos o indios americanos, encomendados o resguardados, a pesar de gozar de sus cabildos propios, no habrían de tener representación alguna. Menos posible resultaba pensar en un interés o vocación de los restantes pobladores, los negros, pues sin ser éstos “naturales”, tampoco era o podían considerarse plenamente súbditos del monarca español en virtud de su condición de esclavos, siendo por ello igualmente inhábiles de representación. Unos y otros, continuarían siendo, hasta 30 años después de lograda la independencia, incapaces jurídica, civil y políticamente. Las castas, mestizos y mulatos en todas sus múltiples variantes, tampoco serían llamados a ser representados. Resultaba pues perfectamente explicable que en el fondo, los únicos interesados o motivados a reclamar sus propias cortes, fuesen los “criollos”.

Previo la convocatoria de las primeras cortes antinapoleónicas en Cádiz, la determinación de la base poblacional para calcular el número de diputados que por cada provincia americana debían asistir a tal representación, unificó de inmediato a los diferentes partidos y opiniones políticas peninsulares, concordando todos, con rechazo de las pretensiones americanas, en la exclusión de indígenas, negros y las “castas” de ellos derivadas. El tema será soslayado en las disputas iniciales locales en Hispanoamérica durante la constitución del Estado republicano. La hegemonía “criolla” habría sido absoluta y sólo cuando el tema “democrático” se impone a los prohombres de los

55/ Para Nueva España en 1530 y para Perú en 1540.

nuevos estados-naciones —luego de la desintegración de la Gran Colombia, en el caso de la Nueva Granada— la representación y derechos políticos de los indígenas y esclavos se convertiría en un nuevo motivo de lucha y división nacional.

La tercera opción, cortes únicas hispanoamericanas, no parece hoy ni pareció entonces una alternativa factible. Uno, quizás el único proyecto habido en tal sentido^{56/}, no pasó de ser una mera y particular iniciativa. La forma individual o singular en que el monarca español manejaba sus relaciones con cada uno de sus reinos americanos, no permitió jamás pensar en la factibilidad de esta alternativa. El recelo de congregar, bajo una misma institución, muy seguramente en ultramar y sin mediar la presencia física del monarca, se contradecía con el recelo regio y metropolitano de “juntar” en cortes el ya manifiesto poder “americano”. Intereses locales, intrigas y mezquindades que el mismo monarca y sus oficiales conocían sobradamente en virtud del cúmulo de pleitos, informes y querellas que aquellos adelantaban tanto en las colonias como en la metrópoli.

Por otra parte, la no existencia de un gran y único ente centralizador de la representación regia en América, en virtud de la igualdad o equiparabilidad que tenían entre sí las mismas autoridades de la corona o del pueblo, no hubiera permitido imaginar la factibilidad de manejar y controlar adecuadamente, por la metrópoli, las aludidas cortes americanas. Iguales en jerarquía, al menos formalmente, eran los virreyes, gobernadores o capitanes generales, las audiencias y los ayuntamientos o cabildos. Sólo el Consejo de Indias hasta los Borbones, o el ministro de indias durante éstos, habrían poseído plena jurisdicción o jerarquía general en América. Además de ser la representación unficiada del monarca. No cabía sin embargo imaginar el traslado o la presencia de aquellos en América durante la reunión de tales cortes. Más pensable habría resultado prever la convocatoria y asistencia en la Península de los diferentes “procuradores” americanos a cortes “especiales” o de Indias, no ya generales del reino, esta vez bajo la presencia del monarca. Tampoco hubo factibilidad ni interés americano en hacer posible ninguna de todas estas opciones, estando de por medio el complejo asunto de definir la plena titularidad de la “representación” propiamente americana, conforme ya se ha anotado

En cualquiera de los tres casos citados, los aparentemente beneficiados o agraciados con este tipo de privilegios, habrían sido los pueblos y ayuntamientos respectivos, esto es los americanos o criollos apuntalados en los cabildos locales, siendo éstos a su vez los menos interesados en aceptar la convocatoria regia, pues la misma habría implicado para aquellos asumir todas las obligaciones y consecuencias de su diputación, la primera y más gravosa, como ya se ha mencionado, el aceptar y pagar los impuestos, subsidios y donativos que la corona les hubiera asignado, en particular contribuir a la defensa y sostenimiento de la guerra del imperio contra sus enemigos, jurar y reconocer —renovando sus nexos de fidelidad y lealtad al príncipe heredero o al nuevo monarca— según cada caso y circunstancia. Esto será lo que en último término primará en el espíritu de los diputados americanos durante las convocatorias de 1810 y 1820.

La carencia de este elemento estructural del poder americano-colonial, la falta de una experiencia dada de “coparticipación” imperial, la falta de manejo de una dinámica política regional frente a un poder central —el monarca— y la no contribución a una normatividad propia dentro de un “todo” mayor, todo esto incluso a cambio de una contribución particular^{57/} —tal cual habría sido la fijación de impuestos, donativos o empréstitos para la defensa del imperio— impidió la formación en Hispanoamérica de un sentido o “espíritu” de unidad geopolítica a nivel mundial. Alejó fatalmente, desde siempre, la creación de un sentimiento unitario y solidario regional compatible con la idea de que una patria o estado total o plenamente hispanoamericano, conforme quedó evidenciado desde el momento mismo del inicio de la lucha independentista.

56/ Fue en 1570 según la iniciativa de oidor Alonso Cáceres de Ovando, visitador y presidente del Consejo de Indias, proyecto el cual estuvo referido a la convocatoria de las múltiples provincias, antillanas y de tierra firme que aún cubría la audiencia de Santo Domingo. Se trataba reunir los respectivos procuradores para plantear y resolver los principales problemas comunes a tan dispares lugares.

57/ Que de todas maneras le fue impuesta a los americanos por la vía de la coacción fiscal directa.

2. El "juntismo" hispanoamericano

El sentido de particularismo, finalmente de localismo propio a los nexos de dependencia de cada pueblo, villa, ciudad, provincia o "reino" respecto de la corona metropolitana, gravitará negativamente desde los inicios mismos del proceso emancipador. Esta práctica "localista", individualista e incluso preanárquica hispanoamericana no habría sido sólo la responsabilidad de la metrópoli como insistentemente se pregona. Mucho, gran parte de la responsabilidad al respecto bien podría ser encontrada en la apatía e indolencia que Hispanoamérica habría demostrado en tal sentido.

Dos consecuencias muy claras parecen haberse derivado para la Hispanoamérica pre y posindependentista. En primer término, y luego de desconocida cualquier pretensión metropolitana para continuar rigiendo los destinos coloniales una vez se consideró disuelta la monarquía española tras la sustitución dinástica de 1808, se impuso la práctica generalizada de imitar el ejemplo "re-constitutivo" metropolitano de ejercer el derecho de reversión de la soberanía popular en cada una de las villas, ciudades o provincias que se consideraron con tal derecho (la Nueva Granada sería un ejemplo patético al respecto). La convocatoria de juntas, congresos e incluso cortes a imagen y semejanza de la Península, será a partir de 1809 un largo y desgastador proceso a través del cual la región mostraría una temprana y "natural" incapacidad para lograr, en tan poco tiempo y sin experiencia previa, lo que nunca había sido posible durante 300 años.

Lo que en un comienzo fuera un primer y fácil "atajo" jurídico-político autóctono (juntas) para resolver en Hispanoamérica —como simple copia de lo ya hecho en la metrópoli— la crisis del poder político surgida con la desaparición de la dinastía borbónica en la Península, se convirtió muy a continuación en un instrumento sistemático de lucha y organización política tipo "constituyente" (congresos), el cual y al amparo de ecléticas e improvisadas asimilaciones de las experiencias francesa, angloamericana e incluso peninsular misma, sirvió para recabar la plena soberanía colonial para la formación de los estados y nacionalidades pretendidos en la región.

Esta extemporánea vocación de querer "reificar" en cada ex "reino" hispanoamericano nuevas entidades postcoloniales, definidas y configuradas en sus más detalles, antes que incentivo o motor de la unificación, constituyó un drástico y definitivo obstáculo a la generación de un nuevo telos postemancipador. La desunión, la atomización y la anarquización en torno a lo local, individual o particularista habría de primar y en torno a ello la preeminencia del caudillismo y caciquismo.

Por otra parte, esta incapacidad relativa de reunificación regional tuvo sus inmediatos e inevitable efectos externos. A nivel continental, esto es de toda la antigua Hispanoamérica, las inconsecuencias del juntismo local serían a su vez un anticipado fracaso del proyecto anfictiónico bolivariano de Panamá en 1826, y otros tantos esfuerzos reunificadores derivados de éste^{58/}, como una reafirmación de la vocación "atomista" heredada después de 300 años de aislamiento político colonial. A su turno, la no posibilidad de sustituir oportuna y adecuadamente los conceptos de reino, monarca e imperio habría de implicar para Hispanoamérica una limitante definitiva en sus proyectos de re inserción internacional una vez consolidada su plena independencia. Esto último tanto en términos americanos como de otros centros de poder internacional. La irresistible expansión de los Estados Unidos, como el alejamiento paulatino europeo, determinarán que pasivamente cada uno de los nuevos estados hispanoamericanos termine aceptando la preeminencia continental norteamericana y por ende la renuncia crónica a algún tipo de protagonismo al menos americano. La Unión Panamericana y su derivada la OEA será la formalización de este agudo proceso de decadencia política regional.

3. La diferencia norteamericana

La experiencia anglosajona de Norteamérica fue bien diferente. Conforme ya se reseñó, no sólo existió en cada una de las colonias anglosajonas una temprana práctica "representativa", sino que las mismas habían experimentado con buen éxito la opción de juntarse y federarse en uniones, congresos o asambleas de varias de ellas

58/ Congreso de Tacubayá en 1828, congresos americanos de 1831 y 1847, Liga Americana de 1857, Liga Americana de 1861, Congreso Americano de 1864. Igualmente, los más recientes esfuerzos de la ALALC, Mercado Común Centroamericano, Mercado Común del Caribe, Grupo Andino, SELA y CECLA.

para el logro de objetivos comunes. En este caso fueron objetivos manifiestos, la defensa militar frente a enemigos comunes de la metrópoli (franceses del norte o indios del noroeste u occidente) como la unificación de intereses "continentales" contra la apetencia fiscal de la corona inglesa. A su vez, si bien jamás existió en ellas la opción de una representación propiamente norteamericana en el parlamento británico, si estuvieron las diferentes colonias representadas permanentemente en Londres a través de diputados ingleses residentes en la Isla. La denuncia de la ilegitimidad de dicha representación para imponer nuevos gravámenes a las colonias será el argumento último proindependentista^{59/}.

F. Independencia americana e inserción internacional

Corresponde en este aparte discutir la forma en que los nuevos estados nacionales hispanoamericanos abocaron su inserción en la comunidad internacional que le fue concomitante. La consolidación de la independencia de las colonias inglesas de América cambió de forma sustancial la estructura política del mundo de entonces, mundo que como ya se ha advertido giraba indisputadamente en torno a la plena hegemonía occidental, particularmente de Inglaterra, Francia, España y Holanda. La alianza dinástica de los borbones franceses y españoles —pactos de familia— consecuencia de la guerra de sucesión española de comienzos del Siglo XVIII, fue una, quizás la única de las opciones existentes en el "continente" para tratar de asegurar el precario equilibrio del poder mundial, especialmente naval, cuya predominancia correspondía ya por casi un siglo a Inglaterra, señora o dueña de los mares del planeta.

Como prueba reiterada del singular pragmatismo anglosajón, siete años después de declarada la independencia de las trece colonias, Inglaterra, a la vez que reconoció a la nueva nación (Tratado de París de 1783) firmó la paz con sus antiguos rivales. Se lanzaría ésta de inmediato a rehacer, ahora en Oriente y luego en Francia, un más vasto y más duradero segundo imperio colonial.

Las cosas ya no serían iguales para América ni para Occidente, ni finalmente para el mundo. Francia había vengado con prontitud su derrota en el Canadá 20 años atrás. La España de Carlos III nada tenía que ver en dicha revancha, que no fuera la humillación que la flota inglesa del Mediterráneo le había propinado a éste cuando siendo rey de Nápoles, debió soportar un bloqueo naval de su capital por más de 4 meses. Conforme a lo que muy a continuación Hegel habría de postular, la independencia norteamericana era una clara comprobación empírica de su crítica concreta de la historia. Eran las fuerzas antagónicas, coloniales, metropolitanas e interimperiales, las que se habían conjugado para producir un avance más de la historia. La independencia norteamericana era la síntesis de la dialéctica entre lo formal y lo concreto de la dinámica de los pueblos. El renacer del espíritu y de la idea, se encarnaban en la América con el nacimiento de los Estados Unidos. Un nuevo mundo, constituía una revitalización de la historia, vista ésta como síntesis del espíritu y la idea del universo, de un universo que se reproducía en el norte del continente y que como tal debería ser a su imagen y semejanza.

No obstante esta inequívoca manifestación de la dinámica dialéctica de la historia tendría sus claras e inmediatas implicaciones políticas para el resto del mundo hispánico, en particular para España e Hispanoamérica. Infortunadamente para esta última los acontecimientos se sucederán vertiginosamente a partir de 1783 y muy pocas luces aparecerán en uno y otro lado del imperio español. Los privilegios de la dialéctica hegeliana, o bien no llegarán a producirse en el resto de América o bien están aún pendientes de manifestarse. Es esta una de las hipótesis de la aquí llamada "antidialéctica de la modernidad o el desarrollo", también llamada subdesarrollo o más bien "mal desarrollo", tan típico a la examérica española.

59/ "No más impuestos sin representación" colonial será precisamente el primer grito de rebeldía de los colonos americanos contra el monarca inglés y la base ideológica suficiente para pretender la independencia. El Congreso de New York o Congreso del Stamp Act (Ley de Timbres) de 1764, promovido por la Asamblea General de Massachusetts congregó a 28 diputados de 9 provincias norteamericanas para el rechazo común de ésta y anteriores imposiciones inglesas, como para la adopción de la declaración de Derechos y Libertades. Fue esta una experiencia definitiva en la formación de un sentir y voluntad geopolítica superior a las provincias mismas, un paso previo e inmediato a la unidad federativa, que 10 años después —Congreso Continental— llevaría a creación de los futuros Estados Unidos de Norteamérica.

1. Monarquismo e independencia

Tras las paces de París (Versalles para los españoles) de 1763, el Conde de Aranda, embajador español, quien tanta ingerencia tuvo en dichos tratados, remitió al rey Carlos III una famosa memoria absolutamente profética sobre el futuro, no sólo del imperio español como del occidente todo:

“Acabo de ajustar y firmar, en virtud de órdenes y poderes que se ha dignado darme V. M. un tratado de paz con Inglaterra. Esta negociación ... ha dejado, debo confesarlo, un sentimiento penoso.

La independencia de las colonias inglesas queda reconocida y este es para mí motivo de temor y dolor. Francia tiene pocas posesiones en América... España, su íntima aliada, tiene muchas y ... desde hoy se haya expuesta a las más terribles conmociones.

Añadía luego:

“... estoy conforme acerca de las dificultades de conservar nuestro dominio en América ... La dificultad de enviar socorros necesarios; las vejaciones de algunos gobernadores para con sus desgraciados habitantes; la distancia que los separa de la autoridad suprema a que puedan recurrir pidiendo el desagravio de sus ofensas ... las venganzas a que permanecen expuestos mientras tanto por parte de las autoridades locales; la dificultad de conocer la verdad a tan gran distancia, y finalmente los medios que los virreyes y gobernadores, como españoles, no pueden dejar de tener para obtener manifestaciones favorables a España, circunstancias que reunidas todas, no pueden menos de descontentar a sus habitantes de América, moviéndolos a hacer esfuerzos, a fin de conseguir la independencia, tan luego como la ocasión les sea propicia.

“(temo) ... serios peligros por la nueva potencia que acabamos de reconocer, en un país en que no existe ninguna otra en estado de cortar su vuelo. Esta república federal nació pigmea por decirlo así, y ha necesitado del apoyo y fuerzas de dos estados tan poderosos como España y Francia para conseguir la independencia. Llegará un día en que crezca y se torne gigante y aun coloso temible en aquellas regiones. Entonces olvidará los beneficios que ha recibido de las dos potencias, y sólo pensará en su agradecimiento. La libertad de conciencia, la facilidad de establecer una población nueva en terrenos inmensos, así como las ventajas de un gobierno naciente, les atraerá agricultores y artesanos de todas las naciones; y dentro de pocos años veremos con verdadero dolor la existencia tiránica de este coloso de que estoy hablando”.

En consecuencia proponía Aranda a Carlos III.

“... el primer paso de esta potencia, cuando haya logrado engrandecimiento, será apoderarse de las Floridas a fin de dominar el Golfo de México. Después de molestarnos así y [en] nuestras relaciones con la Nueva España [México], aspirará a la conquista de aquel vasto imperio [México], que no podremos defender contra una potencia formidable establecida en el mismo continente y vecina suya”.

“Estos temores son muy fundados señor, y deben realizarse dentro de breves años, si no presenciamos antes otras conmociones más funestas en nuestras américas”.

Las “otras conmociones más funestas” sobrevendrían bien pronto: el estallido de la Revolución Francesa, la guerra española contra la Francia de la convención, su funesta alianza con Napoleón, las dos guerras contra Inglaterra, la sustitución dinástica de Bayona y la forzada alianza con Inglaterra, conformarán el marco externo respecto del cual se iniciará la emancipación hispanoamericana. Un buen y aparente negocio “continental” había hecho España durante el siglo XVIII uniéndose con Francia para debilitar el poderío económico y marítimo inglés. Un pésimo e imponderado negocio hizo aquella desde el punto de vista americano. Un mal, malísimo negocio, habría sido hecho por ambas potencias permitiendo el nacimiento de los Estados Unidos, no sólo por el desbalance de poder e influencia que así se crearía en América, sino en el resto de occidente y por ende del futuro mundial. Una vez más la dinámica del espíritu y de la idea quedaba sujeta a los antagonismos y contradicciones de viejos y nuevos intereses imperiales en juego. Una nueva “síntesis”, cercana o remota, terminaría por engendrar una nueva entidad histórica occidental o mundial. Parecería ser que apenas ahora, muy seguramente a partir de 1992, estaría

aflorando tan esperada realidad. Desde entonces, y hasta ahora, conforme lo presintió 200 años atrás el Conde de Aranda, Hispanoamérica se habría quedado al margen de tan largo y cruento proceso.

Pero de acuerdo con lo que aquí se pretende discutir, la historia del poder en América, resulta evidente que el surgimiento de los Estados Unidos, como “nueva” entidad política en lo que aún continuaba —y a partir de entonces volvió a llamarse con más vigor— “nuevo mundo” cambió la dinámica de la historia política occidental. El Conde de Aranda tenía razón, aunque sólo parcial: no sólo el resto de América podría continuar siendo igual, sino tampoco el resto del mundo. La preocupación de éste, finalmente su gran obsesión, era Hispanoamérica y por lo mismo la necesidad imperiosa de preservar el “telos” de lo que aún singularizaba y debía continuar singularizando lo hispánico, lo de allá, lo de acá. Implícitamente suponía Aranda que al deshacerse tal “telos” el equilibrio político de occidente cambiaría irremediabilmente. España y lo hispánico se desintegrarían irreversiblemente en luchas y conflictos intestinos que les alejarían fatalmente del escenario de la nueva historia que, para aquel, estaba ya a puertas. España sin Hispanoamérica no era nada, no podría ser nada, pero lo contrario sería todavía más cierto. La edad “contemporánea” cuya marca todos insisten en colocar a partir de 1789 pero que Aranda apunta en 1783 estaría pues privada de la presencia necesaria de lo hispánico.

Para el Conde de Aranda había que rehacer cuanto antes el imperio americano. Hispanoamérica debía ser emancipada por la metrópoli misma, antes que aquella y otros intereses ajenos y antihispánicos, liderados no tanto por Inglaterra como por los nuevos Estados Unidos, arrastrasen a tales colonias a una independencia que sólo sería una nueva y más ruinosa dependencia. Todo era demasiado “nuevo” para el Conde de Aranda. Hispanoamérica estaba muy lejos, extremadamente lejos para pretender, tras su independencia, el poderío que desde un comienzo presagiaban los Estados Unidos.

2. Una opción perdida

En 1781, dos años antes de escribir su memoria a Carlos III, cuando aún estaba en pleno fragor la guerra de independencia americana, y cuando en estos dominios la llamada comunera daba ya sus primeros campanazos de rebelión y voluntad emancipadora, el mismo Conde de Aranda desde París había remitido al entonces Príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, un “Plan de Gobierno para el Príncipe”. En el mismo, se juzga con extrema dureza la política española en las Indias, prevé como inevitable la secesión colonial. Mal que bien, un hombre que no había pisado América elabora uno de los muchos “Memoriales de Agravios” que singularizarían luego los argumentos justificativos del derecho a la emancipación local^{60/}. Para evitar los esperados desastres, proponía la creación de tres monarquías americanas, una en México, otra en tierra firme (Nueva Granada) y otra en el Perú, todas tres indisolublemente atadas a España. Más tarde, en su Memoria de 1783 ya citada, cuando el hecho federal y republicano norteamericano recibía su sanción en Europa, su propuesta monárquica adquiría una nueva e inusitada dimensión.

Aranda era ilustrado, absolutista y partidario de la monarquía iluminada. Gran masón, antijesuitico (cuya expulsión de España y América decidió) y necesariamente receloso del modelo republicano, así fuera este de origen “ilustrado”, máxime cuando tales luces habían provenido de Inglaterra (Locke). El balance de poder que Aranda imagina en América y Occidente debía ser igualmente de naturaleza “federal”, pero unido a la metrópoli española. No podía concebirse un nuevo mundo autónomo, exclusivamente republicano y ajeno a la Europa, fuente de la civilización occidental. Menos aun debía permitirse un nuevo mundo hegemónico en el norte y subyugado en el sur.

La “federación monárquica” hispánica ideada por Aranda desde 1781, modificaba sustancialmente el origen y sentido de la original monarquía española en América. Si bien los dominios americanos eran inalienables por parte del rey de España, la forma y compromisos de la cesión que él mismo haría en favor de sus propios hijos o herederos, salvaguardaba, no obstante, dicho compromiso histórico, tanto en España como en América. La nueva constitución de la monarquía americana preveía, según Aranda:

60/ Para entonces Camilo Torres tenía apenas 15 años.

"Debe V. M. deshacerse de todas sus posesiones en el continente de ambas Américas, conservando tan solo la Isla de Cuba y Puerto Rico, en la parte septentrional, y alguna otra que pueda en la parte meridional, con el objeto de que nos sirva como escala y depósito para el comercio español ... deben establecerse tres infantes en América: uno, como rey de México; otro como rey del Perú, y otro como rey de Costa-Firme, tomando V. M. el título de emperador.

"Las concesiones de esta inmensa cesión podrían ser que los tres nuevos reyes y sus sucesores, reconociesen a V.M. y a los príncipes que ocupen el trono después, por jefes supremos de la familia; que el rey de México pagase cada año como feudo por la cesión de aquel reino, una contribución en plata de un número determinado de marcos que se enviarían en barras para acuñarlos en las casas de moneda de Madrid y Sevilla. Lo mismo haría el rey del Perú pagando en oro sus posesiones. El de Costa-Firme (Nueva Granada) remitiría cada año sus contribuciones en géneros coloniales, sobre todo, en tabaco, para abastecer los estancos del reino ... Estos soberanos y sus hijos deberían casarse siempre con infantas de España o de su familia, y los príncipes españoles se enlazarían con princesas de los reinos de ultramar. De este modo se establecería una unión íntima entre las cuatro coronas, y antes de sentarse en el trono cualquiera de estos soberanos debería jurar solemnemente que cumpliría con estas condiciones. El comercio habrá de hacerse bajo pie de la más estricta reciprocidad, debiendo considerarse las cuatro naciones como unidas por la más estrecha alianza ofensiva y defensiva para su conservación y prosperidad".

En el año en que esto escribía desde París el Conde de Aranda, Simón Bolívar nacería en Caracas y José de San Martín cumpliría apenas cinco años. Uno y otro serían al final de sus vidas partidarios de un arreglo o fórmula de tipo monárquico como alternativa última para evitar el caos y la anarquía totales que amenazaban con destruir para siempre la precaria independencia suramericana. En 1783 nació también en Valladolid (México) Agustín de Iturbide, quien en 1822 sería proclamado como Iturbide I, instaurando un régimen monárquico independiente de la metrópoli, algo que 39 años había atrás querido evitar el inquieto aragonés Aranda. Ninguna de estas alternativas tendría finalmente éxito.

No obstante, y en medio de estas distantes alternativas, en octubre de 1820, el vicepresidente de la recién creada República de Colombia, y ahora enviado extraordinario de la misma en Europa, Francisco Antonio Zea, estando en Londres presentó a Fernando VII, a través de su embajador Duque de Frias, un Plan de Reconciliación, entre España y América. Por el mismo, a la vez que España reconocía la independencia de Colombia, y otras excolonias que luego lo solicitaran, convenía aquella en unirse a las mismas dentro de una "Confederación" general sobre el principio de ... "unidad de poder y de interés y de la supremacía de la metrópoli ...". Esta especie de "commonwealth hispánica" suponía la renuncia española a reconquistar, mediante la fuerza y bajo un solo y exclusivo "gobierno" y "constitución"^{61/} sus provincias "rebeldes" de América, en un principio aquellas que en la fecha continuaban luchando por su independencia^{62/}.

La "unión confederativa" de Zea suponía un mutuo, perentorio e ineludible interés común, como recíprocos aprovechamientos y conveniencias. Por una parte Hispanoamérica eludiría la ruta impredecible de la desunión, la anarquía y el caos que ya se presagiaban en ella, evitando a la vez caer en alguna de las órbitas de influencia y so-

61/ En dichas fechas, hacía poco más de 10 meses que la Constitución Liberal de 1812 había sido restaurada en España luego del golpe de riego en cabezas de San Juan que obligó al entonces absolutista Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz de 1812. Las cortes de entonces habían concedido una diputación permanente a las provincias americanas. La Asamblea se aboca de inmediato al estudio de la "reconciliación" con las provincias que continuaban luchando contra la metrópoli. Una de sus decisiones inmediatas será la suspensión de la campaña del general Morillo en tierra firme, el armisticio de Trujillo y el regreso de aquel general a España. Dentro de este contexto, Bolívar había ordenado a Zea trasladarse a Madrid y unirse a los comisionados Revenga y Echeverría quienes pasarían a España para intentar una reconciliación con la madre patria sobre la base del reconocimiento de la plena independencia de Colombia. Fue entonces cuando Zea se sintió animado a presentar su famoso y poco divulgado Plan de Reconciliación.

62/ El río de la Plata, Chile, Nueva Granada y Venezuela. Cuba, Puerto Rico, México, Centroamérica, Quito y el Perú en una u otra forma continuaban "pacificadas" y leales a la metrópoli.

metimiento que ya le acechaba (Inglaterra y Estados Unidos). Por su parte, España y su monarquía al quedar a la cabeza de la Unión, además de ser los garantes de la tranquilidad y seguridad interior y exterior de la confederación, obtendría privilegios especiales de comercio en tan vastos territorios de que no gozaría ninguna otra potencia occidental. Recíprocamente, Hispanoamérica obtendría beneficios similares, especialmente de tipo comercial y económico. "... unidad de miras y de operaciones, unidad de comercio, unidad de poder y de existencia, unidad en todo como la hay en la religión, carácter, costumbres y lenguaje: esta preciosa unidad será el gran objeto de la ley orgánica de la Confederación Española, luego que se halle reunida ... un plan que fija para siempre los destinos de la monarquía ...".

Colombia y las restantes provincias que así lo pactasen con España —por lo mismo la metrópoli conservaría las que pudiera por la sumisión voluntaria, tal cual lo hicieron hasta 1898 Cuba y Puerto Rico— serían mutua y recíprocamente amigas, aliadas e íntimamente confederadas. Un tratado particular fijaría los adecuados y oportunos socorros que en caso de guerra exterior se prestarían unas y otra. El comercio sería recíprocamente libre y no pagaría en cada lugar más gravámenes que los pasados en cada país por el comercio interno de puerto a puerto. Habría un mutuo y permanente aporte y concierto para estimular conjuntamente la industria, agricultura o comercio. El sólo hecho del establecimiento de cualquiera de los nacionales en territorio del otro, garantizaría a éste los plenos derechos de ciudadanía. Habría mutua indemnización por los despojos y confiscaciones habidas hasta la fecha. La España y las provincias que concurrieran a ello, suscribirían a continuación la "ley orgánica de la confederación", determinándose entonces los derechos y deberes mutuos, reconociéndose la primacía de la metrópoli, como la composición de la dieta (o parlamento confederado) detallándose su composición, residencia y duración de sus reuniones.

Tan exhaustiva propuesta —la cual, según parece, nunca tuvo la autorización, ni previa ni posterior de Bolívar— fue de plano rechazada por Fernando VII. Se perdió entonces una de las últimas posibilidades que existieron para la antigua monarquía hispánica de formar con varias, sino con todas sus excolonias, ... "una nueva asociación política o imperio compuesto de repúblicas perfectamente independientes pero reunidas para su felicidad bajo la presidencia, no bajo el dominio, de una monarquía constitucional ...".

3. *El fin de lo hispánico*

Nadie podría, ni entonces ni ahora, predecir la suerte y marcha de semejante pacto político. De lado y lado se desechó la opción de una sana y en dicho momento oportuna regeneración hispánica. La suerte y destino, tanto peninsular como hispanoamericano habrían de marchar por caminos marcados por largas guerras civiles, la asonada, el golpe militar y el paso asincrónico frente a la marcha del progreso y la modernidad contemporáneas. En la Península sólo en 1939 terminaría su última gran guerra autodestructiva y apenas en 1975 sería restaurada la plena libertad política, bajo los auspicios de una monarquía borbónica y constitucional. Con la sola excepción costarricense, el resto de Hispanoamérica no podría precisamente mirar tranquilo ni su pasado reciente, ni su situación actual como tampoco su futuro cercano, unos y otros plagados de las mismas convulsiones que 200 años atrás se quisieron evitar.

Tanto el temprano —y también extemporáneo— proyecto del Conde de Aranda como el Plan del Enviado Zea tenían varias cosas en común. Primero, la supremacía histórica de lo "hispánico" como una entidad geoestratégica y una unidad de poder mundial. En el proyecto se trataba de salvaguardar lo hispánico dentro de una monarquía, que hasta ese momento, y por no más de seis años, era y continuaría siendo "absolutista-ilustrada", tal cual el espíritu de los borbones. En el plan se trataba de una simbiosis republicana (América) y monárquica (la España monárquica y eventualmente algunas de sus exprovincias americanas que decidieran adoptar tal sistema constitucional, tal cual lo hizo México dos años luego). En ambos casos primaría un fundamento liberal, constitucional y positivista.

Lo segundo, era lo federativo. Ambos mantenían o formalizaban una nueva superestructura imperial-contractual, siendo dinástica la propuesta del proyecto y la segunda eminentemente voluntarista. En una y otra, se rehacía la base "pactista" de la original monarquía hispánica. Lo federativo, sin embargo no tenía las mismas implicaciones en una y otra propuesta. En el proyecto de Aranda se otorgaba a América, a iniciativa del rey de España, una "emancipación", en el proyecto de Zea, España convenía, bien en reconocer la plena independencia de algunas de sus excolonias, o bien decidía esta en "independizar" a aquellas que se acogiesen a dicho plan. Sin embargo, en

una y otra iniciativa, con menor o mayor autonomía, Hispanoamérica empezaría a dirigir, con instituciones y normatividad propia, sus nuevos destinos.

En tercer lugar, se creaba una sólida y vastísima área de comercio, inversión y migración cuyo potencial de mercado era ligeramente inferior en Hispanoamérica que en España (Ver anexo 1). Dicha área, además de ser una unión económica y comercial, lo sería de naturaleza política, militar y diplomática a cuyo mantenimiento y defensa concurrirían ambas partes, oportuna y adecuadamente. Habría una legislación común en áreas y temas que el mutuo acuerdo decidiría, pero particularmente en el fomento de la industria, la agricultura y el comercio. En suma, una nueva familia formada por un aun fuerte padre y múltiples hijos debidamente emancipados, habitando cada uno su propia casa.

Por su parte, los intermedios proyectos monárquicos de San Martín y Bolívar (los cuales se afirma fueron tema de la entrevista de Guayaquil) entre otros, fueron a su vez simples soluciones locales, netamente americanas. La amplitud del modelo bolivariano suponía que la constitución diseñada (Boliviana) cubriría todos los andes septentrionales (Tratado de Chuquisaca y Gran Confederación de los Andes de 1826). Sin embargo, y conforme a la arquitectura institucional ideada por Bolívar, su proyecto constitucional, siendo más monárquico que republicano, trató de formular para los Andes una simbiosis bastante similar al Plan Zea.

4. *El antecedente napoleónico*

La historiografía del período napoleónico no recoge con detalle suficiente los complejos acontecimientos que desde Francia, Estados Unidos y España, y a partir de marzo de 1808 y hasta comienzos de 1814, pretendieron afectar la primera fase de la lucha independentista en Hispanoamérica. Es preciso recordar que el imperio colonial formó parte explícita de la nueva estructura constitucional hispánica otorgada por Napoleón en Bayona en julio de 1808, tras la mutación de la dinastía peninsular que entonces se operó. El Título X de la referida constitución, por lo demás la primera constitución escrita española, reservó un régimen particular y especial a las colonias del imperio español. Si bien las aludidas colonias continuaban formando parte de la corona española, se otorgó a sus habitantes una igualdad jurídica respecto a la metrópoli, libertad económica (agricultura, comercio e industria) como una permanente representación (21 diputados) de elección a través de los cabildos respectivos. Resulta bien notorio que a dicha asamblea de Bayona asistieron como diputados por la Nueva Granada don Ignacio Sánchez de Tejada y don Francisco Antonio Zea por Guatemala. A aquel le correspondería luego una larga y decisiva actuación en nombre de Colombia frente al Vaticano. Francisco A. Zea asumiría en Bayona una activa iniciativa en la adopción del aludido Título X, tal cual consta en sus varias memorias elevadas ante el propio Napoleón en unión a los diputados de Caracas, Buenos Aires y México^{63/}. La Constitución de Bayona jamás tuvo vigencia en la América española.

Por múltiples razones ni París ni Madrid fueron capaces de sustentar sus pretensiones de rehacer lo hispánico, peninsular y ultramarino, en torno a la nueva dinastía francesa instalada en la metrópoli. En lo que respecta a His-

63/ La apasionante biografía de Francisco Antonio Zea está aún pendiente de escribirse. En 1808 se encontraba en Madrid en calidad de director del Jardín Botánico de la corte, premio final por su participación en el "proceso de Nariño" (1794). Luego de purgar 2 años de cárcel en Cádiz, pasó becado a París por 3 años. En 1801 regresó a Madrid donde para alejarlo de Santa Fe se le asignó a dicho jardín ocupando su dirección a la muerte del gran sabio Cavanilles. Murat —entonces lugarteniente de Napoleón en España— le nombró diputado suplente por Guatemala a las cortes de Bayona, al haber sido escogido ya por la Nueva Granada D. Ignacio Sánchez de Tejada. En nombre de la diputación americana pronunció el discurso de bienvenida de José Bonaparte. Este le confirmó como director del Jardín Botánico de Madrid. Luego le nombró Prefecto (alcalde) de Málaga en 1810 cargo que ocupó hasta el retiro de José de la Península y a quien acompañó en su exilio. Viajó a Inglaterra y en 1816 desembarcó con Bolívar en la Isla de Margarita. Después de los descalabros de la tercera campaña venezolana de Bolívar, vuelve a reunirse con éste en Haití en 1817, habiendo tenido el encargo de convencerle a regresar en una cuarta campaña libertadora. Desde 1817 estaba en Angostura siempre al lado de Bolívar. Su biografía es más conocida a partir de entonces. Sus restos moran todavía en Bath, Inglaterra, esperando ser repatriados a Colombia, incluso a Medellín su tierra natal.

panoamérica todo se quedó en una efímera guerra de correos y supuestos emisarios que muy hábilmente supo aprovechar Inglaterra para ganar a su causa antinapoleónica las diferentes posesiones hispanoamericanas. En el caso concreto de la Nueva Granada el nombre y obra imperial napoleónica sirvió para muchas cosas a la vez. En primer término permitió desatar una de las primeras batallas maniqueas entre criollos y peninsulares, estos últimos acusados por aquellos de favorecer y permitir la cesión de tales posiciones a la gran tiranía europea. Lo anterior, fundamentó la primera e improvisada armazón jurídica utilizada para declarar vacante la soberanía borbónica en América y en consecuencia reclamar el derecho, primero a la "emancipación" y más tarde a la plena "independencia"^{64/}.

Uno de sus inmediatos corolarios sería el desconocer toda tentativa peninsular, tanto "Josefina" (o bonapartista), como de la España que le resistía, para ejercer algún tipo de soberanía y gobierno sobre estos dominios. Se desatará una segunda guerra maniquea entre los partidarios de la junta central (luego regencia) como de la autonomía local, enfrentamientos éstos que desde un comienzo deslindarán irreconciliablemente los bandos que impedirán toda opción de acción unida y concertada en una coyuntura internacional como la que se desenvolvía en torno al episodio napoleónico. La estridente disputa intestina que ya librada en la mayoría de las colonias no permitirán escuchar el famoso pronunciamiento efectuado por Napoleón en diciembre de 1809 ante el Cuerpo Legislativo del imperio, declarando entonces que a partir de ese momento, él y la Francia imperial, no sólo no se opondrían a la Independencia de la América hispánica, sino que mirarían a la misma con simpatía y consecuente con el acontecer natural e inevitable de la historia. Fue este el primer reconocimiento internacional de la Independencia hispanoamericana cuando aún eran contados los que en toda la región pensaban que ésta podría ser conquistada.

5. *¿Inglaterra o Estados Unidos?*

Inglaterra y los Estados Unidos serán los dos únicos y grandes favorecidos con esta posición hispanoamericana. Emisarios y "diputados" de todas las provincias, e incluso ciudades "rebeldes" de Hispanoamérica, van y vienen en súplica de socorros y empréstitos para adelantar la guerra de independencia. Agentes y enviados extraordinarios harán paciente antesala por más de doce años en las cancillerías de Londres, Washington, París y Roma hasta que los Estados Unidos decide iniciar en 1823 el reconocimiento de la Independencia de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, la primera de ellas como es sabido, la "Unión Colombiana", la de 1821, la de Bolívar, Santander, Páez y Flórez. Una penosa y aun no plenamente estudiada guerra de "corso" supuestamente de las provincias rebeldes —pero en último término adelantada por aventureros americanos y europeos— contra los reductos del comercio español en América, llegará a inquietar a las potencias de la Santa Alianza. Estados Unidos será el gran favorecedor y favorecido con tan escandaloso negocio, particularmente en el Caribe^{65/}. La Colombia de entonces jugó un poco memorable papel en la primera de las grandes "guerras sucias" de su historia republicana^{66/}. Si bien el Congreso de Panamá en 1826 se pronunció por la abolición del corso independentista, al mismo tiempo se decidió armar una flota conjunta de invasión (Colombia y México) para atacar Cuba y apoyar su independencia. La inmediata y terminante reacción norteamericana evitó tales intentos. El "Norte" había impues-

64/ El tema parece extremadamente sutil. El simil con el derecho privado es ciertamente válido. Como es ampliamente conocido todos los primeros movimientos autonomistas en Hispanoamérica habidos entre 1809-1814, no sólo reconocen los derechos dinásticos de Fernando VII, varios incluso lo invitan a reinar en tales dominios, sino que se dicen "tuitivos" o conservadores de sus derechos monárquicos en América. Al igual que la Península se pretende en un comienzo simplemente suplir su ausencia y como pretendientes por ello a una "mayoría" de edad, adquirentes del derecho a regir autónomamente sus destinos. Será luego de la restauración absolutista de Fernando VII en 1814, cuando tras desatada por éste una guerra de reconquista, tales dominios decidirán asumir la plena independencia.

65/ Entre 1815 y 1822, Baltimore y Charleston serán los grandes centros donde se armarán, con complacencia de las autoridades locales, los supuestos corsarios hispanoamericanos —de Colombia, Montevideo, Caracas y México, principalmente— siendo a su vez aquellas las beneficiarias de las presas y botines respectivos.

66/ En 1818 la presencia de los supuestos corsarios colombianos azotaba las costas de Galicia, el Cantábrico, Cádiz e incluso Las Canarias en España, como de Cuba y Puerto Rico en el Caribe.

to al "Sur" su primera y definitiva ley en los océanos americanos. En 1828 en unión a Gran Bretaña garantizarán a una España impotente el resguardo definitivo de Cuba y Puerto Rico como sus últimas posesiones americanas, seguridad la cual difícilmente lograrán los Estados Unidos mantener por 70 años más.

6. *¿El fin de un sueño independentista?*

Con posterioridad al Plan Zea, nuevas y complejas negociaciones y fórmulas monárquicas continuarán ideándose en Europa para la América española, fundamentalmente dirigidas a México y Buenos Aires. Conspiraciones que siempre manejó la Francia borbónica de la restauración postnapoleónica. Iniciativas a las cuales se opusieron Estados Unidos, Gran Bretaña y finalmente el mismo Fernando VII. Si bien no se trataba ya de un plan general para Hispanoamérica, se rememoraba en forma muy tardía y parcial la idea de Aranda al involucrar la venida a Buenos Aires o México del infante Francisco de Paula, hermano menor de Fernando VII.

Sin embargo, como es sabido, para las mismas fechas del Plan Zea la preocupación norteamericana sobre el futuro político de sus vecinos del sur era ya harto manifiesta. Bastante dura y compleja el manejo de su política de "neutralidad activa" frente al conflicto armado entre las colonias hispanoamericanas y su metrópoli. Su diplomacia externa otorgaba a dicho enfrentamiento un carácter meramente instestino dentro del estado español. Se reservaban los Estados Unidos en consecuencia el derecho de tratar e incluso comercializar separadamente con cada una de las partes. Dicha posición, hábilmente manejada durante 11 años por los presidentes y secretarios de estados americanos de turno (Jefferson, Madison, Monroe y Adams), permitió a los Estados Unidos, bajo pretextos y excusas mañosas invadir y finalmente apropiarse de las Floridas españolas, reductos desde siempre apetecidos por aquellos en su irrenunciable propósito de acceso y control definitivo sobre el Golfo de México y el Caribe, y como antesala para preparar su también "manifiesto destino" de expansión hacia el Pacífico.

Frente a España, los Estados Unidos dejarían entender, sin prometerlo explícitamente, el no reconocimiento futuro de la independencia de las colonias hispanoamericanas "rebeldes" a cambio de las cesiones territoriales y viejas compensaciones sobre el Mississippi. En 1819 obtuvo de España el llamado "Tratado Transcontinental" por el cual, además de legitimar su ocupación de las Floridas, aseguró sus primeros límites occidentales hacia el Pacífico. Por dicha cesión, una porción muy significativa de las posesiones españolas en Norteamérica, a la vez que dejaba de ser parte integrante de la monarquía hispánica, perdía la posibilidad de su independencia política, pasando a engrandecer territorial y políticamente a los Estados Unidos de América. Una nueva "monarquía europea" había sido derrotada y parcialmente alejada de América, esta vez diplomáticamente^{67/}. La inconclusa lucha por la independencia en el sur de América había servido para la "desespañolización" de inmensos territorios en el Norte.

7. *"América para los americanos"*

En Europa la reacción "legitimista" de la santa alianza promovida por Rusia —Zar Alejandro— y orquestada por Austria —Metternich— a la vez que reconstituyó territorialmente en el continente las monarquías europeas anteriores a la Gran Revolución francesa, unió y salvaguardó a las mismas contra el "liberalismo y sus nefastos efectos", entre estos las revoluciones y el republicanismo, tan manifiesta y sangrientamente activo en el Sur de la América, bajo la complacencia y engrandecimiento de la primera de tales repúblicas, los Estados Unidos^{68/}.

67/ A su vez vastos territorios contiguos —el resto de las provincias internas al norte de la Nueva España— quedarían expuestos, a partir de entonces, a la ya manifiesta voluntad expansionista norteamericana, cuya ocupación y anexión a la unión se perfeccionaría gradualmente tras guerras, sublevaciones locales y compras promovidas y concluidas por los Estados Unidos entre 1845 y 1848, completándose nuevamente con ello y a expensas del antiguo imperio español, el engrandecimiento territorial norteamericano sobre el oeste, base última de su poderío económico mundial.

68/ Había igualmente facilitado las aspiraciones expansionistas de la corte portuguesa aun radicada en el Brasil, en su intento de apropiarse la "banda oriental" del río de la Plata, lo cual se zanjó dinásticamente en un status-quo que concluyó con la creación de Uruguay.

Es precisamente la Santa Alianza, la Europa de los congresos, la que desde 1820 decide intervenir militarmente con fuerzas conjuntas en aquellos países en los que el liberalismo y su constitucionalismo republicano y democrático lograba algún éxito. Después de Nápoles, en 1823 el Congreso de Verona decide la invasión de España. Los "Cien Mil Hijos de San Luis", tropas francesas al mando del Duque de Angulema, ocupan totalmente a España, restaurando en su absolutismo pleno a Fernando VII, quedando cerrada toda opción de reconciliación y reconstitución hispánica en América. Un año antes, y frente al peligro de ver extendida dicha intervención europea en América, ésta se moviliza.

Por su parte los Estados Unidos producen dos actos singularmente importantes: en 1822 su presidente Monroe reconoce formalmente la independencia de Colombia; un año y medio después en su mensaje al Congreso lanzará su famosa doctrina: América, libre e independiente no podrá ser considerada a partir de entonces como objeto de la colonización europea. Cualquier intervención de alguna de sus potencias, sería considerado por la Unión como un acto de hostilidad hacia los Estados Unidos.

Muchas, indefinidas, habrían de ser las consecuencias —y sobre todo evoluciones^{69/} del mensaje Monroe. Antes que nada un indisoluble enfrentamiento quedó planteado en América a partir de finales de 1823. República versus Monarquía. Liberalismo contra absolutismo. América versus América. Si el enunciado Monroe equivalía a la reafirmación de la "individualidad" o singularidad de lo americano, implicaba necesariamente, o bien la capacidad de cada cual —Norte y Sur— de defender para sí lo propio, o bien —lo cual terminó por ser la realidad— la aceptación, por la América no anglosajona, de un nuevo e irresistible tutelaje político, económico, diplomático y militar por parte de los mismos Estados Unidos. En otros términos, convenir en la tácita sustitución de la presencia y papel imperial que aun entonces pretendía continuar jugando España en el resto de la América hispánica. Todo esto en tanto cualquiera de las pretendidas naciones o repúblicas del Sur no quisiera o pudiera disputar la supremacía y el compromiso que tal doctrina estatúa.

Una tenaz y soterrada lucha diplomática y comercial, particularmente por parte de Inglaterra y muy a continuación por Francia, se empieza a librar en las principales capitales hispanoamericanas para evitar la concreción de la hegemonía continental norteamericana. Dicha lucha apenas concluirá con la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra y el resto de Europa abandonen sus pretensiones al respecto, prácticamente en toda la América Latina.

Sólo la diplomacia colombiana, siguiendo las inspiraciones y ambiciones de Bolívar, había intentado ofrecer una alternativa contrapesadora del mensaje Monroe. Como es sabido una ofensiva diplomática continental se intentará con éxito aparente a partir de la instalación del Congreso de Cúcuta y la formalización de la República de Colombia. Los tratados con Perú, Chile, Buenos Aires y México de 1822-23 obtenidos por los comisionados Mosquera y Santa María, no sólo anticiparían la esencia de lo que desde entonces sería la quinta-esencia del derecho internacional público latinoamericano, como las ya manifiestas pretensiones unificadoras de toda Hispanoamérica en torno a un Congreso y Liga Anfictiónica Hispanoamericana. Son bien conocidos los avatares y desenlace de este esfuerzo. Los observadores británico y sueco —los norteamericanos no llegaron nunca— no dejaron de informar a sus gobiernos sobre el candor y la inconsecuencia de cuatro países, cuyos plenipotenciarios a pesar de su experiencia previa, se habían reducido, en las nueve sesiones del Congreso, a proponer y acordar temas y compromisos finalmente de imposible ejecución por todos y cada uno de ellos^{70/}.

69/ Es común llamar a esta primera versión de su doctrina como la del "aislamiento" americano. En 1848 el presidente J. Polk la convertirá en el argumento primero de una agresiva política "intervencionista" que tendrá su máxima expresión en T. Roosevelt. Para H. Hoover será el arma de la "buena vecindad" que continuarán F. D. Roosevelt, W. Wilson y J. F. Kennedy. Recientemente R. Reagan —y hace pocos días J. Bush— revivirán la concepción "policiva intervencionista".

70/ Sólo habían asistido 4 países: Colombia, Centroamérica, México y Perú. Colombia fue el único en ratificar lo acordado. Compromisos tales como la composición de un ejército y marina conjunta, el primero de 60 mil hombres y la segunda compuesta de tres navíos de entre 60 y 80 cañones, diez fragatas hasta de 64 cañones, ocho corbetas hasta de 34 cañones, 6 bergantines hasta de 24 cañones y una goleta de 6 cañones; el establecimiento de un fondo unido de 7,7 millones de pesos fuertes distribuidos según la población de cada cual para garantizar la alianza ofensiva y defensiva, serían buenos indicadores de su impensado idealismo.

La pretendida confederación hemisférica había fracasado por siempre. Otros esfuerzos posteriores, las primeras guerras fronterizas en el caso de Colombia, la desintegración de la Confederación Centroamericana y luego de Gran Colombia, dejaría sin perspectiva alguna la posible entidad geopolítica hispanoamericana. Para 1831 la satelización de la antigua América española estaba completada. El liberalismo triunfaba de nuevo en Europa. Las fuerzas democrático-populares empiezan a ganar una irreversible posición frente a la eufórica burguesía industrial, comercial y financiera que en Europa —y ya en Norteamérica— se aprestaba a intentar el segundo gran ciclo de la revolución industrial, la única que no había fracasado en parte alguna.

La América hispánica quiso sumarse a esta nueva euforia política y económica occidental. En la Nueva Granada postcolombiana los partidos se alinderan en torno al vituperio o ensalzamiento del difunto Bolívar. Civilistas y militaristas tratarán alternativamente de aplacar o acaparar demagógicamente las pretensiones populares. La promesa de la “democracia”, como antes lo había sido la promesa de la “libertad”, será la voz común que pretenderá congregar el “espíritu nacional”, antes de haber consolidado plenamente la independencia. Tras la muerte de Fernando VII, España entrará en su primera guerra civil contemporánea —primera Guerra Carlista— olvidándose por algún tiempo de su eximperio americano. Conservará por voluntad expresa de los Estados Unidos y Gran Bretaña sus posesiones de Cuba y Puerto Rico en el Caribe y Filipinas en el Pacífico. El primer de ellos se encargará de emanciparlos al final del siglo. Colombia sería apenas reconocida por la madre patria en 1881.

Entre tanto, por las mismas fechas y en la joven Alemania, Jorge Guillermo Federico Hegel enseñaba a sus discípulos la aplicación de su método dialéctico a la construcción filosófica de la historia. En sus primeros cursos, su tesis del nuevo mundo inicial le obligaba a predecir como inevitable —y aun consecuente— un enfrentamiento, incluso guerra, entre el Sur y el Norte de América como única alterantiva para evitar el fin de la historia, para confirmar igualmente la presencia siempre dinámica del espíritu y la idea de que el Viejo Mundo parecía incapaz de garantizar. Esta predicción parece no se cumplirá jamás.

VII. UN TEMARIO PARA EL FUTURO

Conforme fue el propósito inicial, se ha intentado buscar en las páginas anteriores algunas de las claves determinantes del atraso histórico, ya bisecular, de la antigua América hispánica y en particular de la actual Colombia. Una escuela de la ciencia social contemporánea suele referir el análisis sobre el atraso relativo de una sociedad a una crítica histórica sobre el poder político. Tal parecería ser el caso, no sólo hispanoamericano, sino latinoamericano en general.

En base al somero escrutinio histórico efectuado sería factible demostrar que Hispanoamérica constituye la única porción del Occidente que aún no ha logrado alcanzar los niveles mínimos y aceptables de desarrollo y modernidad general pretendidos desde 1776 y que el resto del hemisferio empezó a conquistar hace más de 80 años. Tampoco resultaría extremadamente difícil verificar que tales estándares parecen estar cada día más lejanos para Hispanoamérica en virtud del paso sincopado que acompaña a la historia contemporánea de la región.

No sin pesimismo podría ahondarse en la anterior pesadumbre, de admitirse que ni la América hispánica ni el resto de occidente parecerían tener una clara conciencia de las ya preocupantes consecuencias del aludido desfase regional, actual y futuro. Lo anterior, particularmente en términos de un sano equilibrio mundial, cuya dinámica histórica difícilmente podría continuar soportando la presencia, cada vez más manifiesta, del atraso y violencia que caracterizan a poblaciones de un "peso crítico" como lo son las hispanoamericanas, conforme se aludió al comienzo de estas páginas.

La crisis del desarrollo y la modernidad en Hispanoamérica parece ser pues, antes que otra cosa, una crisis del poder político. Crisis del poder político que nace con la emancipación republicana, crisis que no ha podido ser superada durante 180 años de vida política autónoma.

Pero toda crisis del poder político, resulta ser a su vez la crisis de una determinada clase dirigente. En el caso hispanoamericano la reiterada crisis de la "gente" o clase que a comienzos del Siglo XIX asumió la responsabilidad de crear una nueva sociedad y estado en la antigua Nueva Granada. Crisis sin fin de los entonces llamados "criollos": intelectuales, militares o milicianos, clero, comerciantes, hacendados, mineros, burócratas, financistas, artesanos o industriales. Crisis de todos sus múltiples y repetidos descendientes.

Una primera suposición al respecto permitirá afirmar que las antiguas colonias españolas en América, al momento de definir su identidad republicana, y muy en contra de lo que habían hecho 34 años atrás las colonias anglosajonas del norte, decidieron prescindir totalmente de la experiencia y tradición política que caracterizaron los 300 años de vida colonial precedente. Conforme siempre se repite, se habrían adoptado, sin beneficio alguno de inventario, máximas ideológicas y modelos de organización y acción política, social y económica totalmente ajenas a su más rancia personalidad.

De todas las "virtudes" republicanas pregonadas como ideales de la "nueva patria" postcolonial, la "libertad" —tan frecuente y normalmente confundida en nuestro medio con el "libertinaje", la arbitrariedad y la impunidad— parece haber subsumido las restantes. A cambio, la "igualdad" se habría convertido apenas en un mero "derecho" y la "fraternidad" tan sólo en un canto sin fin repetido en medio de las peores angustias nacionales.

A su vez, el espíritu, mejor aun el carácter local, en vez de estimular la pugna constructiva de las posiciones encontradas, de admitir la fuerza de las ideas dominantes de facilitar la conciliación y el peso del consenso supletorio, habría estimulado el caudillismo autoritario e intolerante, el encono y recelo sistemático y la deslealtad crónica.

Por todo lo anterior, no resultó extraño que, muy tempranamente, la lucha por la independencia política en Hispanoamérica haya degenerado en una inagotada guerra civil, de la cual la actual Colombia sería un dramático ejemplo. Igualmente no deja de parecer paradójico que, y a la par que los países hispanoamericanos (la unión colombiana, la comúnmente llamada "Gran Colombia", la primera entre todas) declaraban con primacía sobre el resto del mundo como una norma fundamental de su derecho y relaciones internacionales, la solución pacífica y conciliada de todos sus conflictos, hayan a su vez reservado para su interior el uso indiscriminado y casi impune de todas las formas de la violencia y el exterminio parroquial.

Dos dimensiones claves a todo tipo de poder político parece haber perdido Hispanoamérica al momento de estructurar el nuevo estado postcolonial. Una interna y otra externa. La tarea no era entonces fácil. Tampoco lo había sido para las antiguas trece colonias anglosajonas. Al fin de cuentas la región era uno, el más importante componente de un gran imperio, en su época y gracias a la América misma, el más grande imperio moderno. El reto que se afrontó al momento de la independencia no podía ser otro que la preservación de una unidad geopolítica de tal magnitud sustituyendo, en lo interno y lo externo, la figura y funciones de un monarca como el español y con ello las formas de dominio político, económico y social coloniales e imperiales.

Ni lo primero, ni lo segundo parece haberse alcanzado. Al rechazar, por rechazar lo "español", Hispanoamérica habría rechazado lo "hispanico". A partir de entonces la región pretendió ser norteamericana, inglesa o francesa y últimamente rusa o china. Perdida en lo político la identidad hispánica, no pudo ser fácil ni inmediato la creación o afirmación de una nueva entidad geopolítica autóctona que desde entonces, tanto dentro de occidente como del mundo en general, hubiera podido llamarse con propiedad indiscutida "Hispanoamérica".

A nivel interno, la adhesión indiscriminada a la teoría y práctica de la llamada "división o separación del poder político", parecería haber constituido la más definitiva sustracción de lo hispánico. Si bien en los Estados Unidos de América y en la Europa republicana —con la excepción de los países ibéricos— resultó aquella finalmente una posibilidad de estabilidad y dinámica institucional, en la América hispánica, por el contrario, se habría convertido en una fuente permanente de inestabilidad y desinstitucionalización doméstica.

Mientras en los primeros países citados fue posible la creación y manejo de un nuevo tipo de Estado a través de la ficción suprema de la soberanía, popular o nacional, como sustituto oportuno y exhaustivo del monarca y su dinastía, reencarnados éstos en los partidos políticos, en Hispanoamérica —y en particular en la Nueva Granada— no parece haberse alcanzado un mínimo de tal racionalidad colectiva.

A falta de un concepto pleno de soberanía, el caudillismo hegemónico y su peor secuela, el clientelismo gamonalista, habrían alternado con la dictadura militar, la permanente desinstrumentación de una democracia formalmente sustentada en los atributos colectivos de la nación o el pueblo respectivo. Desapareció en consecuencia la necesidad práctica y cotidiana de auténticos partidos políticos como garantes de la "representación" democrática.

La resultante inevitable parece haber sido una total desarticulación entre soberanía, poder y gobierno. Si se prefiere entre pueblo/nación, estado y partidos conforme es propio a un inequívoco sistema democrático contemporáneo. Ausente la nación o el pueblo e inexistentes (o inoperantes) los partidos políticos, la "lucha" política se habría concentrado en la "toma" —"asalto" incluso del "poder" con minúsculas) antes que del gobierno mismo. Lucha esta cada vez mas reducida al usufructo hegemónico, por parte de unas "mayorías" nunca absolutas, del presupuesto público y la burocracia oficialista, primer gran sueño del criollismo decimonónico.

Desde los inicios mismos del intento republicano en Hispanoamérica, "gobierno" habría sido confundido con "poder". De allí entonces la manía "constitucionalista" de cada caudillo o grupo político de turno de querer "reconstituir" o reformar un estado —cada vez más inexistente— a imagen y semejanza de la ideología, el interés o el voluntarismo político de ocasión. En la actual Colombia, esta inveterada vocación formalista, casi fetichista, estaría representada por no menos de 18 diferentes constituciones republicanas y por no menos de 66 enmiendas introducidas a la ya centenaria constitución del 86.

De allí también, muy seguramente, la relativa incapacidad para la alternación y la rotación ordenada en el ejercicio del "poder" antes que del "gobierno" político. De allí igualmente el poco —o inexistente— estatus y funcionalidad de las llamadas "minorías". De ahí el "derecho" —ya casi institucionalizado— a la rebelión armada y anárquica, de derecha o de izquierda, guerrillera o militarista, como a su vez al perdón, indulto y olvido el fracaso de los inacabados intentos "revolucionarios".

De ahí a su vez la permanente rivalidad, desarmonía e incluso enfrentamiento entre los llamados poderes Legislativos (Congreso) y Ejecutivo, como en alguna medida entre Ejecutivo y el Judicial, esto último cuando se trata de la exequibilidad o aplicabilidad del derecho político interno.

Esta confusión fragante entre “poder” y “gobierno”, parece involucrar una permanente suplantación en la personalidad o identidad de quienes deberían encarnar uno u otro tipo, rama u órgano del dividido “poder político”. Entre quien debería asumir la “jefatura del Estado” y quien debería ejercer la “jefatura del gobierno”. Entre quien debería ser y estar constituido en nombre, y sólo exclusivamente en nombre, de la nación o pueblo respectivo como última instancia conciliatoria de todos los intereses en pugna, y entre quien, por otro lado, apenas representa y administra temporalmente —mientras es mayoría— el Estado en cuestión.

La anterior bicefalidad en la titularidad del poder y del gobierno parece haber sido más contradicente en los regímenes centralistas que en los federalistas. Al fin y al cabo dentro de estos últimos, los máximos poderes federales —Congreso, Presidente y Corte Suprema— serían apenas una ficción a nivel nacional, y en última instancia, de cada rama del poder de por sí ampliamente ejercido de manera singular y autónoma en los diferentes Estados, provincias y localidades de la unión. Algo así como un nuevo monarca reificado en estas tres instituciones federales.

Por otra parte, el dogma de la “división del poder público” aplicada por el republicanismo presidencialista de Hispanoamérica parece haber creado un doble y no concordante sistema de “representación nacional”. Por una parte, la que se concede y obtiene a través de los congresos o parlamentos y por la otra la que se otorga a quien se enviste con el carácter de presidente. Tanto representan y encarnan la nación o el pueblo los unos como el otro. Lo que es peor, una misma mayoría electoral se bisecciona en dos actores con tareas diferentes y a veces antagónicas frente a la responsabilidad común de sostener y engrandecer el Estado.

Sin embargo, ninguno de los dos es el titular pleno ni del poder ni del gobierno. La necesidad de mantener la precaria personalidad del presidente como jefe de Estado, impuso que este ni promueva, ni responda, ni defienda ante el Congreso las leyes que él mismo requiere para administrar. Prima pues en consecuencia una de las dos representaciones mayoritarias, la que encarna el Congreso, anulando de hecho la que a su turno ostentaba el ejecutivo. Las alternativas habrían sido entonces, o bien la inactividad del gobierno, o bien la tentación caudillista por parte del Ejecutivo. Una y otra cosa expresión del “totalitarismo” nihilista que acaba destruyendo, no sólo con todo principio de representación política, sino también con la pretendida división del poder público.

El vituperio del Congreso, las presiones retaliadoras del ejecutivo sobre aquel, especialmente de tipo presupuestarias, el uso y abuso del estado de excepción, como finalmente el enfrentamiento disyuntivo entre uno y otro “poder”, concluye, la mayoría de las veces, con el cierre del primero, el golpe o la asonada militar, una y otra cosa finalmente en función igualmente caudillista.

A su turno, el órgano jurisdiccional, carente de representación nacional y por ello dependiente y estructurado políticamente por alguno de los otros dos poderes, habría tendido a convertirse, en tiempos de normalidad institucional, en censor implacable de la gestión tanto legislativa como ejecutiva. Adquiere, y de hecho así lo ejerce, una pretensión totalitaria en nombre de la constitucionalidad —soberanía de la nación o del pueblo— o legalidad que debe o cree defender. Sin tener ni haber recibido representación política alguna, se subroga, por voluntad propia, en la totalidad de la misma, instaurando a su nombre otra clase de poder único, el poder de los jueces.

En tiempos de anormalidad institucional, el poder jurisdiccional dice carecer de competencia —a veces de valor— para anular o invalidar los actos emandados del ejercicio tiránico del “poder total” por parte de un ejecutivo convertido en dictador.

Así la experiencia histórica, una conclusión general parecería imponerse. O bien el sistema o bien el ejercicio de la división del poder político, heredad de Locke o Montesquieu entre los primeros, parecería responder por la crisis bicefala del poder y de la clase dirigente hispanoamericana y por ello del republicanismo presidencialista de la región. Dicha concepción no habría podido ser suficientemente aclimatada, ni genética ni culturalmente, en la antigua América española luego de 180 años de ardua y cruenta vida política.

Una sola consecuencia parece inevitable. La gran tarea política de los países hispanoamericanos —en especial de la Colombia actual— estaría reducida a elaboración de un nuevo paradigma de organización y acción política para la nación y el estado que requerirá la región y el país a partir del año 2000. El Estado que finalmente permita a

una y otro superar más de 200 años de atraso en el orden social, económico y desde luego político.

Si tal ha de ser la tarea en lo interno, las consecuencias en lo externo podrían ser igualmente prevesibles. Resuelto lo primero quizás sea más factible resolver lo segundo y último: la reconstitución de la unidad geopolítica de la antigua América española. Entonces será al menos factible estatuir una "Hispanoamérica para los hispanoamericanos".

Anexo

CUADRO N° 1: SUPERFICIE Y POBLACION ESTIMADA PARA EL MUNDO Y SUS REGIONES SEGUN AÑOS ESCOGIDOS. (Millones de..)

REGIONES	1.776		1.800		1.822/25		1.830		1.850		1.900		1.987	
	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.
AMERICAS	40.0	20.0	40.0	24.0	40.0	34.5	40.0	36.0	40.0	59.0	40.0	145.0	40.0	676.0
U.S.A	2.3	2.5	2.3	5.3	4.5	9.8	4.5	18.6	7.6	23.2	7.7	76.0	9.4	244.0
América Latina & Caribe	28.3	15.4	28.3	15.7	26.0	19.9	26.0	12.3	22.9	23.3	13.6	40.7	11.5	261.1
Brasil & Otros	9.5	2.1	9.5	3.0	9.5	4.8	9.5	5.1	9.5	12.5	18.5	28.3	19.1	170.9
EUROPA	9.6	160.0	9.6	180.0	9.6	218.0	9.6	240.0	9.6	265.0	9.6	390.0	26.8	765.0
OCCIDENTE	49.6	180.0	49.6	204	49.6	252.5	49.6	276	49.6	324	49.6	535	66.81	441.0
Colombia	1.2	0.9	1.1	1.0	1.1	1.8	1.1	1.9	1.1	2.0	1.1	4.3	1.1	30.0
España	0.5	9.9	0.5	11.5	0.5	12.0	0.5	12.5	0.5	15.0	0.5	18.5	0.5	39.0
TOTAL MUNDIAL	133 535	700.0	133 535	720.0	133 535	1 000.0	133 535	1 100.0	133 535	1 200.0	133 535	1 625.0	133 535	5 040.0

FUENTES: McEVEDY C., & JONES R: "Atlas of the World Populations History". Middlesex (UK), 1978.

U.S., Dept. of Commerce, Bureau of the Census: "Historical Statistics of the United States, 1789-1945", Washington 1949

ROSENBLAT Angel: "La Población Indígena y Mestiza en América, 1492-1950". Buenos Aires, 1954.

Cuadro No. 2

SUPERFICIE Y POBLACION ESTIMADA PARA EL MUNDO Y SUS REGIONES SEGUN AÑOS ESCOGIDOS
(Porcentuales parciales occidentales)

REGIONES	1.776		1.800		1.822/25		1.830		1.850		1.900		1.987	
	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.	Kms²	Poblac.
AMERICAS	80.6%	11.1%	80.6%	11.8%	80.6%	13.7%	80.6%	13.0%	80.6%	18.2%	80.6%	27.1%	59.9%	46.9%
USA	4.5%	1.4%	4.5%	2.6%	9.2%	3.9%	9.2%	6.7%	15.4%	7.2%	15.5%	14.2%	14.1%	16.9%
Hispanoamérica	57.0%	8.6%	57.0%	7.7%	52.3%	7.9%	52.3%	4.5%	46.1%	7.2%	27.8%	7.6%	17.2%	18.1%
Brasil & Otros	19.2%	1.2%	19.2%	1.5%	19.2%	1.9%	19.2%	1.8%	19.2%	3.9%	37.3%	5.3%	28.6%	11.9%
EUROPA	19.4%	88.9%	19.4%	88.2%	19.4%	86.3%	19.4%	87.0%	19.4%	81.8%	19.4%	72.9%	40.1%	53.1%
OCCIDENTE	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Colombia	2.4%	0.5%	2.3%	0.5%	2.3%	0.7%	2.3%	0.7%	2.3%	0.6%	2.3%	0.8%	1.7%	2.1%
España	1.0%	5.5%	1.0%	5.6%	1.0%	4.8%	1.0%	4.5%	1.0%	4.6%	1.0%	3.5%	0.8%	2.7%
TOTAL MUNDIAL

Fuente: Cuadro No. 1.

Cuadro No. 3

PERFICIE Y POBLACION ESTIMADA PARA EL CONJUNTO AMERICANO, SEGUN AÑOS ESCOGIDOS

REGIONES	1.776		1.800		1.822/25		1.830		1.850		1.900		1.987	
	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.
AMERICAS	40.0	20.0	40.0	24.0	40.0	34.5	40.0	36.0	40.0	59.0	40.0	145.0	40.0	676.0
SA	2.3	2.3	2.3	5.3	4.5	9.8	4.5	18.6	7.6	23.2	7.7	76.0	9.4	244.0
spanoamérica	28.3	15.6	28.3	15.7	26.0	19.9	26.0	12.3	22.9	23.3	13.8	40.7	11.5	261.1
asil & Otros	9.5	2.1	9.5	3.0	9.5	4.8	9.5	5.1	9.5	12.5	18.5	28.3	19.1	170.9

ente: Cuadro No. 1.

Cuadro No. 4

**SUPERFICIE Y POBLACION ESTIMADA PARA EL CONJUNTO AMERICANO
(Tasas porcentuales)**

REGIONES	1.776		1.800		1.822/25		1.830		1.850		1.900		1.987	
	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.	Kms ²	Poblac.
AMERICAS	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
SA	5.6%	11.5%	5.6%	22.1%	11.4%	28.4%	11.4%	51.7%	19.1%	39.3%	19.3%	52.4%	23.5%	36.1%
spanoamérica	70.6%	78.0%	70.6%	65.4%	64.9%	57.7%	64.9%	34.2%	57.2%	39.5%	34.5%	28.1%	28.8%	38.6%
rasil & Otros	23.8%	10.5%	23.8%	12.5%	23.8%	13.9%	23.8%	14.2%	23.8%	21.2%	46.3%	19.5%	47.8%	25.3%

ente: Cuadro No. 1.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 Dirección de Planación y Desarrollo
 Centro de Información Económica - Social de Bogotá
CIEB
 BIBLIOTECA